

mos simplemente las palabras de Robert Schuman, que hace más de medio siglo, en el año 1950, al referirse a la necesidad de la integración europea decía que era necesaria la unidad para lograr "una Europa donde el nivel de vida se elevará gracias a la agrupación de producciones y la ampliación de mercados que provocarán el abaratamiento de los precios [...] y que reconocía que Europa no se hará de golpe, ni en una obra de conjunto, se hará por medio de realizaciones concretas, que crean, en primer lugar, una solidaridad de hecho".

La asociación con Brasil Paraguay y Uruguay, en el Mercosur, constituyó y constituye uno de los éxitos más significativos de la política exterior argentina de todos los tiempos porque permitió comenzar a construir un espacio de coincidencias políticas, económicas y comerciales, que reposicionaron a nuestra región en el mundo, además de servir de impulso para un proceso de integración más amplio con el resto de los países sudamericanos, como da cuenta la experiencia de los últimos años.

Esta es la conciencia que debemos construir en nuestra región, lograremos nuestro desarrollo si somos capaces de sumar nuestras fuerzas y luchar por nuestro lugar en este marco de la economía globalizada, tanto el otorgamiento de preferencias en la relación Sur-Sur entre los países en desarrollo que propone el SGPC, como la coordinación de una estrategia común entre los países que integramos el Mercosur son dos líneas estratégicas que debemos contribuir a consolidar.

Es por ello que celebro la aprobación del Protocolo para la Adhesión del Mercado Común del Sur al Acuerdo sobre el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO BALADRÓN

**Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

El proyecto de ley que está a consideración de los señores diputados, que ya tiene media sanción del Honorable Senado de la Nación y que seguramente convertiremos en ley al finalizar esta larga sesión, viene precedido de un largo y profundo debate.

Debate diría yo como no ha tenido otra ley en estos últimos tiempos. Han participado, no sólo los señores senadores sino que han expresado su opinión las organizaciones no gubernamentales, los colegios de abogados, los organismos de derechos humanos, representantes de los jueces, de los consumidores, de las universidades, de los académicos, etcétera, sin perjuicio de la campaña casi diaria de los medios de comunicación.

Cada sector se ha expresado libremente ya sea a favor o en contra. No se puede decir que esta ley ha sido producto de componendas políticas a espaldas de la sociedad.

Pero es justo decir también que el que no se ha expresado y que mantiene una calma expectante es el conjunto de los ciudadanos, pues los llamados a marchar para abrazar el palacio de justicia y el Congreso Nacional han tenido muy poco impacto, yo diría que la ciudadanía no acompañó ese llamado, lo que nos indica que estamos en el camino cierto.

Algunos podrán decir que el pueblo en su conjunto no sabe cómo funcionan los organismos que estamos tratando de modificar.

No es cierto, eso es menoscabar la madurez de una sociedad que cuando algo no le ha gustado se ha manifestado fuertemente.

Yo personalmente creo que esto que algunos llaman desconocimiento del pueblo tiene un significado mucho más profundo.

La sociedad advierte que tal como están las cosas, el mejoramiento de la justicia, que es lo que en realidad le interesa, no ha funcionado y que el cambio de rumbo es imprescindible.

No sé si esta ley cumplirá con todas las expectativas que tiene la sociedad, pero bueno, ninguna ley es perfecta, si es necesario deberemos hacer más adelante otras modificaciones o rectificarnos, lo haremos sin temor. Es lo que corresponde. Para eso está el Congreso de la Nación, por eso somos los representantes del pueblo, para dar respuesta al pueblo que nos votó.

Somos peronistas señor presidente, estamos acostumbrados a los cambios, no les tenemos miedo, por el contrario. Está en nuestra esencia. Siempre nos ha tocado modificar estatutos que parecían pétreos en nuestra sociedad y sin embargo lo hicimos, pese a las críticas y a los personeros del derrotismo.

También es cierto, y de esto podríamos hablar horas, las corporaciones casi nunca nos acompañaron.

Es más, muchas veces los cambios que promovimos o propiciamos nos costó que nos echaran del gobierno y nos proscribieran durante décadas. Sin embargo, todavía seguimos luchando y siempre, repito siempre, acompañados por el voto popular que de última y en definitiva es quien nos elige y con quien tenemos obligaciones.

Señor presidente, en esta agotadora pero interesante sesión se han podido oír las diferentes posturas de cada uno de los bloques políticos que componen esta Cámara. Con participaciones de algunos colegas muy enriquecedoras por cierto, aun de aquellos que no están de acuerdo. En fin, son distintas miradas de la realidad.

Señor presidente, quiero señalar que voy a acompañar con mi voto afirmativo juntamente con mi

bancada esta modificación a la Ley del Consejo de la Magistratura, convencido de que si bien no agota totalmente la cuestión, es una modificación importante que seguramente mejorará algunos reclamos de la sociedad a este instituto creado por la reforma constitucional de 1994 que integró el Núcleo de Coincidencias Básicas.

Es justo reconocer que este instituto ha tenido un gran desarrollo en el marco del derecho continental europeo, básicamente en sistemas netamente parlamentaristas. En nuestro país, esencialmente presidencialista, no ha tenido el desarrollo y los resultados esperados por el constituyente reformador a la hora de incorporarlo a nuestra norma fundamental. Mucho menos ha cumplido con las expectativas que la sociedad había puesto en él al momento de su creación.

Es cierto y bueno es admitirlo que el Consejo de la Magistratura, a seis años de su puesta en funcionamiento, se ha convertido en un órgano lento, burocrático, de pesada estructura que razonablemente permite plantear la necesidad de un ajuste normativo para afianzarlo y mejorarlo.

Por eso vamos a modificarlo, no le tengamos miedo a los cambios. No nos preocupemos si tenemos que volver a modificarlo más adelante. Lo único que tenemos que tener presente y para eso estamos acá, es que mientras la sociedad demande mejoras, debemos hacer todos los esfuerzos posibles para hacer eficiente la calidad institucional de la República.

Creo sinceramente que este proyecto de ley avanza mucho en esa dirección.

No digo que es el último y definitivo. Es un intento más para avanzar con seriedad y responsabilidad en la organización y funcionamiento de uno de los institutos constitucionales que tienen como función nada más y nada menos que la enorme responsabilidad de transparentar el servicio de justicia en nuestro país.

Nadie desconoce los permanentes reclamos, no sólo de la sociedad en su conjunto sino también de los medios de información aunque algunos parecen que lo han olvidado, los organismos no gubernamentales, universidades académicas, etc., que nos vienen haciendo respecto del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de la agilización de su funcionamiento.

Creo sinceramente que este proyecto de ley es superador, que propone modificaciones muy interesantes, acorde con los tiempos que corren, muy distintos a los del momento en que fueron creados y estoy seguro que contribuye a un mejor y más eficaz funcionamiento del Consejo de la Magistratura y por ende repercutirá en un mejor servicio de justicia, que es lo que realmente importa y para lo que fue creado.

Pero de la modificación a la ley de creación y funcionamiento del Consejo de la Magistratura no voy a decir más de lo que he dicho. Se han escuchado

voces muy importantes y muy autorizadas que han expresado su opinión en uno u otro sentido y que se han referido en forma muy clara a cada una de las reformas a introducir.

Pero nobleza obliga, señor presidente. No podría yo no referirme al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación que integro en representación de esta Cámara de Diputados.

Formo parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados permanente y estoy muy satisfecho con la labor desarrollada en todo el tiempo en que me desempeñé como vocal.

No voy hacer ninguna disquisición acerca de la conveniencia de que sea permanente o ad hoc. Hay que recordar y reconocer que al momento de sancionarse la Ley del Consejo de la Magistratura existía consenso para que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fuera ad hoc, recogiendo la experiencia de otros países y fundamentalmente del derecho público provincial.

También es cierto que en aquel entonces la Cámara de Diputados tuvo un rol fundamental para obtener una ley mucho más democrática, producto de un gran esfuerzo para lograr el consenso, frente a un proyecto que venía del Senado y que definía una propuesta más hegemónica que la que se obtuvo finalmente.

De manera, señor presidente, que un jurado ad hoc o permanente es una discusión que está desde la génesis misma de esta cuestión.

No me opongo a que sea ad hoc, como ya dije no le temo a los cambios, y si un gran número de ciudadanos y gente especializada cree que el jurado ad hoc funcionará mucho más eficazmente que el permanente, bienvenido sea.

No tengo inconveniente en votar afirmativamente también esta propuesta.

Pero quiero hacer algunas reflexiones, sólo quiero tomarme un breve tiempo si usted me permite para transmitirle a mis pares mi propia experiencia como integrante de ese organismo.

Hace algún tiempo y generalmente por desconocimiento, no de la sociedad precisamente, el jurado fue injustamente atacado a través los medios de comunicación en el marco una serie de pujas corporativas que nada tenían que ver con el funcionamiento del mismo y mucho menos con la función que cumplía, sino con intereses propios de sectores que lo único que buscaban era el predominio de uno por sobre el otro.

Desde que lo integro, nunca estuvo en los medios ninguna crítica a resoluciones del jurado, ya sea cuando removió como cuando repuso en su cargo a un juez. Es cierto y todo el mundo lo sabe, siempre un fallo es discutible, siempre hay gente a favor y gente en contra. Es cierto también que hay intereses que actúan corporativamente según sus propias conveniencias. Atacan u opinan a favor o en contra de una decisión que se toma. No nos ol-

videmos que cuando, en general, se separa a un juez de su cargo o se lo confirma, detrás de él, valga la redundancia, siempre hay intereses que se tocan que se van a manifestar haciendo uso de su poder para crear una imagen distorsionada de la verdad de los hechos.

Soy vocal del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, me siento orgulloso de ello y creo haber cumplido acabadamente con la tarea que me encomendaron mis pares.

No me opongo a la creación de un órgano ad hoc.

Es bueno renovarse e intentar por todos los medios crear las condiciones para el mejor funcionamiento de nuestras instituciones. Probemos. Es la única forma de verificar la eficacia o no del jurado ad hoc.

Lo que sí quiero manifestar, que este organismo cuya única función es la de llevar a cabo el enjuiciamiento de los magistrados acusados por el Consejo de la Magistratura, ha sido víctima permanente de ese accionar burocrático, lento y pesado que es el Consejo de la Magistratura.

Mientras no había causas en el jurado, que es uno de los principales motivos por el cual se lo quiere transformar en ad hoc, el Consejo de la Magistratura tenía más de 130 expedientes en trámite, algunos de varios años, sin resolver.

Es cierto que hubo épocas en que no había causas para tramitar en el jurado y que debimos reducir personal. Personal ya capacitado. Pero también es cierto que hubo otras épocas en que nos mandaban cuatro causas juntas, algunas de notable volumen, como lo fue la del doctor Galeano, y que debimos contratar nuevamente personal.

Cómo se explica esta situación, de no tener causas en trámite en un momento y tener cuatro juntas.

No nos olvidemos que el artículo 114 de la Constitución Nacional nos da un plazo improrrogable para expedirnos, 180 días. Transcurrido ese plazo sin pronunciamiento la causa se archiva sin más trámite.

Por eso, señor presidente, no quiero dejar pasar algunos comentarios que se han hecho. Esa acusación ligera de tiempos sin causas y personal sin trabajo hay que analizarla desde una óptica completa e integral para conocer los verdaderos motivos de la situación. Debemos ser respetuosos.

Esas circunstancias sin responsabilidad del órgano, esa campaña de desprestigio que apareció en todos los medios, como ya lo dije, se debían más que a un anhelo de mejorar la institución a una puja de intereses subalternos corporativos; llegó distorsionada a la opinión pública, generando desconfianza sobre una institución que debió haber sido preservada de cualquier tipo de manipulación o de operaciones periodísticas mezquinas y malintencionadas que lo único que hicieron fue fortalecer y potenciar el descreimiento social y la crisis institucional que todos estamos empeñados en desterrar definitivamente de nuestro país.

Los que pregonaban que el jurado debía ser ad hoc hoy son los más férreos defensores del jurado permanente.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, señor presidente, sólo funciona en tanto y en cuanto el órgano acusador, es decir, el Consejo de la Magistratura, acuse.

Así fue creado y así funciona. No existe otra posibilidad. Así fue concebido cuando fue incorporado a la Constitución Nacional y así funciona en otros países.

No tengo dudas de que la reforma constitucional de 1994, al crear el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, tuvo en mira mejorar la imagen pública de la administración de justicia, fuertemente criticada y notablemente deteriorada por el cuestionamiento a la independencia de los jueces y a la manifiesta falta de eficacia en la prestación del servicio de justicia.

El constituyente reformador respondió eficazmente a un reclamo social, previendo la creación de institutos con jerarquía constitucional a los efectos de dar respuesta acabada al grave problema judicial que se evidenciaba.

Sin embargo la crisis de legitimidad del Poder Judicial no ha sido revertida aún.

Creo que está basada en tres aspectos fundamentales: falta de calidad, imparcialidad y eficacia. Aspectos que sin duda hacen que el servicio de justicia que recibe la comunidad sea deficiente, lento y no cumpla con las expectativas que la sociedad tiene del mismo.

Por último, quisiera decir, señor presidente, que desde su creación el 1º de marzo de 1999 el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación ha llevado a cabo una actividad que, comparándola con la historia constitucional argentina, ha superado ampliamente la actividad que se realizó antes de su creación.

No quisiera aburrir pero es mi obligación destacar y defender la actividad que se ha desarrollado.

A partir de su creación y hasta hoy, el Consejo de la Magistratura, que por ley tiene la misión de acusar o desestimar las denuncias formuladas contra los jueces inferiores nacionales, ha remitido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación 18 acusaciones, de las cuales 3 concluyeron por renuncia de los magistrados. A manera de síntesis y muy breve, señor presidente, quiero reseñar cuáles fueron:

1. Los magistrados renunciantes fueron:

—Doctora Raquel Susana Dloogatz (titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón, provincia de Buenos Aires).

Renunció el 16/12/99.

—Doctor Luis Juan Torres (titular del Juzgado Correccional N° 9).

Renunció el 30/03/2000.

—Doctor Carlos Daniel Loporacci (titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3).

Renunció el 8/03/2001.

2. Los jueces enjuiciados fueron los que a continuación se detallan y en el siguiente orden:

—Doctor Victor Hermes Brusca (titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Fe). Se hizo lugar a la acusación y se removió al juez el 30/03/2000.

—Dr. Ricardo Bustos Fierro (titular del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba). No se hizo lugar a la acusación y por lo tanto no se removió al juez de su cargo el 26/04/2000.

—Doctor Luis Alberto Leiva (titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza). Se hizo lugar a la acusación y se removió al juez de su cargo el 9/05/2002.

—Doctora Mirta Carmen Torres Nieto (titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 37 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se hizo lugar a la acusación y se removió a la jueza de su cargo el 30/05/2002.

—Doctor Roberto Enrique Murature (titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se hizo lugar a la acusación y se removió al juez de su cargo el 29/09/2003.

—Doctor Ricardo Lona (integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta). No se hizo lugar a la acusación y por lo tanto no se removió al juez de su cargo. Sentencia de fecha 18/02/2004.

—Dr. Roberto José Marquovich (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro). Se hizo lugar a la acusación y se removió al juez de su cargo el 8/06/2005.

—Doctor Rodolfo Antonio Herrera (titular del Juzgado Comercial N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Se hizo lugar a la acusación y se removió de su cargo el 4/03/2005.

—Doctor Néstor Narizano (titular del Juzgado de Ejecución Penal N° 3 de Buenos Aires). Se hizo lugar a la acusación y se removió de su cargo el 30/05/2005.

—Doctor Rodolfo Echazú (titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy). Se hizo lugar a la acusación y se removió de su cargo el 7/06/2005.

—Doctor Juan José Mahdjoulbian (titular del Juzgado de Instrucción N° 29 de Buenos Aires). Se hizo lugar a la acusación y se removió de su cargo el 3/08/2005.

—Doctor Juan José Galeano (titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 de Buenos Aires). Se removió de su cargo el 3/08/2005.

3. Actualmente se encuentra en pleno trámite el enjuiciamiento a tres magistrados:

—Dr. Eduardo Luis Fariz (titular del Juzgado Federal de Reconquista, provincia de Santa Fe), con fecha de lectura de sentencia el próximo 6 de marzo de 2006.

—Dr. Tomás J. A. Inda (camarista de la ciudad de Resistencia, Chaco), con fecha de apertura de debate el próximo 13 de marzo de 2006.

—Doctora María Beatriz Fernández (camarista de la ciudad de Resistencia, Chaco), con fecha de apertura de debate el próximo 13 de marzo de 2006).

Como lo podrá apreciar, señor presidente, quizás para algunos no ha sido mucha la tarea realizada, sin embargo disiento.

Creo que si bien no ha sido la que esperábamos, la tarea ha sido muy importante.

Quiero hacer una última salvedad, fundamentalmente para aquellos detractores que muchas veces hablan sin conocimiento de causa.

Toda nuestra tarea en el seno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación está plasmada en nuestros votos. Está escrita. Cualquier ciudadano puede ver y analizar, y por qué no juzgar, cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento. Esa es la prueba más acabada de nuestra actividad. Prueba que perdurará en el tiempo.

Quiero advertir también que ninguna resolución del jurado ha sido criticada por no ajustarse a derecho o por violar preceptos constitucionales. Se puede no coincidir con las decisiones tomadas, con la opinión de algunos de sus integrantes, respetables por cierto, pero lo que no se podrá decir nunca es que desde ese organismo, hoy cuestionado, se haya vulnerado o violado norma legal vigente alguna que haya puesto en peligro principios, derechos y garantías consagrados constitucionalmente. Fundamentalmente, atendiendo la ardua y enorme responsabilidad que uno tiene cuando asume un compromiso de tal envergadura como es juzgar la conducta de un juez de la República.

Por todo esto que acabo de expresar, señor presidente, voy a votar afirmativamente el proyecto de ley en su totalidad, voy a seguir el devenir de los acontecimientos y el tiempo será el único que nos podrá decir si estamos equivocados o no.

Quiero pedir disculpas si me he extendido en mis manifestaciones, pero, cuando asumí la responsabilidad de representar a la Cámara de Diputados de la Nación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, lo hice con toda convicción, con cierto temor realmente, no es una tarea simple, como ya dije, decidir sobre la conducta de los magistrados, pero lo hice con fe y seguro de no traicionar mis convicciones. Estoy muy conforme con los resultados obtenidos.

Tengo un gran afecto a esa institución. Me he sentido muy bien tratado, aun en épocas en que ser político era mala palabra y en las que “el que se vayan todos” era una cuestión de rutina. Siempre me sentí respetado y considerado, de manera tal que me liga al jurado una relación no sólo afectiva sino que también logré en lo personal una experiencia inolvidable en una actividad que nunca había realizado y que nunca estuvo en mis planes.



Por todo ello, señor presidente, no podría terminar estas consideraciones si no hiciera un reconocimiento expreso y público a todo el personal del Jurado de Enjuiciamiento en general, y en particular a los empleados y funcionarios de la Secretaría General. Desde la Secretaría General hasta el más humilde de los colaboradores, pasando por el secretario letrado, prosecretario jefe, prosecretario administrativo, escribiente, ordenanzas, etcétera, puedo olvidarme de algún cargo y pido perdón por ello, pero para todos mi más sincero agradecimiento y el reconocimiento al desarrollo de una tarea eficaz e idónea en el transcurso de todo este tiempo. Realmente un grupo humano excepcional que ha soportado estoicamente en estos últimos tiempos toda una serie de comentarios injuriosos e injustificados, que afectaban no sólo a sus personas sino a sus familias, y que a pesar de todo hasta el día de hoy siguen trabajando con el mismo empeño de siempre.

4

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BECCANI

#### **Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

##### **I. Introducción**

La independencia del Poder Judicial es el valor institucional por excelencia de todo Estado de derecho, no puede concebirse una función judicial garantista cuando la misma se halle sujeta al poder político. El ejercicio democrático de este último reclama la defensa de la independencia del Poder Judicial. Sin ella, dicho poder pierde su esencia como uno de los poderes del Estado de derecho.

Siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de América, los constituyentes de 1853/1860 establecieron que la función jurisdiccional estaría investida en uno de los poderes del Estado, con un diseño político-institucional independiente, instituyendo a la Corte Suprema de Justicia como cabeza del Poder Judicial y tribunal de las garantías constitucionales. De allí que el actual artículo 108 no modificado establece desde 1853 que "el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación".

##### **II. La reforma de 1994**

El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento fueron creados por la reforma constitucional de 1994. Allí se redujo el papel de los órganos de representación popular en los procesos de selección y remoción de los jueces nacionales de instancias inferiores. Se acotó la posibilidad de de-

cisión del presidente, al limitarlo a elegir entre una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, como consecuencia de un concurso.

En el marco de la Convención Constituyente se realizaron importantes innovaciones en el tema de la designación y destitución de los magistrados del Poder Judicial. Mas, al examinar la forma como fue reglamentado el Consejo, se ven atribuciones tan vastas como las establecidas en el artículo 114 del texto constitucional, que dispone lo siguiente:

"El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

"El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

"Serán sus atribuciones:

"1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a la Magistratura inferiores.

"2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.

"3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

"4. Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.

"5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente.

"6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia."

Nótese que la redacción del texto es un tanto amplia (la que fuera regulada por ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura 24.937, rectificada por la ley 24.939 y modificada por la ley 25.669) en cuanto a las atribuciones y al funcionamiento del órgano. Es que para lograr el mentado equilibrio de poderes, y por sobre todo la independencia respecto del Poder Judicial, las atribuciones del Consejo de la Magistratura deberían limitarse a intervenir en el proceso de selección de los magistrados y en su destitución, lo cual exige una organización simple, ágil, a partir de sus reglamentos internos, pero por sobre todo "transparente".

##### **III. Reforma del Consejo de la Magistratura**

###### **A. Aspectos generales**

El proyecto de reforma presentado por la senadora Fernández, sin el tiempo de debate y partici-

pación previa de todos los sectores que integran tanto el Consejo de la Magistratura como el Jurado de Enjuiciamiento, adolece de la transparencia político-institucional necesaria con la que por su trascendencia merece ser estudiado.

A simple vista se observa la pretensión de plantar la hegemonía del partido gobernante en el contralor del órgano constitucional. cuyo fin es proponer la designación de magistrados, y juzgarlos por el mal desempeño de sus funciones. Pretendiéndose que los partidos en general tengan una representación mayoritaria, disminuyendo el número de representantes de los jueces y de los abogados. De esta manera, el poder político tendría una mayoría absoluta, produciéndose así un gravísimo cercenamiento de la letra y espíritu que los constituyentes de la reforma constitucional de 1994, han pretendido. Toda vez que la proporcionalidad en todos los estamentos (jueces, abogados y legisladores), requerida por la Carta Magna, tiene por objeto impedir que cualquiera de ellos detente el poder por sí solo. Estas son algunas de las cuestiones —entre otras más— que tiñen de gris oscuro el proyecto presentado.

El oficialismo ha utilizado una serie de argumentos tan variados, forzados, y hasta en cierto modo ingenuos, como para justificar una reforma encubierta del texto constitucional. Es decir, proponer el desequilibrio del sistema de frenos y contrapesos que los constituyentes de 1853/1860 y 1994 han consolidado, a fin de mantener el equilibrio de los tres poderes del Estado que garantizan el pleno goce de los derechos y garantías, y el Estado de derecho para la Nación Argentina.

Toda modificación legislativa de tales temas debe hacerse con la efectiva y activa participación de todos los estamentos involucrados en la misma (magistrados, legisladores, abogados) y aquellos representados en nuestra Carta Magna reafirmando el modelo institucional de gestión participativa y de constitucionalismo jurídico moderno, para legitimar toda decisión en la emisión de las normas que no sea sólo lo formal sino también lo sustancial. Así concretaremos todos un verdadero Estado de derecho constitucional.

El poder político tendrá hegemonía para administrar los recursos y ejecutar el presupuesto del Poder Judicial, designar y remover jueces, reasumiendo facultades que fueron expresamente limitadas por la reforma de la Constitución Nacional de 1994. Mas no debemos dejar de lado que esta última establece que los legisladores no pueden decidir sobre materias sustanciales que la Carta Magna ha reservado para sí, como garante del constitucionalismo contemporáneo. No debemos olvidar que los artículos 114 y 115 del texto constitucional deben armonizar con los artículos 53, 110 y concordantes del mismo texto.

El proyecto de reforma tiende a que el sector político concentre el poder tanto en el Consejo de la

Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento, bajo el argumento de una reforma que reduce en forma considerable el número de integrantes de las diversas categorías, mas concibiendo que los poderes Legislativo y Ejecutivo mantengan la mayoría, que actualmente no la tienen. Además, la modificación de la ley 24.937 con las reformas de la ley 24.939 (artículo 2º) para establecer una representación cuantitativamente igualitaria entre los representantes de los magistrados, de los abogados y de los poderes políticos resultantes de la elección popular. Atentando contra el nuevo esquema constitucional de participación ciudadana que convoca a todos los sectores.

El objeto de la reforma parece estar orientado exclusivamente a otorgarle mayorías al segmento político por sobre los demás, y dar de este modo al oficialismo el poder de bloqueo sobre las decisiones del Consejo, en desmedro del mentado equilibrio.

## B. Análisis del proyecto

Tanto la Constitución Nacional como la Ley del Consejo de la Magistratura vigente establecen un equilibrio entre los tres estamentos: el político, el de los magistrados y el de los abogados, que el proyecto de reforma tiende a desequilibrar. De esta manera, ningún aspirante a juez podrá integrar una vacante si el gobierno no está de acuerdo. Ni tampoco podrá ser removido, si cuenta con el apoyo de la Justicia, lo que constituye una flagrante violación de la Constitución. No respeta el principio de equilibrio entre los representantes de los distintos estamentos en la integración del Consejo de la Magistratura, para lo cual no debemos olvidar lo que en su segunda parte señala el artículo 114 de la Carta Magna.

Se desequilibra con seis (6) legisladores más un (1) representante del Poder Ejecutivo, a favor del sector político. Ya que siete (7) de trece (13) responden a este estamento, amén de la falta de elección popular con que cuenta el representante del Poder Ejecutivo. En este orden de ideas, tres (3) jueces tienen mayor representación que dos (2) abogados, tornándose evidente el mencionado desequilibrio, violándose una vez más la Constitución Nacional.

Actualmente, ningún sector tiene mayoría propia, ni poder alguno de veto. Ergo: no pueden bloquear las decisiones del Consejo, por sí mismos. Ahora bien, conforme al proyecto, gracias a la reducción del número de integrantes, el gobierno de turno ampliaría su porcentaje de participación en el Consejo, pasando del actual 25 % al 38 %, lo que le asegura la facultad de vetar. Esta situación se ve altamente agravada si tenemos en cuenta que el partido oficialista cuenta con mayoría en ambas Cámaras (diputados y senadores), y por ello designa cinco (5) consejeros (2 senadores, 2 diputados y 1 representante del Poder Ejecutivo), lo que supone

asegurar el poder del veto al gobierno, violando así el equilibrio citado.

De este modo, con cinco (5) representantes sobre trece (13), se favorecería al partido gobernante, dado que para aprobar una terna de jueces, por ejemplo, se necesita una mayoría especial de dos tercios: ante trece (13) miembros, corresponden nueve (9). Pero con sólo cinco (5) de ellos podrá lograr vetar 1 eventualmente impedir las resoluciones por las mayorías agravadas.

Es menester tener siempre presente que la Convención Constituyente de 1994 incorporó el Consejo de la Magistratura respondiendo a una necesidad de la sociedad argentina que reclamaba, y aun lo hace:

1. Mayor transparencia en el nombramiento de los jueces.

2. Mayor eficiencia en la remoción de los mismos por actos de inconducta.

3. Mayor confiabilidad en la administración "...de lo judicial...", en la resolución de los casos.

Teniendo en cuenta estos parámetros, fijó un modelo de equilibrio que garantizara la transparencia en el acatamiento de estos fines y el "pluralismo en equilibrio", en su composición. Resulta imprescindible no alejarse del sentir ciudadano, respecto de la no dependencia política del Poder Judicial.

## C. Miembros del Consejo

### 1. Atribuciones

Procediendo al análisis de su articulado, el proyecto de reforma prevé como atribuciones del plenario, en su artículo 7º —que sustituye al de la ley 24.937—, inciso 2, el dictado de los reglamentos para el ejercicio de las facultades que derivan de la ley y de la Carta Magna, para garantizar la eficaz administración de justicia, omitiendo la mención que formula la ley vigente "...para la debida ejecución de esas leyes y toda normativa que asegure la independencia de los jueces..."

En ese sentido, incorpora la designación del presidente, además de su vicepresidente, en su inciso 4. Y respecto de la designación de los miembros de las comisiones, reduce la mayoría especial para llevarla a la mayoría absoluta, aumentando de este modo la hegemonía de los agentes políticos y, por consiguiente, disminuyendo el consenso entre sus miembros, conforme al inciso 5.

### 2. Designaciones

En cuanto refiere a las designaciones del administrador general del Consejo, la designación del secretario del cuerpo de auditores, o los titulares de los organismos auxiliares, a propuesta de su presidente, se debería agregar que esas designaciones lo sean por concurso público y oposición, todo ello para garantizar la transparencia e idoneidad en las designaciones (inciso 6).

### 3. Remoción

En cuanto a las causales de remoción de sus miembros, el artículo 7, inciso 14, incorpora al texto primigenio que los representantes del Congreso y del Poder Ejecutivo sólo pueden ser removidos por cada una de las Cámaras y/o por el presidente de la Nación, según corresponda. De este modo, se separan de la competencia del Consejo, transfiriendo la decisión sobre dichos actos a los poderes que representan. Por ejemplo, el mal desempeño refiere a la labor dentro del Consejo, de ahí que resulte exorbitante la facultad conferida a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, para proceder a la remoción de los miembros de sus representaciones.

### 4. Quórum

Es necesario llamar la atención sobre que para sesionar (artículo 9º) la mayoría absoluta coincide con la totalidad de los representantes políticos (6 más 1).

### 5. Presidencia y vicepresidencia

El presidente de la Corte deja de ser el presidente del Consejo, con el objeto de mejorar la función, darle mayor agilidad y eficiencia. Pero una vez más se evidencia un nuevo desequilibrio, con siete (7) representantes políticos lograría la mayoría absoluta del total de sus miembros para designar al presidente. Igual criterio se sustenta con respecto a la elección del vicepresidente.

## D. Comisiones

En este tema, el proyecto efectúa dos modificaciones interesantes: la primera de ellas, la unificación de las comisiones de Disciplina y Acusación en una sola; la segunda agrega la Comisión de Reglamentación. Manteniéndose el número de cuatro (4) comisiones. De todos modos, falta la representación de los abogados, en particular en la de Selección y Escuela Judicial, como sustrayéndolos de la posibilidad de incorporarse al Poder Judicial.

La comisión unificada de Disciplina y Acusación contará con nueve (9) de los trece (13) miembros del Consejo, creando la posibilidad de que no se prorroguen las acusaciones, porque el proyecto propone que la integren jueces, quienes pueden resistirse a votar acusaciones, por sanciones disciplinarias. Por otro lado, dentro de los nueve (9) miembros, dos (2) son senadores y dos (2) diputados, con lo cual no existe transparencia política alguna. Debería especificarse que uno (1) de cada par de representantes (senadores y diputados) represente a la minoría.

Resulta impracticable la propuesta de que el presidente de cada comisión tenga un mandato de un año, reelegible, toda vez que es un período muy breve para desarrollar su gestión institucional.

## E. Magistrados

### 1. Selección. Procedimiento

Respecto de la selección de magistrados y escuela judicial, una vez más se sustrae la representación

de los abogados en el proceso de los primeros, no quedando claro el motivo real de dicha eliminación. En cuanto a la duración total del procedimiento, se propone que no sea mayor de 90 días hábiles a partir de la prueba de oposición. Con posibilidad de que su prórroga no supere los treinta (30) días, sólo en el caso de existir impugnaciones. Por razones de práctica procesal, debería fijarse una prórroga de hasta 60 días, independientemente de la existencia de impugnaciones.

## 2. Acusación

El proyecto resalta que si los tribunales superiores advirtieran la presunta comisión de ilícitos o la existencia manifiesta de desconocimiento del derecho, la información sumaria remitida deberá agregar "haya sido sustanciada sólo para estos casos", garantizándose el derecho constitucional al debido proceso y a la debida defensa.

## 3. Sanciones

Respecto de los magistrados (artículo 7º, inciso 12), sería conveniente que la decisión para su aplicación se mantuviera en dos tercios de los miembros presentes, y no adoptarse por mayoría absoluta de los miembros presentes a efectos de no afectar el equilibrio en cuanto a las decisiones.

## V. Jurado de enjuiciamiento

### 1. Miembros

En lo referente al jurado de enjuiciamiento se reduce el actual número de integrantes de nueve (9), distribuidos hoy equilibradamente entre los distintos estamentos, a siete (7), de los cuales cuatro (4) serán legisladores, un (1) abogado, y dos (2) jueces.

La composición actual de nueve (9) miembros se representa en tres (3) jueces, tres (3) legisladores y tres (3) abogados. Con la reforma, serán cuatro (4) legisladores, dos (2) jueces y un (1) abogado. En donde la concentración política condiciona la independencia del Poder Judicial, ya que la función de juzgamiento de sus magistrados es un tema extremadamente sensible y requiere un equilibrio y una gran objetividad que no se ven traslucidos en el proyecto.

### 2. Remoción

En cuanto a la remoción, cabe formular idénticas objeciones a las realizadas respecto del Consejo de la Magistratura, ya que se vinculan con las funciones del órgano y no pueden ser competentes ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo, por lo que nos remitimos a los fundamentos invocados.

Ahora bien, el proyecto incorpora como segundo párrafo del artículo 25 las causales de remoción de los jueces de los tribunales inferiores, teniendo en cuenta el artículo 53 del texto constitucional las siguientes:

- Mal desempeño de sus funciones.
- La comisión de delitos en el ejercicio de las mismas.
- Los crímenes comunes.

Entre las causales de mal desempeño enumeradas en el artículo 25 del proyecto, es necesario detenerse en tres (3) de ellas:

-Por un lado, resulta inoperante el inciso 2, dada la amplitud de concepto que sustenta, en cuanto refiere al incumplimiento reiterado de la Constitución, de las normas y reglamentos, toda vez que se supone que los jueces actúan "conforme a derecho".

-Por el otro, la amplitud que otorga el inciso 3, en cuanto refiere a "...la negligencia grave en el ejercicio del cargo...", toda vez que se podría llegar al extremo de juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias.

-Por último, el inciso 8, que refiere a "la incapacidad física o psíquica superviviente...", resulta inapropiado incorporarlo como causal de remoción, toda vez que se trata de una causal de cesación en el cargo, pero nunca una causal de remoción.

Es necesario hacer concordar estos supuestos constitucionales con el artículo 110 del mismo texto, que prevé que los jueces conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

## VI. A modo de conclusión

De aceptarse sin objeciones el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, se estaría:

-Consolidando el predominio de una mayoría absoluta en cabeza del poder político de la oposición.

-Anulando la participación de los partidos políticos minoritarios.

-Reduciendo el número de integrantes del jurado de enjuiciamiento, eliminando su carácter permanente.

-Legitimando la no participación de los abogados, indispensables para garantizar un Poder Judicial independiente. El abogado en el ejercicio de su profesión es quien percibe los efectos de una justicia puesta en tela de juicio, ineficiente y dependiente de factores políticos o económicos.

Finalmente, no existirá independencia judicial en ningún sistema en el que la selección y designación de los jueces dependa de la voluntad política de quien ejerza el poder.

5

## INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CARMONA

### Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura

Hemos venido hoy a esta Honorable Cámara de la Nación para tratar el proyecto de reforma integral

del Consejo de la Magistratura venido en revisión del Honorable Senado de la Nación, proyecto que modifica sustancialmente la ley 24.397 y posteriores que lo modificaron.

Quiero hacer notar a esta Honorable Cámara que desde hace mucho tiempo todos los sectores políticos, sociales y ONG se han pronunciado por la reforma de este órgano creado en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, conforme lo disponen los artículos 114 y siguientes de dicha normativa. Que también dicha normativa citada creó el jurado de enjuiciamiento. El legislador no puede estar de espaldas a la realidad, sino que debe percibirla y, en un marco de suma prudencia, modificarla en el plano jurídico para, a través de la función ejemplificadora de la ley, lograr que la sociedad sea en definitiva más feliz.

Señor presidente, en el marco de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia hemos escuchado a diversas organizaciones no gubernamentales que tienen relación o interés en el tema y a sectores relacionados, como la Federación Argentina de Abogados. Todos ellos, señor presidente, han reconocido sin excepción que es necesaria la reforma del instituto jurídico. El punto central para todos estos actores y sectores políticos de la oposición es la reducción del número de miembros del Consejo de 13 a 20, que no me parece serio, pero en razón de toda la tinta que ha corrido sobre el particular resulta conveniente hacer algunas apreciaciones.

La reducción del número de miembros del Consejo no conculca el equilibrio consagrado por la Constitución; el proyecto no sólo reduce todos los sectores o aumenta el poder político; el proyecto, señor presidente, reivindica para los argentinos y los ciudadanos en particular que sus auténticos representantes, los diputados y senadores nacionales, serán parte del mismo en una proporción mínima de 2 por la mayoría y 1 por la minoría. No puedo entender, señor presidente, cómo algunos legisladores no se dan cuenta de que el proyecto lo que hace es reivindicar a los representantes del pueblo como tales, como está establecido en la Constitución: que los auténticos representantes del pueblo somos nosotros y no sectores como el de los abogados, que no se someten a la voluntad popular para ser elegidos. Los colegios de abogados, cuando son elegidos por nosotros, los abogados —y aquí hablo en mi calidad de tal—, no lo son para elegir jueces y sancionarlos, tienen otro tipo de funciones que se acercan más a las gremiales de intereses del sector. Nunca pudo la Constitución Nacional equiparar la voluntad democrática de todo el pueblo argentino a intereses sectoriales; es claro que el equilibrio entre los representantes del pueblo, el Poder Ejecutivo y los intereses sectoriales de jueces y magistrados no quiere decir igualdad.

Señor presidente, yo reivindico la política para los representantes del pueblo que fuimos elegidos en

la forma democrática que la misma Constitución Nacional del 94 estableció a través de los partidos políticos (artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional). En realidad, la reducción de miembros proporcionalmente como lo hace el proyecto lo que propone es lograr agilizar el funcionamiento del mismo, evitando que procedimientos engorrosos y lentos cubran con un manto de impunidad el funcionamiento del órgano y que se diluya la eficacia prevista en la Constitución. Señor presidente, fíjese que de conformidad con el Reglamento General del Consejo de la Magistratura actualmente para poder tratar un asunto sin despacho de comisión se requiere resolución adoptada por las dos terceras partes de los miembros presentes, y que, por otro lado, la inclusión de temas no previstos en el orden del día requiere el voto favorable de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo.

Señor presidente, el pluralismo político y la representatividad de la mayoría de los estratos sociales se logran con jueces probos que surjan de la escuela judicial, cuya reglamentación e importancia es una de las tareas más importantes que debe abordar el Consejo de la Magistratura, a través de la cual surgirán los mejores hombres y mujeres para impartir justicia para el pueblo argentino.

No es cierto señor presidente como se dice por allí también por sectores interesados que con este proyecto se viola la garantía de la justicia independiente en la República Argentina, la misma no se garantiza con el Consejo de la Magistratura sino que está garantizada en la propia Constitución Nacional por el artículo 18 cuando se establece que "...ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley", señor presidente estas son las normas constitucionales que garantizan justicia y su independencia para todos los ciudadanos de la Nación Argentina.

Que este proyecto de ley de reforma tenga aspectos salientes como son la publicidad de todas sus reuniones, la no reelección de sus miembros, la unificación de las comisiones de Acusación y Disciplina, la creación de la Comisión de Reglamentación, fija una buena distribución de los trabajos en los diversos sectores sin establecer la primacía de algunos de estos por sobre los otros, guardando el equilibrio constitucional. Englobado el proyecto en la idea de mejor y más eficiente prestación de justicia, se reduce el número de miembros del Jurado de Enjuiciamiento y por sobre todo no continúa siendo un órgano conformado por miembros permanentes, sino que estos pasan a ser elegidos por el término de seis meses en un sorteo público convocado al efecto.

Señor presidente, a modo de conclusión puedo establecer que lejos está por todo lo expresado este proyecto de ley de contener normas "fascistas o autoritarias", como algunos sectores lo expresan,

hay que evaluar si la misma consigue un funcionamiento eficaz a la altura de las circunstancias y modifica siete años de un funcionamiento lento conajos corporativos. Esta norma además resguarda plenamente los derechos de las minorías políticas, decir lo contrario es desconocer el manejo democrático y el correcto funcionamiento de las instituciones, tal como lo establece la Constitución Nacional y podrán válidamente tener su expresión a través de sus representantes en el cuerpo que seguramente logrará más y mejores jueces probos para impartir más y mejor justicia para todos los argentinos.

6

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CONIT

#### **Detalle de votaciones efectuadas en el seno del Consejo de la Magistratura en el tratamiento de diversos asuntos sometidos a su consideración**

Herrera:

Tratado el 23/9/04

Resolución 372 y 373 2004

Resultado votación: a favor por unanimidad.

Votos a favor: Caviglione Fraga, Cornejo, Gemignani, Gómez Díez, Kiper, Minguez, Orio, Pereira Duarte, Pérez Tognola, Prades, Quiroga Lavié, Rodríguez y Szmukler.

Bonadío:

(Lo que aprobó el plenario es la asignación de la presentación a la Comisión de Disciplina. Todas las presentaciones se han agregado al expediente 285/03, en el cual Pichetto y Yoma presentaron un proyecto de clausura que aún no fue aprobado por la Comisión de Disciplina.)

Acta 13/10/2005

Se sometió a votación si la nueva documentación pasaba a la Comisión de Disciplina o se giraban las actuaciones a la Comisión de Acusación. Se pronunciaron en favor de que sean giradas a la Comisión de Disciplina los doctores Casanovas, Caviglione Fraga, Chaya, Da Rocha, Kiper, Minguez, Palacio, Pereira Duarte, Pérez Tognola, Pichetto, Yoma y Orio, mientras que se inclinaron por el pase a la Comisión de Acusación los doctores Quiroga Lavié, Rodríguez y Szmukler. Por su parte, el doctor Cornejo propuso que el tema vuelva al Comité de Asignación.

Martínez:

Se resuelve:

1) Clausurar el procedimiento por no existir mérito para proseguir con las actuaciones. Votaron a favor: Caviglione Fraga, Cornejo, Da Rocha, Gemignani, Kiper, Orio, Pereira Duarte, Pérez Tognola, Quiroga Lavié. En disidencia: Minguez, Rodríguez, Szmukler.

Ursi:

Se resuelve:

Clausurar el procedimiento por no existir mérito para proseguir con las actuaciones.

Votaron a favor: Caviglione Fraga, Gemignani, Kiper, Palacio, Pereira Duarte, Pérez Tognola, Prades y Yoma.

En disidencia por sus fundamentos: Marcela Rodríguez. En disidencia: Minguez.

Designación como juez subrogante de Montanaro:

Decisión adoptada por la Comisión de Selección de Magistrados. Resolución 445/04.

Votaron a favor: Da Rocha, Gemignani, Minguez, Orio, Palacio, Pereira Duarte y Quiroga Lavié.

En disidencia: Kiper y Pérez Tognola.

Ausentes: Casanovas y Szmukler.

Skidelski:

Resolución 418/04

Desestimación.

A favor: Casanovas, Caviglione, Cornejo, Chaya, Da Rocha, Kiper, Pérez Tognola, Pichetto. En contra: Gemignani, Pereira Duarte, Rodríguez, Quiroga Lavié y Szmukler.

Resolución 419/04

Desestimación.

A favor: Casanovas, Caviglione, Cornejo, Chaya, Da Rocha, Kiper, Pérez Tognola, Pichetto. En contra: Gemignani, Pereira Duarte, Rodríguez y Quiroga Lavié.

Tiscornia:

Acta 5/08/2004

Dictamen acusatorio. Se decidió que el expediente pase a disciplina.

A favor: Gemignani, Minguez, Orio, Palacio, Pereira Duarte, Rodríguez y Szmukler. En contra: Casanovas, Caviglione, Cornejo, Pérez Tognola, Yoma y Kiper.

Casals:

Dictamen acusatorio.

A favor: Casanovas, Cornejo, Rodríguez y Szmukler.

En contra: Caviglione, Chaya, Da Rocha, Gemignani, Kiper, Minguez, Palacio, Pereira Duarte, Prados y Quiroga Lavié.

Favier Dubois:

Dictamen acusatorio 20/04 suscripto por Szmukler, Pereira Duarte, Minguez, Rodríguez y Chaya.

Tratamiento en el plenario. Se sometió a votación nominal el dictamen de la Comisión de Acusación, pronunciándose por la afirmativa los doctores Chaya, Gemignani, Minguez, Orio, Pereira Duarte,



Prades, Quiroga Lavié, Rodríguez Szmukler, y por la negativa los doctores: Caviglione Fraga, Da Rocha, Gómez Diez, Kiper, Palacio Pérez Tognola y Pichetto, registrándose la abstención del señor presidente. En consecuencia, no se alcanzó a la mayoría establecida en el artículo 7º, inciso 7, de la ley 24.937 (t.o. por decreto 816/99). El doctor Quiroga Lavié solicitó que se considere la moción efectuada por el doctor Gómez Diez, con relación al pase de las actuaciones a la Comisión de Disciplina. Sometida a votación la referida propuesta, resultó aprobada.

Ausentes ese día: Yoma y Cornejo. Excusado: Casanovas. Abstención: Petracchi.

7

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DE BERNARDI

##### **Fundamentos del voto afirmativo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Con este proyecto de reforma en el Consejo de la Magistratura, en el cual se contempla una reducción en la integración de ese organismo y se establece que se requerirá una mayoría agravada de dos tercios para la remoción y selección de jueces, a la vez que determina cambios en la conformación del Jury de Enjuiciamiento pero siempre manteniendo la proporcionalidad representativa.

Con mi voto favorable a esta iniciativa, quiero respaldar la idea de que los jueces tengan tres representantes elegidos por el sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados con competencia federal del interior de la República, representando el sentido federalista y justo de las decisiones a adoptar.

Señor presidente, estamos ante un hecho histórico, hoy, aquí tenemos la posibilidad de vencer al Pacto de Olivos, me animo a decir que es la primera vez en muchísimos años que un cuerpo legislativo tiene frente a sí el deber de plantarse con firmeza a las corporaciones arraigadas en nuestra sociedad y costumbre.

Hoy podemos y debemos dar por finalizada una época marcada por el acuerdo firmado entre Alfonsín y Menem, que posibilitó la reforma de la Constitución en el año 1994; podemos y debemos hacer retroceder a las corporaciones, podemos vencer los intereses espurios y el statu quo para mantener las cosas como están. Debemos seguir acompañando el proceso iniciado por el compañero Kirchner, quien en pos de lograr una Justicia independiente ya ha demostrado dar los primeros pasos, logremos que se conforme una Corte independiente, logremos con esta ley que se superen los dolores de ese instituto

creado por la reforma del 94, avalado entonces por la mayoría de los partidos y que tantas amarguras nos trajo a los argentinos.

Muchas voces se han alzado en oposición a este proyecto, pero ningún proyecto alternativo se ha presentado, ya sea por pereza intelectual o porque no saben lo que quieren, entonces pregunto yo: hasta qué punto, todos aquellos opositores a este proyecto quieren lograr y hacer una mejor Justicia, ¿o es más cómodo y conveniente tener una Justicia subordinada y sujeta a los principios del Pacto de Olivos? Señor presidente, con esta nueva composición propuesta para el consejo se avanza en pos de lograr una mayor participación de los órganos resultantes de la elección popular, y plantea un equilibrio en el que se respeta la voluntad de la ciudadanía, como corresponde a un sistema republicano y democrático, esta medida propuesta a adoptar debemos de acompañarla para seguir trabajando en la reforma integral de la Justicia, con la que se intenta pagar una deuda adquirida con los tres poderes del Estado y con la sociedad.

8

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA FIOLE

##### **Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

El estudio de la reforma del Consejo de la Magistratura significa en la actividad legislativa la toma de una posición ética política respecto de las políticas públicas de administración de justicia.

Distintas son en el mundo las posiciones que pueden adoptarse de: ¿cómo y a qué intereses de poder se beneficia al diseñar una política pública en materia judicial? Distintos modelos están en práctica pudiendo pensarse desde la elección por el voto popular de los jueces, la designación por parte de los órganos constituidos del Estado de Derecho, los sistemas mixtos, etcétera.<sup>1</sup>

Cada Estado, en uso pleno de su soberanía y su autodeterminación, a través de los poderes constituidos en el marco de la legalidad y la legitimidad que le otorga el Estado de derecho, planifica y gestiona qué tipo de Justicia quiere para sus ciudadanos. Este acto político-jurídico se constituye en un acto de soberanía primaria delegada al Poder Legislativo.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bielsa Rafael y otros, *El Consejo de la Magistratura en la Legislación comparada*, "La Ley" 16-25-IX/96 y XI/96

<sup>2</sup> Saques, Néstor P., *Elementos de derecho constitucional*, Ed. Astrea, Bs. As., 1997.

En este sentido y a través de los estudios realizados sobre el sistema judicial en la Argentina, si bien significó un nuevo modelo el Consejo de la Magistratura tras la reforma Constitucional de 1994, son varias las carencias<sup>3</sup> que como legisladores debemos hacernos cargo de subsanar. Algunas por la reforma de esta ley, pero otras son determinadas por las condiciones estructurales del sistema.

¿Quién accede a la Justicia, como y en qué forma es tratado el ciudadano? Este es uno de los tópicos que determinan nuestra posición en políticas públicas en materia judicial. ¿Cómo y quién elige, remueve, sanciona, gestiona los recursos del Poder Judicial? Este es un punto clave que determina qué tipo de sociedad pensamos. La disyuntiva se presenta cada vez más clara: una sociedad para más o para menos.

Tras la reforma de 1994, los legisladores debemos pensar los mejores mecanismos para asegurar a todos el acceso, uso, goce y permanencia en los derechos y garantías. Es nuestra responsabilidad, respetando el mandato constitucional, convertir lo formal en real y que cada ciudadano en cada lugar del país pueda acceder a reclamar sus derechos para que los mismos se hagan efectivos en su vida cotidiana. De lo contrario vaciamos de contenido el sistema democrático, repitiendo la vieja lógica de la ciudadanía formal que solo incluye a los que pueden acceder al poder. Desmitificar la justicia y los circuitos internos de los grupos que funcionan en la oscuridad del poder, es nuestra obligación ética.

Una justicia ciega sólo escucha a quienes pueden llegar hasta ella, convirtiendo el acceso a la justicia en una ficción y como consecuencia en un elemento estructural de la exclusión social y política.

Es así que reafirmamos, como lo plantean algunos constitucionalistas, que el poder originario reside en el pueblo y la delegación legislativa que nos impone el artículo 114 de la Constitución Nacional se constituye en una interpelación a partir del mandato constitucional con la consecuente creación del Consejo de la Magistratura. Para hacernos cargo de diseñar las políticas públicas en la selección de jueces y la administración del Poder Judicial no podemos eludir las garantías constitucionales y la división republicana de poderes.

División de poder no significa desligarse del poder originario, sino la no intervención, la autonomía en la decisión de los jueces. Clara muestra se ha dado de la intencionalidad democrática a partir del decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de jueces.

Compartimos la necesidad de acercar la justicia al justiciable, como uno de los modos de hacer efec-

tivo el principio de igualdad ante la ley de todos los seres humanos, y nuestra forma de intervención es fijar dentro del Consejo de la Magistratura el perfil de jueces y de administración de justicia que queremos.

La práctica democrática se construye con consensos y discensos, en los encuentros se fijan las políticas de Estado.

La reducción de miembros que algunos sectores presentan como un problema y como un obstáculo en el avance del proceso de democratización de la justicia, devela falacias y agudiza estrategias autoritarias y corporativas.

En primer lugar, para el logro de las mayorías, son necesarios los acuerdos de distintos sectores, por lo que el Consejo no pierde su carácter intersectorial. Un solo sector no puede tomar decisiones, lo que implica una falacia, mentira hipotética, de una supuesta estrategia hegemónica de poder.

Preocupa en los dictámenes y publicaciones, el supuesto "avance del poder político" y la disminución de los miembros de las corporaciones judiciales, de abogados y académicos. Si el poder popular y la soberanía residen en los órganos elegidos por el pueblo en elecciones periódicas, garantizadas y libres. ¿Quién de los actores tiene más legitimidad de origen? Sin dudas el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No podemos discutir aquí la legalidad y la legitimidad de estos órganos base del sistema democrático y del estado de derecho. Si, en todo caso, pudiésemos pensar qué grado de representación tienen y a quién representan y cuál es el grado de legitimidad ante el pueblo de la Nación de las otras organizaciones sectoriales, que aun así y hasta que no se produzca una reforma constitucional, no es menester discutir en su legalidad. Si, permitimos pensar en la legitimidad de los intereses que representan.

Creemos que los actos de gobierno y los actos humanos son actos políticos, por lo que resulta ficticio pensar que un académico, un diputado, un senador, un abogado o un juez en un órgano colegiado no va a pesar desde un lugar político en la toma de decisiones.

Años oscuros remontan a ocultar lo político de los actos humanos. Sostenemos la legitimidad de lo político en el hacer de la cosa pública y reivindicamos el lugar de la práctica política en el Estado de derecho y la democracia. ¿Qué otros intereses están ocultando los que se presentan como asepticos?

Resulta falaz la desaparición del principio de minorías ya que encuentran un lugar de representación en ambas Cámaras.

Es por todo ello que creo que esta reforma constituye un paso importante en la construcción de un modelo de justicia que mantenga los equilibrios, permita articulaciones y consensos para la toma de decisiones, y que, fundados en el poder que los legisladores tenemos delegado por la voluntad popular y en el caso por poder originario constituyen-

<sup>3</sup> En *Ciudadanía, marginalidad y reforma política*. Investigación del Centro de Estudios Políticos y Sociales. Fundación Futuro Solidario 2003-2005.

te, trabajemos por una justicia para iguales en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho democrático.

9

# INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GALANTINI

## Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura

Churchill decía que la guerra es un tema tan serio y tan preocupante que no podía quedar solamente en manos de los militares. Creo que el mismo concepto es aplicable al tema de la administración de justicia, y por ello no puede quedar sólo en manos de los abogados. Así que voy a expresar mi opinión sobre el asunto que estamos debatiendo desde mi punto de vista de ciudadano lego, lo que no significa que no haya leído textos escritos por juristas ya que era la única manera de informarme sobre el tema, sino que voy a expresarme en un estricto lenguaje cotidiano y no en la jerga de los abogados, muy rica en alocuciones en latín y fórmulas sacramentales, pero inentendible para el ciudadano común.

Es evidente que esta cuestión de los sistemas de designación y remoción de los jueces es un tema muy polémico, porque parece que todos los sistemas conocidos tienen en común que son merecedores de críticas por igual. Esto parece indicar que el Consejo de la Magistratura es una institución todavía en evolución, aun en los países donde la institución existe desde hace muchísimo tiempo, ya que incluso los consejos europeos no han dejado de sufrir profundas modificaciones, algunas en los tiempos más recientes.

Todos los aspectos del Consejo de la Magistratura se siguen discutiendo en el mundo jurídico: si debe estar dentro del Poder Judicial, ser un órgano extrapoder, o un auxiliar del Poder Ejecutivo; cuántos deben ser sus integrantes, cómo se los debe designar; en qué proporciones cada sector debe estar representado.

La composición del Consejo de la Magistratura es, tal vez, el aspecto más controvertido. Basta repasar las actas de la Convención Constituyente de 1994 para advertir que, justamente, la imposibilidad de lograr consensos en este punto fue el elemento definitorio para delegar esa decisión en el Congreso de la Nación.

Siendo así, el debate que se generó a partir de la presentación de este proyecto del Poder Ejecutivo, resulta absolutamente lógico, y sería altamente constructivo si no fuera porque hay algunas posiciones críticas que no son sinceras, que evidencian un interés oculto muy distinto del que se pregona.

Digo esto porque muchas de las voces críticas que salieron airadamente a atacar el proyecto invocando la defensa de la independencia del Poder Judicial, en realidad son posturas políticas o corporativas: las primeras utilizaron la oportunidad para tratar de sostener las más apocalípticas teorías sobre las puestas pretensiones de hegemonía del presidente de Nación; las segundas, en tanto corporaciones, sólo están defendiendo sus propios espacios de poder. Pero ninguna de las dos está verdaderamente interesada en encontrar una regulación de la institución Consejo de la Magistratura que contribuya a revertir la pérdida de la confianza pública en el sistema judicial.

Estoy diciendo que no he podido advertir en ninguno de los sectores más detractores de este proyecto, que hagan una crítica de buena fe, o, para decirlo como un ciudadano común, creo que hay "mala leche", o sea, malas intenciones.

La prueba de lo que estoy afirmando está en el punto en que se centró la embestida: "Se pretende politizar el Consejo de la Magistratura", dicen. Y esa politización se daría, según los acusadores, por la proporción de "la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular" (como reza el artículo 114 de la Constitución), en desmedro de la representación de jueces y abogados.

El "sacrilegio" que cometió entonces el Poder Ejecutivo consiste en el intento de desbaratar un Consejo de la Magistratura de base corporativa, acercándolo más dentro de lo que hoy por hoy permite nuestra Carta Magna a una institución de base popular. Porque lo innegable es que los sectores más encrespados con el proyecto son aquellos que todavía no han sabido, o no han querido, entender que sobre lo que estamos legislando es el "servicio de justicia", que, por ser un servicio que está destinado a la sociedad y con carácter de público, es un hecho social y político. Y, siendo así, todos estamos o debemos estar interesados en una mejor justicia, no sólo los estamentos técnicos.

Por eso es importante la participación del poder político en el Consejo, que no es lo mismo que la partidización de la Justicia, como se quiere hacer ver.

Los que pretenden una mayoría de representantes "no políticos" se olvidan que la ausencia de representantes del pueblo en los Consejos más difundidos no ha impedido la fuerte politización de éstos; se olvidan que el corporativismo es tan peligroso como la partidización, porque las corporaciones se eligen a sí mismas y porque no siempre sus intereses coinciden con el interés general, el de la sociedad. Se olvidan también que la partidización no ha sido el único mal de la Justicia, que la ineficiencia y la corrupción la afectan igualmente.

Los que pretenden un sistema corporativo mediante un órgano integrado con exclusividad o preeminencia por actores vinculados al Poder Judicial (jueces y abogados), en una suerte de "hermafroditismo judicial" como alguna vez lo llamó el jurista Cafferata

Nores, le quitan al Consejo la legitimidad de origen democrático que nuestra propia Constitución exige cuando habla de "la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular".

Vale la pena recordar aquí que cuando se aprobó en España la segunda reorganización del Consejo General del Poder Judicial en 1985, cuando los representantes de los magistrados pasaron a ser nombrados en su totalidad por las Cortes, se fundamentó la reforma en que, al recaer en las Cámaras legislativas el nombramiento de los vocales del Consejo, se dignificaba todavía más a dicho órgano y sus miembros obtenían una legitimación aún mayor, siendo elegidos por los únicos representantes de la soberanía popular, investidos así los consejeros de la legitimidad popular exigida por los postulados del Estado social y democrático de derecho instaurado por la Constitución española.

También en Francia la composición del Consejo Superior de la Magistratura generó arduos debates desde su incorporación constitucional en 1946, y luego de varias reformas triunfó la postura de una mayor injerencia de representantes de los órganos políticos, porque "como se argumentó— si se hace del Consejo un órgano reclutado entre los magistrados mismos y elegidos por ellos, se corre el riesgo de restablecer "cuerpos judiciales", un Estado dentro del Estado. Tanto es así que la reforma constitucional de 1993 modificó de manera importante la composición del Consejo, integrado por el presidente de la República, por el ministro de Justicia, por cinco magistrados judiciales y un magistrado del Ministerio Público, por un consejero de Estado, designado por el Consejo de Estado, y por tres personas distinguidas que no pertenezcan al orden judicial ni al Parlamento, nombradas respectivamente por el presidente de la República, por el presidente de la Asamblea Nacional y por el presidente del Senado.

Ni qué hablar del sistema norteamericano, que si bien no tiene un órgano como el Consejo de la Magistratura, vale la pena traerlo a colación, porque de lo que estamos discutiendo es de la mayor o menor injerencia de los sectores políticos. Y porque el modelo norteamericano demuestra que aun cuando el sistema de designación sea eminentemente político, no es ese sistema en sí mismo el que perjudica la credibilidad del Poder Judicial, sino que ese daño se produce cuando los magistrados—cualquiera fuera el sistema de designación—no logran despegarse de la lealtad al partido o las personas a quienes deben su nombramiento.

En los Estados Unidos, en la selección de los jueces no sólo participan el presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, los líderes políticos locales, los partidos políticos, etcétera, sino que evalúan al candidato el FBI, el Comité de la Justicia Federal de la Asociación Americana de Abogados, los organismos no gubernamentales (*lobbies*) que tienen como objetivo el control po-

pular del Poder Judicial, y el propio Senado, que es quien debe prestar consentimiento al candidato propuesto por el presidente y analiza sus antecedentes jurídicos y políticos.

Entonces, creo que es muy atinada y muy oportuna para esta discusión la opinión del jurista Miguel Angel Ekmekdjian, que me voy a permitir leer: "La intervención de ciertos ingredientes políticos en las designaciones no es mala en sí, si luego de su nombramiento los magistrados dejan a un lado las mezquindades y asumen, como corresponde, las únicas lealtades legítimas, esto es, a las instituciones republicanas, en lugar de encerrarse en equivocadas lealtades personales a los hombres o grupos que los han llevado a esas funciones".

En resumen, he podido observar que en todo el mundo la tendencia es ampliar la representación política en los sistemas de designación de los jueces, porque en el sistema democrático los poderes del Estado emanan del pueblo y el carácter de representantes del pueblo soberano lo ostentan los legisladores.

Hoy por hoy ésa es la composición más cercana a una institución de base popular, ya que creo que los miembros "políticos" que integren el Consejo son los únicos que pueden llevar a su seno la visión del ciudadano común, no comprometido con el estatus judicial, velando por que en la medida de sus posibilidades se elijan los mejores jueces, quienes, más allá de sus conocimientos del derecho, demuestren idoneidad, aptitudes y sensibilidad para disponer sobre nuestros bienes y nuestras vidas, garantizando como corresponde nuestros derechos personales consagrados por la Constitución.

Y esto no lo digo yo, no es sólo la opinión de este médico que poco sabe de derecho. Lo lei en un documento de trabajo elaborado por la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino. Dentro del capítulo titulado "Perfil o idoneidad exigibles a los jueces a designar", se incluyó un apartado relativo a la "Idoneidad ética", con el siguiente contenido: "No cabe duda que en buena medida la 'autoridad' de un juez descansa no tanto en sus conocimientos jurídicos sino en esa idoneidad ética que la sociedad reconoce y exige del que se va a desempeñar como juez. Asimismo se requiere que aquel que vaya a desempeñarse como juez cuente con una buena reputación por su integridad; compromiso con la justicia y la dignidad de las personas; carezca de pomposidad y tendencias autoritarias; conozca las normas éticas implícitas en la misión de juzgar; tenga convicción ética de su rol, capacidad para escuchar y vocación de servicio; sea: honesto, estudioso, imparcial, independiente, responsable, ponderado, ecuaníme, íntegro, perseverante, valiente, respetuoso de los otros, puntual, paciente, y conciliador...", agregándose en orden a los "modos de acreditación de esta idoneidad", que la identidad ética personal tiene que ver con el modo en que se asume la vida, y a los fines de

reconocer y valorar tal identidad importan las opiniones de los otros".

Creo que esos "otros" a que se refiere el documento, somos los que no formamos parte de la corporación judicial. Y aunque lo deseable sería en una futura reforma constitucional avanzar aún más hacia una participación directa de la ciudadanía en el Consejo de la Magistratura, tal como ya existe en la provincia de Chubut, donde ciudadanos legos integran el órgano, por ahora, con esta Constitución actual, sólo es posible escuchar la voz de esos "otros" a través de sus representantes, los legisladores.

De tal modo, pido a mis pares que tanto critican este proyecto, que dejen de lado sus propios intereses partidarios, que dejen de demostrar ellos mismos que también son políticos, no sólo nosotros que los políticos podemos y sabemos y debemos participar con responsabilidad y con "equilibrio" en un órgano como el Consejo de la Magistratura.

Porque la brecha que existe entre la sociedad y la Justicia no podrá acortarse si no miramos un poco hacia el gran ausente en este debate: el destinatario del servicio de justicia, el ciudadano.

10

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GINZBURG

#### **Fundamentos del voto negativo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Los fundamentos de nuestro voto negativo son tan abundantes como los atropellos permanentes que viene sufriendo la República en el último tiempo. Nos encontramos hoy debatiendo un proyecto que denota graves inconstitucionalidades y desnaturaliza los órganos creados por la Reforma Constitucional de 1994 para asegurar la independencia del Poder Judicial.

En primer lugar, el tratamiento de esta reforma crucial se está efectuando en período de sesiones extraordinarias, a pesar de que no se trata de un tema que requiera tratamiento urgente. Por el contrario, es una cuestión de delicado interés institucional que merece un cuidadoso análisis y requiere consulta con los diferentes sectores de la comunidad. Se ha evitado que la sociedad realice el debido debate, se ha evitado difundir la importancia de la cuestión. Se pretende aprobarlo haciendo uso de la mayoría parlamentaria del bloque oficialista. Pareciera que la democracia argentina no sabe de debates racionales, sino del peso de la mayoría.

La Justicia sigue siendo vista como un botín que debe quedar en manos del partido de gobierno. Y, sin embargo, se trata de un tema central para el Estado de derecho.

Como indicara la doctora María Angélica Gelli en ocasión del reciente debate organizado por la Mesa de Diálogo Argentino, "la Justicia es una cuestión de todos. Ojalá el Gobierno pusiera este tema en debate en los medios".

El debate profundo sobre el tema se produjo hace doce años, en ocasión de la Convención Constituyente de 1994. Paradójicamente, el espectro político coincidió ampliamente en la idea de crear el Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento con el fin primordial de reforzar la independencia y credibilidad del Poder Judicial. En este sentido se manifestaron convencionales de todos los sectores políticos, como Pose, Saravia Toledo, Mestre, Alfonsín, Falbo, Hitters.

Hoy, a pesar de esta actitud de ocultamiento del gobierno, todo el espectro de organizaciones no gubernamentales, colegios públicos, asociaciones de abogados, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación se han manifestado en contra del proyecto oficialista de reforma, expresando enorme preocupación por las implicancias que podría tener.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Sociedad Porteña de Penalistas, la organización Human Rights Watch (HRW), han manifestado rechazo y preocupación ante esta reforma que es inconstitucional. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de Buenos Aires han promovido una acción declarativa de inconstitucionalidad contra ella.

Y yo me pregunto cuál ha sido la actitud del gobierno en el tiempo inmediatamente anterior al tratamiento del proyecto. En los últimos tres meses ha salido a la caza de votos que aseguren su aprobación, para así continuar el camino autoritario iniciado. Porque hacia dónde vamos, si no hacia el autoritarismo, cuando nos encontramos ante un gobierno que aprovecha la confianza depositada por el voto popular para ir carcomiendo la Constitución hasta hacerla inaplicable.

Y cuando sectores políticos se refieren al apoyo de este proyecto como una "prueba de lealtad" que exige el gobierno, yo les recordaría que estamos aquí para ser leales a la Constitución Nacional.

Y para todos aquellos representantes que responden a gobernadores que hoy están atados a los fondos o la obra pública de la Nación, tomo las palabras expresadas por un dirigente político al respecto: "No se puede cambiar calidad institucional por necesidad económica de las provincias" (expresado por el diputado nacional Mario Negri, UCR y publicado por "La Nación", 13/01/2006 en la nota *La crematística kirchnerista*).

Esta reforma no es negociable.

Debemos tenerlo muy presente: hoy nuestra República padece ya un fuerte deterioro institucional.

En los últimos diez años se instauró la costumbre de gobernar por decretos de necesidad y urgencia y leyes de emergencia económica que otorgan superpoderes a los titulares del Ejecutivo. Esto ayuda a que perdamos la memoria de cuáles son los principios republicanos y democráticos. Las encuestas muestran hoy una gran desconfianza de la ciudadanía en la Justicia.

Y si la norma constitucional que es el artículo 114 de la Carta Magna se transforma en letra muerta a partir de la reforma que hoy vamos a votar, será una muestra más de subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo y habremos retrocedido a la situación de la Justicia antes de 1994.

Recordemos cuál era el contexto, el clima en que se efectuaban los debates por la Convención Constituyente del 94: la sociedad estaba ávida de un Poder Judicial independiente y eficaz que garantizara seguridad jurídica con imparcialidad e ideoneidad.

Una de las responsabilidades de los políticos es buscar construir instituciones de calidad, respetarlas y hacerlas respetar: si las instituciones son manipuladas o violadas por los políticos, la sociedad tampoco las respetará.

Por eso, además de sacarse fotos con líderes como Lagos, Bachelet, Tabaré Vázquez, Lula, nuestros mandatarios deberían imitar el respeto institucional que impera en esos países.

El triste acontecimiento del asesinato del policía de Las Heras, Santa Cruz y el lentísimo avance de la correspondiente investigación judicial para esclarecerlo, alerta sobre el estado de gravedad institucional que padecemos. Ante la ausencia de canalización institucional, en la Argentina se han ido instalando medidas de acción directa donde se aplica la ley de la selva. Gana el más fuerte.

Y como expresara quien fue presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, el doctor Horacio Lynch, "nuestros mejores jóvenes ya no aspiran a la Justicia. No es difícil adivinar las causas. Priman el desprestigio y la mala imagen de la institución (así como) la falta de independencia y el inadecuado sistema de selección". (*Desarrollo de jueces*, "La Nación", 15/02/2006.)

¿Tenemos hoy una Justicia independiente? ¿Cuál es la situación del más alto tribunal? La Corte Suprema cuenta con 7 miembros de los 9 que debería tener. Y como no se reduce el número de miembros pero tampoco se cubren las vacantes, en la práctica se creó un sistema de consenso que dificulta enormemente lograr cualquier resolución. La Corte no avanza en la resolución de temas como los miles de amparos por la pesificación de los depósitos bancarios, porque para firmar una sentencia necesita la voluntad de 5 jueces sobre apenas 7 en funciones. Antes, como el tribunal contaba con 9 miembros, se requería el 55% de las voluntades y ahora el 71%.

Para saber si contamos con una Corte Suprema independiente, habrá que esperar a que el alto tribunal resuelva cuestiones como el caso Sosa, ex fis-

cal general de Santa Cruz, la actualización de las jubilaciones mayores de 1.000 pesos y el de la publicidad oficial, planteado por el diario "Rio Negro". La resolución de estos casos testigo dirán cuán independiente es esta Corte respecto del presidente Kirchner.

Voy a hacer una referencia histórica que permitirá vislumbrar cuán grande es la crisis institucional que padecemos y que se verá profundizada con esta reforma.

La Constitución Nacional de 1853, respecto del procedimiento de designación de magistrados, adoptó el modelo norteamericano de la Constitución de Filadelfia, por el cual el Poder Ejecutivo proponía los candidatos y el Congreso, por medio del Senado, prestaba el acuerdo respectivo. El criterio de designación implicaba una elección política. La destitución de los jueces era facultad del Congreso: la Cámara de Diputados acusaba y el Senado sentenciaba.

En la Argentina el resultado de esa designación de magistrados distó mucho del producido por el país del Norte, en donde el Poder Ejecutivo careció de discrecionalidad y su propuesta fue siempre sometida a distintos estamentos.

Aquí el procedimiento aplicado conspiró contra la independencia y legitimó el avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo. El resultado fue una institución debilitada, con grave carencia de imparcialidad, con ciertos jueces sin capacidad técnica y otros que protagonizaron escándalos y actos de corrupción.

Además, el Senado de la Nación, en su reglamento interno, estableció la alternativa de las sesiones secretas de la Cámara, que, aplicada a la aprobación de los pliegos de los candidatos a jueces federales, impidió en los hechos el control de la opinión pública sobre las designaciones y favoreció los acuerdos de repartos partidarios.

El sistema no funcionó, por la influencia política en la nominación de magistrados y por amiguismo.

La gestión del ex presidente Menem produjo un fuerte deterioro del Poder Judicial. En 1990 el gobierno aumentó el número de miembros de la Corte Suprema (ley 23.771) y la hizo adicta. Buena parte de las designaciones de jueces inferiores se habían convertido en moneda de cambio de favores políticos. El modelo de juez bien formado en derecho, capaz de repartir equidad y con fuerte compromiso con valores democráticos y derechos humanos no era usualmente el elegido. Y el juicio político, que debía tramitarse en sede legislativa, era letra muerta.

Todo esto originó en la sociedad civil grandes reclamos de un Poder Judicial con transparencia, honestidad, celeridad, inmediatez, imparcialidad.

Así llegamos al nacimiento del Consejo de la Magistratura, con la reforma constitucional de 1994, que persiguió fundamentalmente la reelección presiden-



cial. El convencional constituyente buscó un modelo alternativo y creó el Consejo de la Magistratura como órgano garante de la independencia judicial.

El equilibrio en la composición ordenado por el artículo 114 de la nueva Constitución no fue casual. Buscó remediar el monopolio de la designación y juzgamiento de magistrados en manos de los sectores políticos.

Se crearon dos órganos independientes: el Consejo de la Magistratura, que tuvo a su cargo la selección de los jueces y la facultad de acusar a los magistrados, suspenderlos en sus funciones y proponer su remoción, y el jurado de enjuiciamiento, que debía juzgar la conducta de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación y resolver acerca de su remoción.

Ya en ese momento los sectores vinculados a la abogacía y a la judicatura hicieron saber su preocupación para que la ley que finalmente regulara el organismo no rompiera el equilibrio entre los representantes de los órganos políticos, de los jueces y de los abogados, que sabiamente habían impuesto los constituyentes.

Recién en 1998 se reglamentó el artículo 114, a través de la ley 24.937.

El régimen introducido en 1994 creó un sistema más racional, menos expuesto al discrecionalismo. Con la incorporación del Consejo y su involucramiento previo en la conformación de las listas de los candidatos a jueces, las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo han perdido el carácter decididamente discrecional que tenían antes. Se pasó a facultades más "regladas", menos absolutas, que aseguraron mayor transparencia y razonabilidad en la designación de los magistrados. El nivel de idoneidad de los magistrados mejoró como resultado del sistema que se instrumentó a partir de la creación del Consejo.

Sobran los argumentos jurídico-constitucionales para rechazar la iniciativa que hoy tratamos. Como ha sido señalado repetidamente, de aplicarse el proyecto oficialista de reforma del Consejo se incurrirá en varias inconstitucionalidades, al romperse el equilibrio en la composición del Consejo y del jury de enjuiciamiento, al excluirse la instancia del juez de la Corte Suprema de Justicia y al aplicarse el nuevo sistema de remoción de jueces propuesto, que junto a la injustificable exclusión de los abogados de la Comisión de Selección, viola el artículo 16 de la Constitución. También en abierta oposición al texto constitucional, el proyecto le restituirá facultades administrativas a la Corte Suprema de Justicia, mientras elimina varias de las incumbencias que la ley vigente le confía al Consejo en dicha materia. Por otra parte, se obliga a que se investiguen las denuncias en un máximo de tres años, encubriendo un plazo de caducidad que asegurará la impunidad.

Porque no creemos, como han manifestado desde el gobierno, que el término "equilibrio" del

artículo 114 pueda dar lugar a interpretaciones subjetivas. Tampoco son creíbles las denuncias injustificadas del presidente Kirchner sobre la existencia de "acuerdos corporativos en el Consejo", porque se trata de acusaciones generalizadas. Si alguien incumpliera con su deber debería ser denunciado y promovida su destitución. No es válido lanzar acusaciones generales y al aire.

Cuando se habla de "demoras en la realización de sus tareas" por el Consejo, se olvida que son los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo los que menos trabajan y los que más faltan en el organismo.

Tampoco vale el infantil argumento de que no deberíamos desconfiar de las buenas intenciones del gobierno. Nuevamente: esta reforma no solo no mejora los aspectos en que el funcionamiento del organismo es perfectible, sino que lo empeora y amenaza enormemente la independencia del Poder Judicial.

En definitiva, ninguna de las excusas utilizadas por el Gobierno puede justificarla.

Y yo me pregunto: ¿es la justicia santacrucense el modelo sobre el cual se pretende hacer basar el funcionamiento de la justicia argentina? ¿Se pretende llevar ese modelo de sometimiento del Poder Judicial al poder político, al plano nacional? Hay sobrados indicios para afirmarlo. En el escaso debate público efectuado hasta el momento sobre este tema, y se me viene a la memoria la jornada organizada por la Mesa de Dialogo Argentino el 7 de febrero pasado, ninguno de los representantes del oficialismo y defensores de esta reforma pudo explicar la compatibilidad de este proyecto con nuestra Constitución y con el Estado de derecho.

Ante proyectos como éste solo cabe recordar los principios básicos sobre los que fue construida la Nación y sobre los que funcionan los países civilizados: el Poder Legislativo no es un instrumento del Ejecutivo, así como tampoco lo es el Poder Judicial. La República necesita la coexistencia de los tres poderes para funcionar y para asegurar la vigencia de las garantías constitucionales. Las democracias se construyen con consenso, no con órdenes verticales.

Los órganos del Consejo de la Magistratura y el jury de enjuiciamiento son perfectibles, pero el proyecto que hoy tratamos no apunta en absoluto a ese objetivo. Los problemas de funcionamiento que tiene hoy el Consejo no se relacionan con el número de integrantes. Algunos se resuelven con reformas reglamentarias y otros obedecen a la conducta reprochable de algunos consejeros.

Hace dos meses conmemorábamos los cien años de la muerte de Bartolomé Mitre, militar, periodista, legislador, escritor, presidente de la Nación argentina. En el siglo transcurrido desde su muerte, la Nación que él presidió en momentos sumamente arduos ha sufrido cambios que la han tornado irreconocible. En las últimas cinco décadas la repú-

blica, la democracia, la libertad de expresión, han corrido graves riesgos.

La reforma del Consejo de la Magistratura y del jury de enjuiciamiento es un tema de Estado, no se le puede dar un carácter político.

Estamos a tiempo. Todavía podemos ponernos del lado de la República y cumplir con nuestro deber de representantes del pueblo de la Nación, legislando para el largo plazo y con amor a la Patria. La República no merece esta reforma.

## II

### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GLOJA

#### **Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Queremos participar del debate, sobre la norma que impulsa la reforma del Consejo de la Magistratura, porque concebimos la misma como un avance del gobierno, dentro del plan de reorganización del Estado y en la búsqueda de una mayor calidad institucional para el país.

La mayor de las críticas que ha suscitado esta modificación que se pretende es la reducción de miembro. La misma encuentra sustento en desburocratizar y agilizar la designación de jueces, como un avance de los procesos que se inicien contra los mismos, así como también ha sido atacado por afirmaciones grandilocuentes, tendientes a descalificar cualquier estrategia de cambio parcial, inadvertiéndose, realmente, la importancia trascendental y necesaria que demanda un cambio en la Justicia.

Parto de la base de que resulta necesario impulsar una profunda reforma del sistema de justicia, en casi todos sus aspectos, y este gobierno ha dado muestras más que elocuentes de tal decisión con la modificación de los miembros que integran la corte de justicia.

La Justicia hoy no ayuda, ni llega a los más necesitados de la sociedad, quienes no tienen posibilidad efectiva de acceder a los tribunales, y si pudieran hacerlo, la ineficiencia del sistema produce tanta lentitud, dilatándose durante años los procesos, quedando inconclusos otros; eso sólo ha generado en la mayoría de las personas un descrédito en la institución.

Lo que este proyecto intenta, es avanzar en la modificación del sistema de justicia.

Hasta 1994 nuestro país mantuvo su tradición americana por la cual a los jueces los elegía el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado. A su vez, la remoción la hacía el Congreso a través del juicio político. Ello sobre la base de que en nuestro sistema, los jueces no sólo aplican la ley sino que la pueden invalidar si la consideran inconstitucional. Por

lo tanto el control institucional cruzado lo deben tener los otros dos poderes al seleccionar y remover a los jueces. En Estados Unidos este sistema parece funcionar de una manera razonable. Acá, no funcionó del todo bien.

"La introducción del Consejo de la Magistratura en nuestro sistema institucional limitó las facultades del poder político en la selección y remoción de jueces. Se agregaron a los procedimientos las representaciones de los jueces, de abogados y académicos. Ese fue su objetivo principal.

"Parece haber consenso en que este sistema de designación de jueces resultó mejor que el anterior. Obviamente que el sistema no es perfecto y que pueden darse casos de favores cruzados entre los consejeros, como se ha denunciado en alguna oportunidad." De acuerdo con lo sostenido por profesionales pertenecientes al CELS.

"Sin embargo, las funciones del Consejo no son sólo éstas. La idea de los constituyentes de 1994 fue mejorar el sistema de selección y remoción de magistrados y además sacar de la Corte Suprema las funciones de gestión administrativa judicial para que se dedicara exclusivamente a dictar sentencias en temas de trascendencia institucional. Para ello, dispuso que el Consejo, con su múltiple conformación, se avocara a muchos de estos temas. Tareas de gestión que estuvieron tradicionalmente en manos de los jueces y que han sido un indicador bastante certero del alto grado de corporativismo con el que termina funcionando hoy, el Poder Judicial. Por ejemplo, bajo el argumento de tener que crear las condiciones para impartir una justicia independiente, por reglamentos propios (firmados por Nazareno, Moliné O' Connor, y el resto) los jueces supremos decidieron no pagar impuesto a las ganancias, ni mostrar sus declaraciones juradas patrimoniales."

Ahora bien, más allá de las loables pretensiones de los constituyentes, el Consejo de la Magistratura durante todos estos años funcionó en forma deficiente. Esto es, no fue capaz de instalar y llevar a cabo reformas judiciales sustanciales que ayudaran a revertir la crisis de legitimidad de la justicia argentina, ni tampoco se ocupó de cosas más profanas como la ampliación del horario de los juzgados, su descentralización, ni equipamiento. A grandes rasgos, el Consejo no trabajó para que la Justicia esté al servicio de los que menos tienen, ni tuvo como objetivo ir despojando de privilegios a la familia judicial.

Las sanciones disciplinarias y el control del funcionamiento de la Justicia brillaron por su ausencia. Y las destituciones sólo se llevaron a cabo en determinados casos donde ya no quedaba otra alternativa. De igual modo no fueron pocas las situaciones en las que se mandó el expediente a la comisión de disciplina para que estudiara cómo hacía para no aplicar sanciones.

También es conocida la crítica de la excesiva estructura del Consejo, donde a partir de un presu-

puesto interesante, los consejeros nombraron demasiados asesores, que lejos de agilizar su funcionamiento generaron mayor desgaste al mismo.

El proyecto de ley en discusión, aunque pueda catalogárselo de parcial, resulta un buen inicio en la larga cadena de cambios que se pretende impulsar desde el gobierno, en el intento de lograr mayor eficiencia, romper con el corporativismo y revalorizar el Poder Judicial en la Argentina. Sabido es que todas estas razones, tal vez por sí solas, no van a producir modificaciones inmediatas, pero también es cierto que todo proceso de cambio conlleva un tiempo en el que se van produciendo las lógicas de funcionamiento.

En la actualidad el Consejo no responde a las exigencias actuales de la ciudadanía. Por ello, la modificación propuesta, en el Consejo de la Magistratura, responde de mejor manera a las demandas sociales de nuestro pueblo; por ello, señor presidente, venimos a apoyar esta norma en la convicción de que tiene que ver con las necesarias reformas estructurales que necesita el país para su definitivo consolidación.

12

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO GIUBERGIA

### **Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos**

### **Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Este miércoles se define en el Congreso de la Nación una instancia que puede socavar las bases del sistema republicano, porque el justicialismo, el presidente Kirchner y su esposa han decidido en esta vorágine hegemónica avanzar sobre el Poder Judicial de la Nación, poder que debe tener la más absoluta independencia para que los ciudadanos de este país puedan gozar y tener las garantías, que sus derechos no serán declarativos sino que se harán efectivos sólo en una República donde se respete la independencia del Poder Judicial y la Constitución de la Nación, que expresa en su artículo 114 que "el Consejo de la Magistratura será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que implique la ley".

Pero vemos que el Poder Ejecutivo de la Nación y el matrimonio Kirchner, quienes en las últimas elecciones no llegaron en el orden nacional a superar el 50 % de los votos y no pudieron tener la mayoría en el Congreso Nacional, pretenden ahora quedarse con el 30 % de la representación política, ya que

de los 6 representantes del Congreso Nacional, 4 serían del oficialismo más el representante del Poder Ejecutivo. Esto nos muestra claramente el avasallamiento hacia la representación política por un lado y hacia la violación del artículo 114 de la Constitución, y desbalancea más aún esta composición en favor del partido oficialista, elimina la representación del tercer partido, como lo propone la reforma que se proyecta, dejando al arbitrio de ese sector temas tan sensibles como son el nombramiento y remoción de los jueces y provoca rupturas al equilibrio que ordena la Constitución.

Es entonces clara la supremacía que tendrán los políticos de turno para designar, remover, bloquear o impedir que se designe o se remueva a los jueces, a la vez que la pretendida reducción y su composición determinará más delegaciones en burocracia con ineficiencia y aumento de los costos operativos; el proyecto de la reforma del Consejo de la Magistratura, rompe el equilibrio de representación de los distintos ámbitos o sectores político, judicial, académico, abogacía).

Voces oficiales afirman que estos temas importan poco a los ciudadanos y por ello avanza en esta línea. Estamos convencidos de que la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y la estabilidad en la garantía de nuestros derechos son temas esenciales que hacen a la seguridad jurídica y a consagrar el desarrollo de una sociedad que no sólo debe medirse en términos económicos financieros.

Se trata de la defensa de las garantías y derechos ciudadanos individuales y colectivos, de la vida, el patrimonio, la libertad, el honor, la dignidad de la persona, evitando que se menoscabe la democracia, la República y el Estado de derecho. La Justicia es de todos y para todos los ciudadanos de esta Nación, no pudiendo ser prenda de los políticos de turno con mayoría ocasionales.

La sociedad argentina, que se ha pronunciado, una y otra vez en favor de la transparencia en el Poder Judicial y que también en reiteradas oportunidades ha repudiado la injerencia del poder político en la Justicia, se ve otra vez groseramente defraudada.

Como decía el general San Martín: "La imparcial administración de justicia es el cumplimiento de los principales pactos que los hombres forman al entrar en sociedad. Ella es la vida del cuerpo político, que desfallece apenas asume el síntoma de alguna pasión y queda exánime luego que, en vez de aplicar los jueces la ley, y de hablar como sacerdotes de ella, la invocan para prostituir impunemente su carácter. El que la dicta y el que la ejecuta pueden ciertamente hacer grandes abusos, más ninguno de los tres poderes que presiden la organización social es capaz de causar el número de miserias con que los encargados de la autoridad judicial afligen a los pueblos cuando frustran el objeto de su institución".

13

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO GOJOLY (R.E.)

**Fundamentos del apoyo del señor diputado al  
dictamen de las comisiones de Asuntos  
Constitucionales y de Justicia en el proyecto de  
ley en revisión por el cual se modifica el número  
de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Mucho se ha dicho y escrito en las últimas semanas sobre éste órgano de gobierno del Poder Judicial previsto en la Constitución Nacional, tan sensible, importante e insoslayable de nuestro sistema de selección y remoción de magistrados, entre otras de sus funciones. La importancia y envergadura de lo que significa el Consejo de la Magistratura, y la acertada modificación en su estructura y funcionamiento que estamos tratando, ameritan la polémica, que no nos asusta ni rehuimos, mas por el contrario la alentamos. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que el debate enriquece; lo que envilece al mismo, en todo caso, es la mentira o la crítica dañina sin fundamentos ni aportes. Pero lo que no podemos ni vamos a permitir, en nombre de una mayoría que nos enorgullece representar, es que se desvirtúen la esencia de las modificaciones propuestas y su utilización política sin fundamentos ni alternativas razonablemente atendibles a la iniciativa oficial en tratamiento.

Quiero poner énfasis en la atribuida "subordinación" que supuestamente pretendería el oficialismo, del que somos parte, del Consejo de la Magistratura para manipularlo a su criterio y ventaja. Públicamente, y con pruebas académicas y científicas contundentes, desafiábamos a cualquiera para que nos recuerde o compare nuestro gobierno con anteriores en la designación de jueces, y la independencia garantizada, demostrada y ejercida por la actual gestión. El contenido de los decretos 222/03 y 588/03 sobre selección y designación de los jueces nacionales constituye un hito innovador extraordinario, real y no declamado, sobre la verdadera voluntad republicana de materializar la auténtica desvinculación del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. ¡Nunca antes un presidente hubo de autolimitarse en sus propias atribuciones para designar a los jueces del máximo tribunal de justicia del país y al procurador general de la Nación! ¡Un ejemplo de conducta digno de ser reconocido, incluso hasta por la propia oposición!

Defendemos la incorporación del Consejo de la Magistratura en la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna, tal como lo contienen la mayoría de los países más democráticos del mundo; pero su composición y funcionamiento actual deja que mucho que desear y ponderar hoy, a la vista de lo que puede mostrar a modo de balance desde su creación a la fecha. Un órgano elefantiásico con mucha gente y pocos resultados. Abultado presupuesto más burocratización e ineficiencia son algunas de sus salien-

tes características para mostrar. El proyecto con media sanción del Senado que hoy consideramos viene a corregir defectos probados, con el propósito de acomodar adecuadamente el órgano constitucional en cuestión a su igual raigambre superior, en particular, al artículo 114 que textualmente reza: "El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal". La modificación que proponemos en el proyecto que tratamos asegura tal equilibrio conforme fuera la intención del constituyente, y refuerza el espíritu de la Constitución.

Y sobre esto último quiero detenerme un poco, ya que quizá sea uno de los principales aspectos que de oído critican los que desconocen la modificación. Se reduce la cantidad de miembros, es cierto. No de manera proporcional también es cierto. Pero precisamente para lograr el "equilibrio" del que hablamos. ¡No hay prevalencias de sectores representativos de unos sobre otros! Y quizá sea ésta una de las virtudes del proyecto que estamos tratando. Se mantiene la representación del Poder Ejecutivo como poder de origen y representación popular. En la representación del Poder Legislativo, actualmente el Consejo se conforma con paridad de consejeros las mayorías como las minorías; sobre esto estamos convencidos de que es un desacuerdo como una injusticia de trato. No pueden tener igual representación en su seno el oficialismo como la oposición. Hasta si se quiere podría calificarse a esto como de "ridículo". En efecto, el primero necesariamente debe tener un espacio mayor que las minorías, sino se viola el "equilibrio" al que hacíamos alusión más arriba. Esto es lógica pura. Se violaría también si el oficialismo por sí solo lograra la mayoría necesaria para imponer decisiones. Nada de eso sucede en el proyecto que tratamos. De los trece (13) miembros a que reducimos la integración del Consejo, siete (7) deberán pertenecer a la representación de los órganos políticos resultantes de elección popular y los seis (6) restantes a la representación de los otros sectores previstos en la Constitución y en la ley que estamos reformando. Esto es, nadie por sí solo logra, no puede, los dos tercios para las decisiones; mayoría calificada que se mantiene en el proyecto para las decisiones mas importantes. ¡Esto es independencia para actuar señor presidente! Obsérvese que aun en el supuesto de lograrse el acuerdo de los cinco (5) consejeros del oficialismo no pueden obtener nada sin acuerdos con los otros. Es más, ni aun en el supuesto de acuerdos logrados entre los siete (7) provenientes de la "política" se lograrían los 2/3 exigidos para el nombramiento y/o remoción de magistrados. Hasta matemáticamente esto es absoluta y cristalinamente comprobable. Ninguno de los sectores que integren de ahora en más el Consejo de la Magistratura podrá, actuando "sectorialmente", bloquear alguna decisión. Por eso nuestro convencimiento de las certe-

zas y las bondades del proyecto que defendemos con ésta pasión. Este es el camino hacia la consolidación de verdaderos principios republicanos y respeto a la división de poderes. Lo demás, señor presidente, con todo respeto lo digo, es cháchara y crítica malintencionada.

Hay mucho para decir sobre la reforma que pretendemos. Y así en todos sus aspectos ya se han manifestado criteriosamente mis compañeros de bancada. Sin dudas se mejora de igual manera su funcionamiento y agiliza su acción. Por ejemplo, señor presidente, al unificarse las comisiones de disciplina y acusación se evitará el paso de expedientes de una comisión y la demora de años (como ocurre ahora) en la definición de la situación de los magistrados. Se simplifica en un solo proceso la determinación para definir si la actuación de un juez da motivos para la aplicación de una sanción disciplinaria o el inicio de un proceso de acusación en su contra. Como analizáramos en mi bloque, de esta forma, la definición sobre su actuación es tomada después de realizada la investigación y no antes; y la existencia de una sola comisión hará que cualquier ciudadano sepa adónde debe acudir para hacer una denuncia en caso de ser víctima de algún abuso de un juez.

Como otra señal de transparencia y mayores garantías a los magistrados, respecto al jurado de enjuiciamiento se dispone, acá sí, la paridad de representantes del oficialismo y la oposición, entre otras positivas reformas profundas en la iniciativa en tratamiento sobre éste particular.

Señor presidente y señores diputados, en el debate desarrollado hasta ahora ha quedado demostrada una vez más la solidez de nuestros argumentos para habilitar positivamente la votación y modificaciones de la media sanción del Senado que estamos tratando. Otra iniciativa más de un gobierno que no sólo cumple con las expectativas populares votadas masivamente, sino también la demostración de que no le tiembla el pulso ni teme a presiones interesadas al momento de tomar decisiones trascendentes cuando de defender los intereses populares y nacionales se trata. Hoy estamos poniendo un mojón histórico más en el marco de la independencia de la Justicia respecto del Poder Ejecutivo. Lo contrario, esto es, la "reverencia" de muchos jueces adictos a gobiernos de turno, resultó ser la constante perversa durante mucho tiempo de un país, en ese sentido, a contramano.

*Ruperto E. Godoy.*

14

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA  
DIPUTADA JUREZ

**Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Tengo el honor de dirigirme al pleno de esta Honorable Cámara para exponer mi posición respecto de este importantísimo tema.

En primer lugar, quisiera expresar que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento ha sido presentado sin el tiempo de debate y participación necesarios y previos de todos los sectores que los integran.

Por otro lado, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 le otorgó al Consejo de la Magistratura la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Con este proyecto de ley, el poder político tendría hegemonía para designar y remover jueces y administrar los recursos del Poder Judicial, violando así la propia Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno.

Esto se sustenta en que, si pensamos, por ejemplo, que la Comisión de Disciplina y Acusación tiene nueve (9) consejeros, de los cuales, cinco (5) pertenecen al estamento político (2 diputados, 2 senadores, y el representante del Ejecutivo), si los mismos pertenecieran al partido en el gobierno, posibilidad nada remota, dado que el proyecto no lo prohíbe, se observa claramente que el estamento político, pasa a tener mayoría simple, con la posibilidad cierta de manejar el futuro de los jueces, según éstos sean receptivos o no a la óptica oficial.

Asimismo, el artículo 114 de la Constitución sostiene que "el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico..."; con este proyecto no se estaría respetando el principio de equilibrio entre las distintas representaciones en la integración del Consejo y el jurado ya que busca reducir de 20 a 13 la cantidad de integrantes del Consejo de la Magistratura, y reserva para el oficialismo un cupo de cinco miembros.

Avanzando más en este punto, de los siete políticos (tres senadores, tres diputados y un representante del poder político) solamente un senador y un diputado corresponden a la primera minoría con lo cual los restantes cinco representantes del poder político pertenecen a la mayoría gobernante.

Todo ello me hace temer, y en realidad es un hecho, que se produzca una pérdida de participación de los partidos políticos minoritarios y lo que es peor la total exclusión de los abogados de la matrícula en el proceso de selección de magistrados.

Como me referí anteriormente, la Constitución Nacional es muy clara al establecer que los jueces de todas las instancias tengan representación en el Consejo y acá podemos apreciar que la Corte Suprema de Justicia no figura, ningún ministro de ella lo integra.

Por lo cual, si queremos cumplir con el precepto constitucional, debería necesariamente integrarse un miembro, por lo menos de la Corte Suprema de Justicia en la composición del Consejo.

Por todo lo expuesto, y adhiriendo a lo resuelto por el Colegio de Abogados de Tucumán y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, es que rechazo el proyecto de ley de modificación del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento, en defensa de la República y de la independencia del Poder Judicial.

15

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LANDAU

#### **Fundamentos del voto afirmativo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

##### 1. EXORDIO

Cumpliendo con el procedimiento constitucional corresponde que esta Cámara revise el proyecto, enfatizando que se trata de una ley reglamentaria de la Constitución Nacional y que dicha problemática afecta a uno de los otros poderes de la República. Adelanto, desde ya, que estamos en general de acuerdo con el proyecto remitido con media sanción del Senado.

La creación del Consejo de la Magistratura en la reforma de la Constitución de 1994 implicó un favorable salto cualitativo en el mecanismo de designación y remoción de magistrados y la administración del Poder Judicial de la Nación, porque ayudó a resguardar al Poder Judicial de la influencia indiscriminada de la política partidaria e instituyó criterios de objetividad tanto en la selección como en la sanción de sus integrantes, dándole transparencia a un tema crucial para la conformación del estado de derecho y reduciendo su politización.

Tampoco se nos escapa que a través de la práctica de todos estos años de funcionamiento se ha podido apreciar la necesidad de ir ajustándolo por la experiencia del funcionamiento mismo. En ese sentido, hoy se impone una disminución de su estructura para facilitar su desenvolvimiento y propender a una desburocratización que lo haga más ágil.

Nadie discute ya la necesidad de incorporar modificaciones a las leyes que regulan la actuación del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. El tiempo transcurrido desde la instalación de estos órganos constitucionales, producto de la reforma de 1994, permite formular una cabal evaluación de su desempeño, y ello pone en evidencia la ineludible obligación de dotarlos de un mayor grado de celeridad y eficiencia para el cumplimiento de la tarea que la Constitución les encomienda.

Ahora bien, no puede dejar de señalarse que la no-desinteresada pretensión de dirigir el debate a la supuesta afectación a la "independencia" del Po-

der Judicial importa instalar un recurso dialéctico en el centro de la discusión y soslayar los ejes que motivan la reforma distrayendo la atención del verdadero núcleo de la propuesta, que —en definitiva— sólo procura proveer al Consejo de las condiciones indispensables a fin de que, tanto en materia de sanciones o enjuiciamiento de magistrados y muy especialmente en el caso de los concursos para cubrir vacantes, pueda actuar en tiempo oportuno, dejando atrás los innumerables conflictos que su puesta en marcha trajo aparejados y que dificultaron notablemente su misión.

Aceptando la agenda que proponen los críticos a la modificación legal, es necesario exponer ciertas premisas básicas de una discusión honesta.

No se ha demostrado en el ámbito del derecho comparado, ni en la experiencia nacional, que la representación de las segundas minorías permita —por sí sola— asegurar la independencia de una institución como el Consejo de la Magistratura. Si se ha verificado, en cambio, que la suma de parcialidades antagónicas sólo garantiza órganos inmóviles y poco eficientes, sobre todo cuando tienen a su cargo tareas ejecutivas.

Otro mito debe ser demolido si lo que se desea es tributar a la verdad. No se puede presentar como un modelo "aséptico" una integración que contemple sólo jueces y abogados. Eso constituye una verdadera falacia, pues forzoso es recordar que "la política" no es patrimonio exclusivo de quienes integran los cuerpos legislativos o ejecutivos. Como ha señalado el maestro Pizzorusso —uno de los más grandes juristas europeos y preciso conocedor del Consejo de la Magistratura italiano—, incluso instituciones que poseen una integración judicial exclusiva reproducen en su seno los debates de la coyuntura política. Vale aclarar que nuestro constituyente ha deseado lo contrario cuando reguló, de modo expreso, que el Consejo debía asegurar "la representación de los órganos resultantes de la elección popular", condición que —evidentemente— reviste también el Poder Ejecutivo.

Del mismo modo, resulta inexorable precisar —aunque más no sea con un fin didáctico— que, si bien el concepto de "equilibrio" entre órganos políticos, jueces y abogados, al que remite el artículo 114 de la Constitución Nacional, constituye indiscutiblemente una directiva estructural para el legislador, de ningún modo supone un criterio determinado. Obsérvese, en este sentido, que cuando la Ley Fundamental quiso regular la integración de diversos órganos en función de la condición de mayoría o minoría parlamentaria, lo hizo en forma precisa, a diferencia del caso que nos convoca.

La ciudadanía argentina merece órganos constitucionales que respondan en tiempo oportuno a sus demandas de una mejor justicia. En ese entendimiento la unificación de las comisiones de Acusación y Disciplina obedece a una necesidad que se hizo evidente a poco de instalado el cuerpo pues, aun cuan-



do pueda resultar desconocido para muchos, en los primeros seis años de su existencia, el Consejo de la Magistratura sólo aplicó poco más de una decena de sanciones. Vale la pena recordar que las contradicciones suscitadas entre aquellos dos organismos internos del Consejo exigieron —además— la creación de un sinnúmero de dispositivos administrativos a fin de asignar los asuntos entrados, incrementando irracionalmente el dispendio de tiempo y recursos.

Resulta llamativo el argumento según el cual la mencionada comisión contaría como una mayoría determinada en virtud de estar integrada, entre otros, por cuatro legisladores y el representante del Poder Ejecutivo. Ello es así pues, en el proyecto en tratamiento en la Cámara de Diputados no es sino el plenario del cuerpo quien designa a los miembros de cada comisión, de modo que no necesariamente esta circunstancia podrá configurarse algún día.

¿Acaso es razonable o “equilibrado”, para una sociedad que se quiere cada día más justa, mantener una estructura permanente, de dimensiones “ministeriales”, en el jurado de enjuiciamiento si éste no tramita más de cuatro causas al año?

Como se desprende de las breves reflexiones que anteceden, esta materia merece una perspectiva orgánica e integral y exige un debate serio que tenga por finalidad propender a lograr los objetivos que deben tenerse en miras si lo que se pretende es consolidar las instituciones de la Nación y no a obtener beneficios coyunturales.

Hoy por hoy, el Consejo se parece más a un ministerio que al cuerpo que se tuvo en mira al crearlo. Cabe recordar que cada consejero tiene 2 secretarios letrados, 2 prosecretarios administrativos, prosecretarios jefes y oficiales mayores a los que hay que agregar el propio personal del Consejo lo que lleva a que el plantel supere largamente los doscientos funcionarios jerárquicos. Todo ello provoca reuniones maratónicas y debates interminables que llevan al organismo a ser muy lento en la resolución de los temas.

## 2. EL PORQUE DEL VOTO POSITIVO

En oportunidad del tratamiento del tema en la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia expresamos que íbamos a acompañar el proyecto con observaciones parciales, atento a que dentro de la necesidad de la reforma legislativa considerábamos que nos encontrábamos frente a un proyecto perfectible en algunos aspectos como más adelante señalaré, en la esperanza que una ley correctiva adopte las sugerencias nacidas de nuestras inquietudes.

En ese momento no dudábamos del contenido general de la reforma por cuanto es una iniciativa del Poder Ejecutivo que, en uso de sus propias facultades y receptando la experiencia recogida, proponía al Congreso Nacional una serie de reformas beneficiosas.

Entre ellas cabe mencionar la reducción del número de integrantes, que lo hará más ágil, la publicidad de las actuaciones, que le dará mayor transparencia a la gestión, la unificación de las comisiones de Disciplina y Acusación, para simplificar el procedimiento disciplinario, la reforma del jurado de enjuiciamiento de magistrados transformándolo en un organismo no permanente y sólo avocado al o los juzgamientos que se les hayan encomendado.

## 3. NUMERO DE INTEGRANTES

En cuanto al tema del número de integrantes se comparte que sea menor. En relación con los abogados que lo integrarían, se comparte la reducción de cuatro a dos y así como los de los representantes del sector académico que de dos pasarían a tener uno.

No debe olvidarse que no es lo mismo el resultado del voto que elige a los legisladores que a los representantes de los sectores indicados. La elección de unos es producto de un padrón profesional en una elección no obligatoria, y la otra, de un acto electoral general, universal y obligatorio.

Existe la creencia de que los representantes políticos habrán de votar de igual manera, mas ello no deja de ser una especulación ya que la experiencia ha demostrado que no es así.

## 4. ELIMINACION DEL PRESIDENTE DE LA CSI

Lo que se advertía como superfluo, y de ahí su eliminación, es la participación del presidente de la Corte Suprema, por lo que se acompaña su supresión como integrante del Consejo, ya que no se justifica que el presidente del órgano cabeza del Poder Judicial integre el Consejo de la Magistratura, por cuanto dicho poder tiene su representación, a través de los tres magistrados que lo integran y por no haber sido su inclusión un acierto de la ley que se reforma si tenemos en cuenta los conflictos que existieron entre el Consejo y la propia Corte Suprema. En todo caso, habrá de actuar como miembro del tribunal que está llamado, en última instancia, a revisar las decisiones del Consejo, según el mismo ha establecido e incluso reviste como alzada de las sanciones disciplinarias que la Comisión de Disciplina y Acusación aplique como contempla el artículo 10 del proyecto en revisión que reforma, a su vez, el artículo 14 inciso c) de la ley vigente.

## 5. REELIGIBILIDAD

Compartimos la eliminación de la reelección indefinida del presidente pues ello hace al buen funcionamiento de las instituciones pero no nos parece la mejor fórmula la reelección con intervalo de un período pues se considera que dejar el cargo luego de adquirir experiencia en el funcionamiento del cuerpo o en la conducción del mismo es desaprovechar el conocimiento adquirido.

## 6. PUBLICIDAD DE LAS SESIONES

Se comparte la saludable idea de que las sesiones plenarias del Consejo, de las comisiones y los expedientes que tramiten en él sean públicos y en especial los que se refieran a las denuncias efectuadas contra magistrados, lo que garantiza a los ciudadanos la vigilancia tanto de los jueces como del Consejo a través del directorio de sus presentaciones pero se deberá facultar al cuerpo a que si razones lo justifican, pueda realizar sesiones reservadas, lo cual puede hacerse por vía reglamentaria.

## 7. QUORUM

En lo que hace al quórum, existe conformidad con la proporción de dos tercios que se establecen en la reforma para la selección y destitución y que para el resto sea solamente necesario la mayoría. Resulta obvio que este régimen resguarda los intereses más significativos en juego ya que les dará mayor movilidad a las decisiones del cuerpo y obliga a privilegiar los aspectos más importantes.

## 8. ELECCION DEL PRESIDENTE

Se coincide con el proyecto de reforma que la elección de quien será presidente del Consejo, sea en forma democrática entre sus miembros ya que posibilitará elegir a una persona capaz de lograr los consensos que todo órgano colegiado necesita.

## 9. FUSION DE LAS COMISIONES DE DISCIPLINA Y ACUSACION

Se está de acuerdo con la fusión de las comisiones de Disciplina y Acusación dada la temática de los temas de su competencia que no justifican la existencia de sendas comisiones, siendo conveniente que una sola se avoque al tema disciplinario y, en su caso, a la acusación de considerar que hay mérito para ello. En definitiva, la conducta y el comportamiento de los jueces no debe disociarse ya que se trata de un mismo objeto procesal.

## 10. PLAZO PARA EXPEDIRSE SOBRE CAUSAS DISCIPLINARIAS Y DE REMOCION

Se comparte la determinación de un plazo para el procedimiento de remoción o disciplinario que no podrá extenderse por más de cierto lapso, pero se considera que los tres años que prevé el proyecto son excesivos, no siendo conveniente que los expedientes estén abiertos por largo tiempo, propiciando en cambio el lapso máximo de dos años para que la comisión lo trate. Se coincide en que el nuevo plazo sea aplicable a las denuncias efectuadas con posterioridad a la sanción de esta ley de reforma. Por lo tanto, todas las denuncias presentadas hasta la sanción de ésta no tendrán el beneficio.

No coincide en que la caducidad del procedimiento sea por no haber sido "tratado" el expediente por

la comisión. Considero más conveniente que la caducidad se produzca por no haber sido "resuelto" el mismo. Ello así por cuando cualquier actividad de la Comisión que se interprete como *tratamiento* del tema puede ser considerado como interruptivo del plazo de caducidad cuando, entendemos, la reforma apunta a establecer un plazo perentorio de resolución.

De todas maneras lo que caduca es el procedimiento en la comisión, ya que el expediente pasa al plenario del cuerpo "para su inmediata consideración", pudiendo de todas maneras resolverse una sanción disciplinaria o iniciarse el proceso de remoción. Hubiera sido mejor una redacción que estableciese que vencidos los plazos queda prescripta la facultad sancionatoria.

## 11. INTEGRACION DE LA COMISION DE SELECCION Y ESCUELA JUDICIAL

Se está de acuerdo en que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que tiene la finalidad de elegir o ascender a los postulantes no esté integrada por el representante de los abogados. Sería conveniente que a través de algún mecanismo administrativo se establezca que los senadores que integran la comisión de acuerdos no puedan ser los mismos que integran la comisión de selección.

## 12. JURADO DE ENJUICIAMIENTO

Es un acierto establecer que el jurado de enjuiciamiento sea un tribunal ad hoc elegido por sorteo para evitar cualquier tipo de suspicacias y darle mayor movilidad a las personas que habrán de juzgar el comportamiento y conducta de los magistrados.

Es acertado, asimismo, que los jueces designados tengan suplentes para el ejercicio de sus funciones, lo que facilita la integración del Consejo en caso de imposibilidad temporaria, renuncia o impedimento definitivo de pertenencia por parte de los titulares electos y contempla especialmente a los representantes de las provincias argentinas.

En cuanto al régimen disciplinario, las causales deben estar taxativamente expresadas a efectos de evitar la discrecionalidad de la función disciplinaria del Consejo.

## 13. JURADOS POR ESPECIALIDAD

No compartimos que no existan abogados jurados por especialidad, ya que no existe razón para haberlos eliminado.

## 14. RECHAZO DEL PLIEGO POR EL SENADO

Es discutible que en el caso de que el Senado rechace el pliego del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo deba realizarse un nuevo concurso para cubrir la vacante. Razones de economía y rapi-

dez imponen facultar al Consejo a elevar una nueva tema de los postulantes que hubieren participado en el concurso. De lo contrario se frustrarían las legítimas expectativas de los demás concursantes, inculpables del rechazo del pliego, que participaron de un concurso inútil por culpas que ellos no tienen.

En definitiva, el artículo 114 de la Constitución Nacional dispone que la ley especial que regula el Consejo de la Magistratura debe sancionarse por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En mérito a ello más allá de las pequeñas diferencias señaladas precedentemente, apuntadas para ser consideradas en próximas modificaciones de la ley de organización del cuerpo, acompañamos con nuestro voto el proyecto en tratamiento ya que consideramos que habrá de redundar en un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura, tema prioritario hoy por sobre las discordancias que pudiéramos tener.

Por encargo del bloque por el que me expreso se ha realizado un trabajo de la forma en que quedaría la integración de las comisiones y régimen de mayorías en el que se demuestra que el proyecto lejos está, como se afirma desde algunos sectores, sea una maniobra para manchar el Consejo, avasallar la Justicia o quitarle independencia.

No voy a leerlo, para no hacer tediosa esta exposición, por lo que solicito al señor presidente se autorice a insertarlo en el diario de sesiones, como anexo de mis palabras.

Del trabajo mencionado el primer tema que hay que remarcar es que, siempre teniendo en cuenta que el Consejo sesione con todos sus miembros, o al menos con 11 o 12 de sus integrantes, el oficialismo no tiene mayoría, por lo que no puede imponer por sí solo criterios o tomar decisiones.

Dentro de este tema de mayoría simple quedan los importantes temas que hacen a la marcha del Consejo: nada menos que la designación de integrantes de comisiones, citación del Consejo, elección de presidente y vice etcétera.

El llamado por los detractores del proyecto como "poder de veto" no es tal. Solamente existe un régimen de mayoría especial para el tratamiento de ciertos temas, de trascendencia, que tiende a evitar que el oficialismo o los integrantes que no lo conforman puedan tener preeminencia el uno en detrimento del otro.

Ello es así para privilegiar el consenso por sobre el número.

Así, temas como la apertura del procedimiento de remoción de un juez, de los propios miembros del Consejo (abogados, magistrados o académicos), la recomendación para la remoción de los legisladores o del representante del Poder Ejecutivo nacional, la revisión de oficio de las calificaciones de la Comisión de Selección deben contar con el concurso del oficialismo.

Pero ello tiene también su contracara. El oficialismo sólo no puede impulsar la apertura del procedimiento de remoción de un magistrado o de otros miembros del Consejo o revisar lo actuado por la Comisión de Selección.

Con estas dos caras de una misma moneda se equilibra el poder de todos los estamentos, quienes se precisan entre sí y se evita que sólo unos puedan avanzar con ciertos temas que la reforma de la ley privilegia.

En las comisiones, tampoco tiene el oficialismo preeminencia por sobre los otros sectores, siempre recordando un punto que para nosotros es crucial, la integración de las comisiones son designadas por mayoría simple, por lo que cuando la ley habla de que las mismas son integradas por legisladores, nada dice si son de la mayoría o de la minoría, por lo que el oficialismo nada tiene asegurado.

Es de esperar, entonces, que a la brevedad se logre modificar la ley que se acompaña con nuestro voto, o al menos discutir las propuestas de reforma que se efectuaron. Hoy consideramos más importante avanzar en la agilización del Consejo, de ahí nuestro apoyo, más allá de nuestras inquietudes nacidas de la experiencia en la vida del derecho.

Muchas gracias.

#### ANEXO REGIMEN DE INTEGRACION DE COMISIONES Y MAYORIAS

El proyecto contempla un Consejo de trece miembros: tres magistrados, seis legisladores (cuatro por la mayoría y dos por la primera minoría), dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo (artículo 2°).

#### Quórum

Si el número es 13, el quórum para sesionar es de 7 miembros, por lo que, en primer lugar, es del caso remarcar que el oficialismo gobernante, con cinco representantes, no podrá, por sí solo, sesionar válidamente.

#### Designación de integrantes de las comisiones

Cabe señalar que el plenario del cuerpo tiene, entre otras facultades, designar a los integrantes de cada comisión que lo integra por mayoría absoluta de sus miembros presentes (artículo 7°, inciso 5).

Al respecto el oficialismo puede imponer su voluntad si el cuerpo sesiona con siete, ocho o nueve miembros. Con diez está empatado en número con los restantes. Si sesiona con once, doce o trece dependerá del voto de los restantes miembros, ya que queda en minoría.

Por supuesto, que el deber de responsabilidad de los miembros del Consejo impone a los mismos asistir a todas las reuniones plenarias por lo que es difícil que el oficialismo tenga mayoría en dichas reuniones.

### *Apertura del procedimiento de remoción*

La apertura del procedimiento de remoción de un magistrado debe realizarse con el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes (artículo 7º, inciso 7). Siempre pensando que el cuerpo sesiona con el total de sus miembros (13) dicho número se logra con el voto de 9 miembros, por lo que los restantes que no sean el oficialismo (8) nunca podrán disponer la apertura del proceso de remoción sin el concurso de, al menos, un representante del oficialismo. Mucho menos podrá el oficialismo abrir un proceso de remoción con cinco miembros.

### *Aprobación de los concursos*

La aprobación de los concursos y remisión al Poder Ejecutivo de las ternas de candidatos, al no tener ninguna mayoría especial, se aprueban por mayoría simple (artículo 7º inciso 10). En el caso de sesionar con 7 miembros, 4 conforman voluntad y con 13, siete, por lo que, de sesionar con todos, el oficialismo queda siempre en minoría para aprobar concursos y confeccionar ternas. Se precisan 7 votos para aprobar los concursos.

### *Sanciones a magistrados*

Igual situación rige para aplicar sanciones a magistrados (artículo 7º inciso 12). Siempre el oficialismo con 5 miembros va a necesitar dos votos más, tanto para aprobar concursos como para sancionar magistrados (artículo 7º incisos 10 y 12).

### *Remoción de los miembros del Consejo, jueces, abogados y académicos*

La remoción de los miembros representantes de los jueces, abogados o académico debe realizarse con el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, por lo que se precisan 10 votos para ello. El oficialismo no puede por sí solo destituir y los demás representantes tampoco. Se precisa el concurso de representantes del oficialismo y de los otros sectores y viceversa (artículo 7º, inciso 14).

### *Remoción de los integrantes del Consejo, legisladores y representante del Poder Ejecutivo nacional*

La remoción de los representantes del Congreso o el del Poder Ejecutivo debe ser por cada una de las Cámaras o por el presidente de la Nación, previa recomendación del Consejo tomada por las tres cuartas partes del total de los miembros, menos el cuestionado, por lo que se precisan 8 votos. El oficialismo no puede por sí solo recomendar la destitución y los demás representantes tampoco. Se precisa, al igual que el anterior caso, el concurso de representantes del oficialismo y de los otros sectores y viceversa (artículo 7º, inciso 14).

### *Citación del Consejo*

El Consejo se reúne en sesiones ordinarias o cuando lo cite el presidente, vicepresidente en ausencia

de aquel o a petición de 8 miembros. El oficialismo nunca logrará convocarlo, necesita el concurso de tres miembros más (artículo 8º).

El quórum para sesionar será de 7 miembros y las decisiones, salvo disposición en contrario, se toman con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes (de siete, cuatro; artículo 9º).

### *Elección de presidente y vice*

El presidente y vicepresidente del Consejo son elegidos por mayoría absoluta del total de los miembros, por lo que el oficialismo, por sí, no puede hacerlo. Se precisan 7 votos (artículo 11).

### *Integración de las comisiones*

Ya se señaló que los integrantes de las comisiones se designan por el Consejo por mayoría absoluta de miembros presentes. Por lo que de haber asistencia completa el oficialismo no puede imponer nombres (artículo 12, incisos 1, 2, 3 y 4).

*Comisión de Selección:* la conforman 8 miembros: los tres jueces, tres diputados, el representante del Poder Ejecutivo nacional y el académico. Por ende el oficialismo puede llegar a tener tres votos sobre ocho: sus dos diputados y el representante del Poder Ejecutivo nacional (el otro diputado es de la primera minoría).

Cabe señalar que la selección se hará de acuerdo con el reglamento que apruebe el plenario del Consejo por mayoría de sus miembros, por lo que, en caso de asistencia total, el oficialismo no tiene mayoría (artículo 13).

El plenario del Consejo puede revisar de oficio las calificaciones de los exámenes escritos, de los antecedentes, impugnaciones y dictámenes con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes. Por lo que, de haber asistencia completa, se precisan 9 votos. Ni el oficialismo por sí, ni los estamentos restantes pueden lograr esa mayoría [artículo 13 inciso c), sexto y octavo párrafos].

*Comisión de Disciplina y Acusación:* la conforman 9 miembros: 1 abogado, 2 senadores, 2 diputados, 2 jueces, el representante del Poder Ejecutivo nacional y el académico. En este caso, en tanto y en cuanto el Consejo elija a los senadores y diputados del oficialismo, el mismo podría tener mayoría propia. Esto es 5 sobre 9. Debe recordarse que para elegir miembros de las comisiones el oficialismo no tiene mayoría propia, por lo que es difícil que la totalidad de los parlamentarios sean del partido gobernante.

*Comisión de Administración y Financiera:* 7 miembros: 2 diputados, 1 senador, 2 jueces, 1 abogado y el representante del Poder Ejecutivo nacional. En este caso, en tanto y en cuanto el Consejo elija a los senadores y diputados del oficialismo, el mismo podría tener mayoría propia. Esto es 4 sobre 7. Debe recordarse, como en el caso anterior, que para elegir miembros de las comisiones el oficialismo no tiene mayoría propia, por lo que es difícil que la

totalidad de los parlamentarios sean del partido de gobierno.

*Comisión de Reglamentación:* 6 miembros: 2 jueces, 1 diputado, 1 senador, 1 abogado y el representante del Poder Ejecutivo nacional. En el caso de que el Consejo elija a los parlamentarios en su totalidad del oficialismo, podría reunir 3 votos sobre 6, por lo que no tiene garantizada su hegemonía. A lo sumo puede darse un empate, definiendo el presidente. Debe hacerse, así también, la prevención de los casos anteriores en el sentido de que es el Consejo, donde el oficialismo no tiene mayoría, el que elige los miembros de las comisiones.

### *El jurado de enjuiciamiento*

Está compuesto de 7 miembros: 2 jueces, 2 diputados, 2 senadores y un abogado. Los legisladores se eligen, por cada Cámara, uno por la mayoría y otro por la primera minoría (artículo 21).

La remoción de los jueces y del abogado podrá ser decidida por tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo. Esto es se precisa el voto de seis, sobre siete. Ni el oficialismo, ni los restantes miembros pueden por sí tomar decisiones (artículo 24).

El plazo de prueba puede ser prorrogado por mayoría del jurado. Si sesiona con el mínimo de 4, logran mayoría 3 miembros, por lo que el oficialismo no posee mayoría (artículo 26, inciso 3).

### *Conclusiones*

El primer tema a remarcar es que, siempre teniendo en cuenta que el Consejo sesiona con todos sus miembros, o al menos con 11 o 12 de sus integrantes, el oficialismo no tiene mayoría, por lo que no puede imponer por sí solo criterios o tomar decisiones.

Dentro de este tema de mayoría simple quedan los importantes temas que hacen a la marcha del Consejo: designación de integrantes de comisiones, citación del Consejo, elección de presidente y vice, etcétera.

El llamado por los opositores al proyecto como "poder de veto" no es tal. Solamente existe un régimen de mayoría especial para el tratamiento de ciertos temas, de trascendencia, que tiende a evitar que el oficialismo o los integrantes que no lo conforman puedan tener preeminencia el uno en detrimento del otro.

Ello es así para privilegiar el consenso por sobre el número.

Así, temas como la apertura del procedimiento de remoción de un juez, de los propios miembros del Consejo abogados, magistrados o académico, la recomendación para la remoción de los legisladores o del representante del Poder Ejecutivo nacional, la revisión de oficio de las calificaciones de la Comisión de Selección, deben contar con el concurso del oficialismo.

Pero ello tiene también su contracara, el oficialismo solo no puede impulsar la apertura del procedi-

miento de remoción de un magistrado o de otros miembros del Consejo o revisar lo actuado por la Comisión de Selección.

En estas dos caras de una misma moneda se equilibra el poder de todos los estamentos quienes se precisan entre sí y se evita que sólo unos puedan avanzar con ciertos temas que la reforma de la ley privilegia.

En las comisiones, tampoco tiene el oficialismo preeminencia por sobre los otros sectores.

16

### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO LOVAGLIO SARAVIA

#### **Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Aunque el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura ha sido ampliamente debatido por esta Cámara, tanto en comisión como dentro del recinto y fuera de él, considero pertinente hacer algunas observaciones sobre ciertos aspectos que no estuvieron en el centro de estos debates. Antes de hacerlo, anticipo que apoyaré con mi voto el dictamen de mayoría, porque comparto los criterios de ese proyecto para su reordenación. Nadie tiene dudas, incluso quienes discrepan con el texto en discusión, de que el funcionamiento del Consejo es insatisfactorio y tampoco de la necesidad de introducir reformas para dotarlo de agilidad y eficacia.

Antes de hacerlo, permítaseme señalar que lo que debió ser un debate riguroso y sereno en torno a los distintos criterios sobre esas modificaciones se transformó en un torneo de acusaciones por parte de la oposición, oposición que sustituyó sus críticas por advertencias catastróficas sobre las supuestas intenciones del Poder Ejecutivo encaminadas a desvirtuar el espíritu que presidió la creación del Consejo de la Magistratura, esto es, dotar a la Justicia de un organismo capaz de asegurar la mayor transparencia en la selección y designación de magistrados, agilizar los procedimientos para su remoción y garantizar la independencia del Poder Judicial.

Contra lo que pretende la oposición, que para arrojar sospechas y deslegitimar cualquier intento de cambio apela a un exceso de dramatismo, tenemos que reafirmar categóricamente que aquí no están en riesgo ni el sistema democrático ni las instituciones y la calidad de éstas. Los temas referidos a la administración de la justicia no deberían ser utilizados como armas de confrontación, pues estamos ante cuestiones delicadas, complejas y que trascienden nuestros mandatos y la duración de una gestión de gobierno.

Los señores legisladores, las entidades profesionales y los especialistas han polemizado sobre el

sentido y el alcance del concepto de "equilibrio", que parece la piedra de toque de estos debates. A la búsqueda de equilibrio alude el artículo 114 de la Constitución Nacional, fijando la representación que deberá tener cada uno de los estamentos que integran el Consejo. Allí, cuando se habla de "equilibrio", se hace referencia a la proporción que debe guardarse en el número de representantes de cada uno de los sectores que conforma el Consejo. En este punto la oposición busca demostrar que, con los cambios que contempla el proyecto, aquel supuesto equilibrio actual se perdería.

Trataré de expresar brevemente mi preocupación por este problema, marcando algunos matices que considero importantes. En este caso el concepto de equilibrio no debe ser traducido a una rígida fórmula matemática de difícil aplicación en órganos complejos como éste. Ese concepto alude a los criterios que deben buscarse para armonizar una representación desde el punto de vista cuantitativo. No se trata sólo de proporciones sino también de la diversidad en su composición, la pluralidad de las ideas dentro de un abanico conformado por legisladores, representante del Poder Ejecutivo, jueces que pueden pertenecer a todas las instancias, abogados de la matrícula federal, académicos y científicos del derecho.

Esa diversidad de representación se toma afinidad y hasta homogeneidad absoluta cuando observamos la composición de un organismo desde el punto de vista de la profesión de sus miembros. El hecho de que la totalidad del actual Consejo está en manos de abogados puede parecer una obviedad, algo natural y legal. La composición plural se refiere a la distinta procedencia, institucional o política, de sus integrantes, pero no alude a la pertenencia profesional de quienes la componen: los abogados. Lo plural y diverso se torna homogéneo y el enfoque pluralista amenaza con derivar en exclusiva visión corporativa.

La mención de una corporación no es una alusión peyorativa, sino técnica y descriptiva. No puedo dar a ese término un sentido peyorativo porque, por mi condición de médico, también pertenezco a una corporación profesional. Al hablar de corporación aludo a un dato de la realidad que no es exclusivo de nuestra época, de un sistema político determinado y, menos aún, de nuestro país. Cuando es tan importante el peso de una corporación, como legisladores tenemos la obligación de preguntarnos por los condicionamientos, e incluso por los riesgos que trae aparejados el predominio de visiones afines que suelen derivar de la actividad de personas que tienen idéntica profesión, una misma formación y un similar perfil.

Uno de los riesgos de las representaciones cerradas es que, en razón de esa misma afinidad de sensibilidades, visiones e intereses, la corporación pueda desembocar en corporativismo. Ese modelo es el que predominó en Europa hasta el año 1945 y que,

inmediatamente después de restablecidos, los nuevos regímenes democráticos comenzaron a remover y suplantaron. Representaciones que se imaginaron y diseñaron pluralistas, como es el caso de este Consejo, pueden devenir en monopólicos.

Se podrá argumentar que no estamos frente a una representación de intereses sino a una selección de personas en razón de su formación, su experiencia y su idoneidad profesional. Se podrá decir que a nadie se le ocurriría convocar a un ingeniero civil o a un abogado a formar parte de una junta médica. Pero no parecen consistentes esas objeciones dada la naturaleza de cada una de estas disciplinas y sus prácticas.

Tampoco resultan atendibles pues generalmente se admite, no que un abogado integre una junta médica, pero sí que un hombre de derecho tenga en sus manos los casos de mala praxis en el ejercicio de la medicina o el de otras profesiones. Esta posibilidad no es en modo alguno reversible. Nuestra experiencia como ciudadanos nos indica que la sospecha y enjuiciamiento por mala praxis alcanzan a algunas profesiones, no a todas. Estamos aquí frente a un viejo problema: ¿no somos todos falibles?; ¿cómo juzgar a los que juzgan?

Señor presidente: no se trata de centrar la atención en un sector y, menos aún, de personalizar. Nuestra responsabilidad es tratar de adoptar un punto de vista institucional. Tampoco se trata de hacer un alegato crítico sobre un sector profesional, sino de llamar la atención sobre la necesidad de analizar estos temas con un criterio que, incluyendo los intereses y la visión de sector, vayan más allá de ellos. En nuestra época no es posible adoptar decisiones con visiones cerradas.

Los temas que aquí debatimos pertenecen a la agenda de preocupaciones de democracias consolidadas que se suelen tomar como modelo para las nuestras, como en el caso de España. Allí también se debate sobre las funciones, la composición y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial al que se procura dotar de agilidad y eficiencia, no a partir de meras fórmulas burocráticas referidas al número de sus integrantes sino con enfoques más cualitativos e integrales. En ellos se contempla el papel de los ciudadanos, a quienes se suele olvidar en las discusiones.

No podemos dejar de lado el punto de vista y los intereses de los ciudadanos toda vez que nuestra obligación es representarlos y expresarlos y toda vez que es justamente la "obligada, eficiente y eficaz protección jurisdiccional y garantía de sus libertades y derechos fundamentales lo que constituye la razón de ser de los órganos de la Justicia", como recordó recientemente un jurista español.

Tenemos que hacer un esfuerzo para mirar más allá de los campos acotados y también para superar los tópicos y las visiones de corto plazo. Una visión cerrada y convencional difícilmente admitiría que una mujer de profesión médica y especializada

en pediatría pudiera ser la ministra de Defensa de un país como Chile y, menos aún, que esa misma mujer pudiera ser la presidenta de la República. Por igual motivo era impensable que en nuestro país otra mujer asumiera la cartera de Defensa.

No es mi intención desconocer la importancia de las profesiones y subestimar sus aptitudes y capacidades específicas. Lo que me interesa es advertir que no debemos dejar de lado la significación y la proyección social de la Justicia, en general, y de la conformación de un cuerpo como el Consejo de la Magistratura, en particular. También el sistema de juicios por jurados es un síntoma de que la Justicia abre sus oídos a los ciudadanos que no pertenecen a la corporación de los abogados.

Confío en que mis colegas comprenderán y compartirán esta preocupación, aunque quizá no algunos de los términos en que la manifiesto. Lo harán porque coincidimos en que una de nuestras principales responsabilidades en esta Cámara es tratar de comprender y expresar las inquietudes de amplios sectores de nuestra sociedad. Consulté y dialogué con muchos ciudadanos de mi provincia y de otras, con la misma preocupación que hoy expreso ante ustedes.

Aquello se podrá hacer sosteniendo que, con la presencia de los senadores o diputados que integren el cuerpo, quedará asegurada esa perspectiva de lo social dentro el Consejo de la Magistratura. Es posible y deseable que así sea. La Convención de 1994 habló de representantes del Parlamento, sin especificar su profesión. Pero también es posible que los legisladores finalmente elegidos para representarlo sean abogados.

Muchos ciudadanos permanecen ajenos a estos debates porque perciben que no están satisfechas sus demandas de contar con una Justicia imparcial, de calidad, capaz de garantizar sus derechos, de atemperar la tendencia a la litigiosidad, potenciando la mediación.

Temo que un debate centrado en los equilibrios dentro de una corporación no permita ver esa otra cuestión importante que es el equilibrio y sintonía del cuerpo con las preocupaciones de nuestra sociedad, la que se manifiesta a favor de la mejora de las instituciones a través del cambio, no de las inercias y las visiones sesgadas. El natural predominio de hombres de derecho en una institución como el Consejo, creo que no debería caer en un monopolio.

Tenemos que ser sensibles y receptivos hacia estas demandas de cambio y reformas. Este proyecto no pretende alterar el espíritu con el que fue concebido el Consejo, sino permitir aproximarse a él. No corresponde prejuzgar sobre el funcionamiento futuro del Consejo ni arrojar sospechas sobre ningún sector. De lo que se trata es de advertir sobre la necesidad de abrirnos a nuevos e innovadores enfoques en materia institucional. Hacerlo sin espectacularidad, sin impaciencia, sin pretender imponer modelos perfectos, sino buscando cambios graduales y posibles.

Con toda la importancia que reviste, el Consejo es parte del sistema judicial, y dentro de él debe ser considerado. Muchos de los críticos a este proyecto de reforma olvidan que, antes de que éste ingresara al Congreso, habían sido ellos mismos quienes ejercieron una sostenida tarea crítica hacia el funcionamiento y la composición de ese Consejo.

La oposición crítica al gobierno sobre la base de suposiciones. La oposición anuncia que el gobierno tiene "pretensiones hegemónicas" y que esta reforma es una demostración de esos deseos. Sin embargo, nada dice respecto al hecho de que el Consejo esté integrado por un solo sector profesional, con carácter exclusivo y excluyente, sin recordar que el requisito que nuestra Constitución exige a un ciudadano para desempeñar una función pública es la idoneidad, la capacidad y su conducta.

En la Convención Reformadora del año 1994, el doctor Zaffaroni, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue convencional. Al abordar el tema del Consejo de la Magistratura señaló que estábamos frente a una institución que en otros países se había "desvirtuado hasta límites increíbles". Fue Zaffaroni quien alertó sobre los desvíos corporativos de un cuerpo como este. También advirtió sobre el peligro de las "estructuras judiciales poco creativas, poco adaptadas a las necesidades de un Poder Judicial moderno".

Añadió entonces Zaffaroni que la imparcialidad en la democracia "se obtiene a través de una garantía de pluralismo institucional". Podría añadir que no se logrará ese pluralismo institucional si éste no se apoya en una pluralidad de puntos de vista y de opiniones ordenadas y expresadas racionalmente dentro de las instituciones. La respetable opinión de los abogados y juristas no agota la complejidad de la trama social.

Una visión respetuosa de la complejidad atenderá no solamente a la procedencia de diversos sectores actuantes en el ámbito de la administración de justicia, ni se detendrá en la filiación o afinidad política de los candidatos, sino que procurará integrar visiones científicas y prácticamente diversas, que de alguna manera reflejen la vida y la riqueza de la sociedad a cuyos ciudadanos intenta servir la institución que nos ocupa y que hoy buscamos reformar.

17

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA  
DIPUTADA MANSUR

**Fundamentos del voto negativo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Sustantivamente, el proyecto en cuestión modifica drásticamente el actual número de integrantes del Consejo de la Magistratura reduciéndolo de 20

a 13 miembros, con la salvedad que al prevalecer, en la composición propuesta, los representantes del poder político se agravia frontalmente la previsión contenida en el artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto exige la participación equilibrada de los estamentos que componen el órgano.

La circunstancia torna francamente inconstitucional el proyecto en trato y constituye un indebido avance de las facultades del Poder Ejecutivo respecto de los restantes poderes, especialmente, el Poder Judicial, toda vez que bajo la máscara de la pretendida reforma el Poder Ejecutivo de turno monopolizará, contando con mayoría propia, la designación y remoción de los integrantes del Poder Judicial, facultad que fuera limitada por la reforma constitucional de 1994.

El arbitrio, naturalmente, conspira contra el principio de división de poderes que inspira la Carta Magna y, por ende, socava, el sistema republicano de gobierno que adopta el artículo 1º de nuestra Constitución.

A ello se suma que, como consecuencia de la proyectada hegemonía, el poder político concentrará la administración discrecional de los recursos presupuestarios que se asignen al Poder Judicial.

El mismo avasallamiento se produce en relación al jurado de enjuiciamiento puesto que se propone reducir de 9 a 7 el número de sus miembros siendo mayoría los representantes del poder político. En suma: el principio rector del proyecto está inspirado en el propósito de hacer realidad la desaparición de la independencia judicial lo que es lo mismo que decir la desaparición de los pilares que sostienen la República.

18

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA  
DIPUTADA MARINO (J. I.)

**Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Mucho se ha dicho respecto a que las únicas razones del voto de los diputados que adhieren al proyecto del Consejo de la Magistratura son, cuando no opera la disciplina partidaria, su *non sancta* captación por parte del gobierno nacional. Cuesta creer que un número más que importante de legisladores, elegidos por nuestro pueblo, carezcamos de ética en nuestras convicciones y de compromiso con la calidad de las instituciones.

Existe consenso sobre la necesidad de reformar el órgano institucional y nada obsta a que ésta sea la oportunidad de hacerlo. No cabe duda de que el Consejo debe ser edificado sobre los mismos cimientos en que quiso apoyarlo la Convención de Santa Fe: principio democrático de la representación

de la voluntad popular, juntamente con el principio de la auditoría técnica de los peritos. Para expresar la voluntad popular, el artículo 114 previó la presencia de representantes de los órganos políticos. Ellos ponen en ejercicio el principio democrático. ¿Para qué imaginó el constituyente la presencia de jueces, abogados y académicos? Sencillamente, para robustecer la medición de calidades técnicas y éticas que el proceso de selección siempre debió hacer.

De todas maneras no es mi intención abordar temas que ya han sido repetida y exhaustivamente desarrollados, y con los que estoy conceptualmente muy de acuerdo, sino referirme a un aspecto sistemáticamente soslayado en el debate: el Consejo de la Magistratura Nacional tiene a su cargo la administración del Poder Judicial y la selección o remoción de magistrados de los tribunales inferiores de la Nación. ¿Y qué es lo que se soslaya en la discusión? Que su verdadera jurisdicción es tan sólo la del fuero federal.

Los mal llamados juzgados nacionales tienen la misma competencia en sus respectivos fueros que cualquier juzgado provincial análogo, reciben esa denominación tan sólo por atavismo y pertenecen por competencia y jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual la proporción y magnitud de la temática que debe abordar el Consejo de la Magistratura adquiere distinta dimensión.

Los constituyentes consagraron en el artículo 129 la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconociéndole a su pueblo la aptitud para elegir a su jefe de gobierno, contar con facultades propias de legislación y jurisdicción, y dictar, por medio de sus representantes, el estatuto organizativo de sus instituciones.

Más allá del estatus jurídico que se quiera reconocer a la Ciudad de Buenos Aires, y la discusión doctrinaria que ha versado sobre ello, lo cierto es que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires sólo será ratificada cuando se produzca el traspaso de las facultades jurisdiccionales, actualmente en manos de la Nación.

La realidad nos indica que hoy la Ciudad cuenta con un Poder Judicial acotado pese a que, conforme a la modificación establecida en la reforma constitucional de 1994, el Poder Judicial de la Ciudad debería ser una rama independiente, a imagen y semejanza de lo que ocurre en el orden federal o provincial. Por lo tanto, la actividad jurisdiccional debería estar conformada por jueces nacionales (justicia federal de la Capital a quienes compete la protección de los intereses del gobierno federal en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires) y por jueces de la Ciudad de Buenos Aires.

En este esquema, la llamada justicia nacional ordinaria de la Capital Federal debería ser ejercida por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Que esto no ocurra priva al pueblo de la ciudad de Buenos Aires del derecho de organizar sus poderes.



No puede desconocerse que el mandato jurisdiccional, aunque en forma indirecta, es mandato popular. En consecuencia, los ciudadanos de Buenos Aires debieran tener la facultad de intervenir en la elección de jueces locales y ser juzgados por una justicia local, porque así lo reconoce el artículo 129 de la Constitución Nacional.

El proceso de transferencia de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires es trascendental para el diseño de la justicia nacional o federal dada la magnitud del traspaso de recursos humanos y materiales que generará. Como ejemplo, basta considerar que son 373 los juzgados y cámaras que deberían pertenecer al poder judicial porteño.

Por esto es que les sugiero a los representantes corporativos que contemplen no tanto las competencias actuales del Consejo de la Magistratura que estamos diseñando sino las que tendrá una vez que se transfiera la justicia ordinaria de la Ciudad a sus vecinos, a los justiciables, que, por ahora, son justiciables de segunda ya que no eligen ni controlan a sus jueces. En el Consejo de la Magistratura porteño encontrarán, porque allí lo he visto como justo el constituyente porteño, la representación paritaria que tanto los desvela respecto del Consejo de la Magistratura de la Nación.

El respeto por la Constitución Nacional no puede ser selectivo, acomodaticio o descontextualizado. Es cierto que no debe vulnerarse, y el proyecto de ley en análisis no lesiona, el artículo 114 que determina la composición del Consejo de la Magistratura. Pero no menor acatamiento merece el artículo 129 al que me he referido.

Es de desear que los organismos no gubernamentales, a los que algunos de mis colegas les adjudican calidad legítimamente respecto de cuanta acción u omisión acontezca en nuestro país, batallen por la transferencia de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires con el mismo ardor con el que se han pronunciado respecto del proyecto que nos convoca.

19

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MONAYAR

#### **Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Voto por la aprobación del proyecto de reforma Consejo de la Magistratura venido del Senado de la Nación, por las siguientes razones:

1. El mismo responde a la letra y al espíritu de la Constitución Nacional que sustenta un orden institucional democrático y republicano, cuya legitimidad se funda en la soberanía popular. Ambos conceptos están unidos y no pueden disociarse sin riesgo cierto de aniquilación de la democracia. En

nuestra patria hemos tenido muchos años de República sin democracia. No sólo las dictaduras militares, que fueron militares por la forma, pero que en realidad eran repúblicas oligárquicas al servicio de sectores sociales que querían mantener sus privilegios injustos y su capacidad de dominación sobre la sociedad argentina. También fueron repúblicas sin democracia, repúblicas oligárquicas el "unicato" en el siglo XIX y los gobiernos del fraude primero y de la proscripción después en el siglo XX. Siempre los que buscan excluir al pueblo del ejercicio del poder han hecho invocaciones insinceras a la República, o quizás en el fondo a la república que ellos quieren tener, limitada, restringida, que no acepta el espíritu vital de la democracia. No es nuevo y tiene una larga tradición en el pensamiento y en la práctica política argentina, por eso en las expresiones de algunos opositores he percibido el eco del preámbulo de la Constitución unitaria de 1819: "Hacer las reglas para el pueblo pero sin el pueblo".

2. No acepto la degradación de la política y de los políticos que está implícita en el discurso opositor. Esta actitud se nutre en un concepto para mí inaceptable que sostiene la ineptitud del pueblo para dar legitimidad al gobierno de la comunidad.

Me parece muy triste que personas que ejercen el oficio de la política, hablen de los políticos y de su presencia en los escenarios institucionales de un modo tan negativo.

3. Hay aspectos muy positivos de la reforma que no han sido analizados por quienes se oponen a la misma con la honestidad intelectual que es debida a quienes dicen ejercer la crítica con fundamentos técnicos y jurídicos; así lo dispuesto en el artículo octavo donde se establece que las reuniones del plenario serán periódicas y públicas. De este modo el Consejo de la Magistratura comenzará a tener presencia como institución en la sociedad, el pueblo podrá saber de qué se trata y ejercer el control en forma abierta, accesible y verdaderamente eficaz. El conocimiento de lo que se hace ya no será patrimonio de unos pocos iniciados en los misterios de las organizaciones estatales sino que pertenecerá a todos los ciudadanos. Otro tanto ocurre con el carácter público de los expedientes y de las reuniones de las comisiones; es decir la publicidad de los actos del Consejo y lo que no es menos importante, la publicidad de la actuación de los que lo integran, se consagra de modo categórico y esto es una expresión del más prístino sentido republicano de las instituciones.

4. El concepto de equilibrio ya ha sido suficientemente precisado en el sentido de que el mismo presupone, no igualdad, sino armonía en función del carácter de las representaciones que invisten quienes lo integran. Por tanto, no se ve como esta exigencia constitucional sea dejada de lado en el modo de integración propuesto en el artículo dos del proyecto. La misma palabra usada por los constituyentes como lo han señalado distinguidos constitu-

cionalistas está indicando que cualquiera sea la solución que se adopte para conformar el organismo, debe respetarse la armonía en función de la naturaleza de la representación que se ejerce. Me parece inaceptable que se hable de la capacidad de veto del oficialismo. Esto significa en primer término un prejuicio acerca de la representación política muy negativo, pero sobre todo implica el uso de un concepto de modo erróneo y con malicia. El veto es la facultad que se tiene de revocar o anular una decisión formalmente tomada por un órgano del Estado y esto no está establecido en ninguna parte del proyecto que consideramos.

Se trata pues de una metáfora, repito, maliciosamente empleada.

Tampoco tiene sentido la expresión "bloqueo" con significado negativo, pues atento a que se exigen para esas decisiones los dos tercios de votos, cualquiera que no concurra a formar esa mayoría estará bloqueando las decisiones que se quieran adoptar. Esto es también un concepto maliciosamente empleado para degradar la calidad institucional del proyecto.

5. A nosotros los peronistas muchas veces nos llamaron corporativistas por defender los derechos del pueblo trabajador y cuando defendemos la representación política democrática en un punto esencial que hace a la vigencia del orden constitucional nos dicen que somos hegemónicos.

Estamos ante la distorsión de la realidad para servir a la construcción de un discurso político opositor al gobierno que tenga algún reflejo en la sociedad.

Quieren mostrar que la sociedad está en contra del proyecto y para ello acuden a reflejar las posiciones de colegios profesionales de abogados y organizaciones no gubernamentales. Pretenden que lo numeroso de estos rechazos es expresión del rechazo masivo de la ciudadanía. Esto no sólo es falso, tampoco es nuevo.

El próximo 24 de febrero se van a cumplir 60 años del triunfo en las urnas del general Perón. Esa victoria se sustentó en la voluntad de pueblo, silenciosa pero firme frente a las múltiples manifestaciones de intereses sociales presuntamente mayoritarios, denominados fuerzas vivas, que decían reflejar la opinión de la Argentina profunda que por cierto no sólo no estaba con ellos sino en contra de ellos. La oposición a este proyecto es el pretexto para encontrar una articulación social de la oposición. Pero eso no es base para una construcción política seria. Los ecos de esta oposición no se van a apagar porque al hombre común no le interese el tema, se van a apagar por la naturaleza sustancial de la misma.

6. Tan no existe sustancia política en esa postura opositora que, vemos por medios periodísticos, algunas fuerzas políticas hacen una fuerte reivindicación de aquello que no practican o peor, tal el caso del Partido Nuevo que apenas llegado al gobierno de la ciudad de Córdoba modificó el órgano

de remoción de jueces de faltas llevando la representación del oficialismo del 33 al 66 por ciento de los integrantes de ese órgano, convirtiéndose así en una amenaza concreta a la independencia de los jueces de faltas.

7. Por último, creo que sentir deprecio por la actuación de la representación política en el Consejo de la Magistratura, como pensar a priori que un miembro de ese consejo que representa al sector político, y más aún al oficialismo, va a obrar obedeciendo a intereses subalternos, refleja un condicionamiento espiritual peligrosamente antiético con el orden democrático y con una sociedad pluralista.

Parece ser que los que se oponen a este proyecto son los únicos capaces de obrar éticamente: eso es la soberbia que nutre el autoritarismo. Concluyo recordando el pensamiento de un gran maestro de la ciencia jurídica argentina, Arturo Sampay, quien nos enseñaba que esa actitud espiritual era considerada peligrosa para los intereses de la comunidad ya en las antiguas democracias griegas y estaba dirigida a sostener el gobierno de unos pocos, oligarquía, por oposición al gobierno político que era de la polis, la ciudad del pueblo.

20

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RECALDE

#### **Fundamentos del voto afirmativo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Es mi deseo ser breve en el fundamento de mi voto en este tema de singular trascendencia.

No siendo el derecho una ciencia exacta, existen en algunas normas, y aún en las constitucionales, cuestiones abiertas a interpretación que, precisamente por esa característica —salvo la irrazonabilidad manifiesta—, excluyen su descalificación constitucional.

Es así como sostengo que ninguno de los aspectos tildados de inconstitucionales por varios de mis pares que me antecedieron en el uso de la palabra podría caer bajo ese estigma. Trataré de analizar cada uno de ellos.

Se dice que el proyecto viola la Constitución porque no existe "equilibrio" en su composición. El artículo 114 de la Constitución Nacional dice: "El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias, y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y forma que indique la ley".

Cuando el convencional constituyente utilizó el término "equilibrio", lo hizo según las explicaciones

brindadas por diputados que en 1994 participaron como constituyentes, porque no se logró consensuar el modo de integrar el Consejo de la Magistratura.

El equilibrio, situación que pretendemos en toda relación humana, institucional, política, económica o social, da lugar a interpretaciones, incluso subjetivas. Tanto es así que el mandato constitucional que surge de una frustración es incluso menos imperativo de lo que se pretende, precisamente por las dificultades que se atravesaron en la reforma y que no pudieron resolverse.

Digo que es de inferior imperatividad toda vez que no manda integrarlo "con equilibrio", sino que esa integración del Consejo, que deberá operar la ley, debe hacerse de modo que se "procure" el equilibrio. Procurar implica hacer esfuerzo para lograr lo que se desea, es intentar hacer algo; hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa.

En mi opinión, tanta falta de certeza e imperatividad aventa planteos de inconstitucionalidad.

Otra inconstitucionalidad que se plantea está relacionada con la tesis de que no se cumple el mandato de constitucionalidad que obliga a integrar el Consejo también con "jueces de todas las instancias...". Esta pretensión de descalificación busca sustentarse en la circunstancia de que el proyecto sancionado en el Senado no incluye a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para la inmensa mayoría de los abogados, se excluye a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una instancia. Las instancias son, en ese entendimiento común a que recuro, la primera instancia y la respectiva cámara de apelaciones.

Es más: la queja de los ministros del alto tribunal es, precisamente, que el cúmulo de causas que tiene es porque anómalamente se la quiere convertir en una tercera instancia.

La intervención de la Corte como "instancia" es absolutamente excepcional (conforme artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional).

La hermenéutica más adecuada es aquella que coincide con lo que es, a mi entender, la *communis opinio* de quienes trabajamos en el ámbito de la Justicia.

La ley del Consejo de la Magistratura -24.937- establece cómo se decide la elección de los jueces de todas las instancias, y antes de disponerlo, designa presidente del Consejo al presidente de la Corte Suprema, como manera de interpretar la forma de procurar equilibrio, pero no integrándolo en representación de esa "instancia".

Por último, para no caer en lo que critico y pese a mi énfasis interpretativo, como solemos decir los abogados, subsidiariamente, nadie podrá negar que cualquier interpretación a respecto seguramente puede ser opinable.

La última tacha de inconstitucionalidad planteada es la relativa al modo de remover a los integrantes del Consejo y la queja apunta a la diferenciación que hace el proyecto según se trate de abogados, académicos y científicos o jueces por un lado y legisladores y representantes del Poder Ejecutivo nacional por otro.

También aquí discrepo. El origen del mandato de unos y otros es claramente diferente, circunstancia que explica la diferenciación.

A los primeros los eligen parcialidades, a los abogados, los abogados; a los jueces, los jueces, y a los académicos o científicos, el Consejo Interuniversitario Nacional.

A los legisladores y al Poder Ejecutivo nacional los elige toda la ciudadanía, obviamente incluso los abogados, jueces, académicos y científicos.

La profunda diferencia en el origen del mandato permite la diferenciación para su revocación, tanto por imperio del sentido común que distingue entre lo diferente como por las reglas generales del mandato establecidas en nuestro Código Civil.

Creo que con lo dicho dejo sentada mi opinión sobre los posibles vicios de inconstitucionalidad adjudicados a este proyecto. Sencillamente entiendo que no los hay, y convencido de que este proyecto mejorará la actual ley del Consejo de la Magistratura es que adelanto mi voto positivo.

21

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA  
DIPUTADA RODRIGUEZ

**Fundamentos del rechazo total de la señora  
diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos  
Constitucionales y de Justicia en el proyecto de  
ley en revisión por el cual se modifica el número  
de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Vengo a fundamentar mi rechazo total al proyecto de referencia, por las razones que a continuación expresaré.

**I. Introducción**

Durante el mes de diciembre de 2005, la agenda legislativa estuvo signada por el tratamiento de un proyecto de ley impulsado desde el gobierno, para reformar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano de gobierno del Poder Judicial.

El Consejo de la Magistratura fue introducido en la reforma constitucional de 1994 con el objeto de limitar la discrecionalidad y arbitrariedad del poder político en la selección de magistrados, lo que hoy se hace a través de concursos públicos de oposición y antecedentes; y de dotarlo de un mecanismo despolitizado y más técnico para su remoción, estableciendo que el Consejo cumpliría el antiguo rol de la Cámara de Diputados como cámara acusadora

en los juicios políticos, y creando un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que asumiría el rol del Senado, como cámara juzgadora.

Tal como dispone el artículo 114 de la Constitución Nacional, el Consejo está integrado, actualmente, por 20 miembros, que representan a distintos sectores vinculados al derecho (jueces, abogados y académicos) y a los órganos políticos resultantes de la elección popular (Poder Legislativo y Ejecutivo).

El lineamiento principal del proyecto de ley del gobierno es la reducción de la cantidad de miembros del Consejo, de 20 a 13 integrantes, disminuyendo el número de representantes de abogados, jueces, académicos, y eliminando las segundas minorías parlamentarias.

Los otros ejes del proyecto proponen establecer un plazo de caducidad de tres años a las denuncias contra los jueces, la unificación de las comisiones de Disciplina y Acusación así como la exclusión de todos los abogados de la Comisión de Selección de Magistrados. Esta comisión es la que celebra los concursos para cubrir las vacantes que se producen en el Poder Judicial.

El proyecto establece también el abandono del carácter permanente del Jurado de Enjuiciamiento y su transformación en un organismo ad hoc que se reunirá para cada juicio de remoción, y la modificación de su integración de nueve miembros (3 abogados, 3 jueces y 3 legisladores) a siete (4 políticos, 2 jueces y 1 abogado).

Existen otras funciones del Consejo que también se verán afectadas por la reforma impulsada desde el oficialismo: la administración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial, la sanción disciplinaria por faltas menores a los magistrados, y todo lo concerniente a la reforma judicial y a una mejor administración de justicia.

Planteado desde la visión oficialista, el proyecto estaría dirigido a cumplir el anhelo democrático del presidente por otorgar a la Justicia un carácter más honesto e independiente. Con la reducción de integrantes propuesta, se le daría mayor dinamismo al cuerpo y se reducirían los gastos de funcionamiento. Otro de los fundamentos esgrimidos es que las modificaciones evitarían ciertos conflictos de intereses e injerencias de los jueces y abogados en funciones claves del Consejo de la Magistratura.

Empero, el proyecto ha suscitado un masivo rechazo por parte de la sociedad, generando una movilización pocas veces vista en un tema del ámbito judicial. No sólo la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el Colegio Público de Abogados y otras asociaciones que nuclean a profesionales de ese sector manifestaron su oposición al proyecto a través de documentos públicos y reuniones con los legisladores y legisladoras; similar grado de compromiso adoptaron las más reconocidas

y destacadas ONG u otras organizaciones de la sociedad civil<sup>1</sup>.

Estas organizaciones difieren con relación a cuál es la mejor integración del Consejo, pero coinciden en algo: la reducción propuesta es la peor de todas. En palabras de las ONG: "Quienes impulsan este proyecto deberían poder explicar, por ejemplo, cómo la reducción de miembros favorecerá al mejor funcionamiento del cuerpo y que, por el contrario, no disminuirá el pluralismo ni logrará una conveniente concentración de poder en manos de un solo estamento. En este sentido, es preciso advertir que teniendo en cuenta el texto del proyecto, esta reducción de miembros en vez de resultar una medida positiva, afectará de modo inconstitucional el equilibrio establecido por nuestra Constitución en su artículo 114. El quórum para sesionar pasará a ser de siete miembros y esto permitiría que el Consejo pueda funcionar sólo con los representantes políticos, alejándose claramente del equilibrio buscado por la Constitución Nacional. Es decir, con la excusa de reducir el número de consejeros, se aumentará la representación política eliminando la participación de las minorías y se limitará la participación de jueces, académicos y abogados. Estas circunstancias terminarán por alterar el equilibrio buscado por la Constitución al definir al Consejo de la Magistratura como un organismo plurisectorial, y se debilitará el freno al presidencialismo que se tuvo en miras en la reforma constitucional de 1994"<sup>2</sup>.

Adicionalmente, se argumentó que el proyecto no solucionará las deficiencias en el funcionamiento del Consejo, como ser la falta de transparencia en la toma de decisiones.

La respuesta del presidente Kirchner a las variadas críticas fue: "No nos asustan las presiones de las corporaciones o los grupos de poder. Venimos a cambiar la Argentina"<sup>3</sup>, o cuando todo el arco opositor rechazó el proyecto en una audiencia pública en la Cámara de Diputados<sup>4</sup>, lo calificó como "la máquina de impedir"<sup>5</sup>. Incluso, cuando se levan-

<sup>1</sup> Estas organizaciones, entre otras, son: Human Rights Watch, Fundación Poder Ciudadano, CELS, CIPPEC, ADC, INECIP, ACIJ, FARN, Unión de Usuarios y Consumidores, FORES, Colegio Público de Abogados, Federación Asociación de Abogados Laboristas, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Abogados Católicos, Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, Federación Judicial Argentina CTA, Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Fundación Conciencia y numerosos académicos y representantes de ámbitos universitarios.

<sup>2</sup> Declaración conjunta de siete ONG presentada al Senado de la Nación el 13-12-2005.

<sup>3</sup> <http://www.clarin.com/diario/2005/12/28/elpais/p00601.htm>.

<sup>4</sup> Ver diario "La Nación", "Macri, Carrió, Binner, y la UCR se unen para denunciar al gobierno", 28-12-05, página 6.

<sup>5</sup> <http://www.clarin.com/diario/2005/12/28/elpais/p00601.htm>.

taron voces disidentes dentro del propio bloque oficial, como por ejemplo Rafael Bielsa y Oscar Massei, éstas fueron consideradas desde el Ministerio del Interior como una forma de "conspirar contra el propio gobierno".<sup>6</sup>

Tampoco extraña que hayan decidido olvidar que en 1998 la misma senadora Fernández de Kirchner, hoy impulsora de esta iniciativa, haya rechazado un proyecto similar que pretendía otorgar el control de la magistratura al oficialismo de entonces.<sup>7</sup> Es la misma senadora que durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, se negó a recibir a la comisión integrada por miembros del Consejo, cuyo fin era interiorizarla sobre su situación y su desempeño.

Indiferente a las críticas, el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, aseguró que el oficialismo insistirá con la aprobación del proyecto de ley sin cambios, tal como fuera aprobado por el Senado.<sup>8</sup> En otras declaraciones, el diputado Agustín Rossi señaló: "No concibo ser presidente de un bloque oficialista que tenga dudas o críticas sobre los proyectos del gobierno".<sup>9</sup> Esto es una clara demostración de la estricta disciplina partidaria existente, tan nociva para el sistema republicano, por cuanto limita al Congreso a un rol de apéndice del Ejecutivo y elimina la posibilidad de disenso o debate.

Aportando una gran variedad de datos y experiencias recabadas durante mis casi 4 años como integrante del Consejo, pretendo mostrar:

- i) Cuáles son las verdaderas intenciones del proyecto oficial;
- ii) Quiénes son los reales responsables del mal funcionamiento del Consejo y qué se puede hacer para mejorarlo;
- iii) Las concesiones que el gobierno ha otorgado a las demandas corporativas de los jueces.

Como adelanto, mi interpretación remite a que el gobierno pretende controlar decisiones del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, con el fin de tener total injerencia en la selección de candidatos a jueces y en los juicios políticos a magistrados. Este control lo obtendrá mediante la reducción de los integrantes de ambos organismos. Así, la reducción de los integrantes del Consejo provocará una desproporcionada influencia del oficialismo por sobre los otros sectores representados, ya que la disminución de 20 a 1 integrantes no impactará en los 5 representantes que tiene el go-

bierno actualmente (lo que eleva su predominio del 25 % a casi el 40 % del cuerpo).

En cuanto al punto ii), identificaré propuestas que he realizado para mejorar el funcionamiento del Consejo en temas de administración y reglamentación sin que sea necesaria la reforma de la ley, y describiré una variedad de casos de denuncias por acusación y faltas disciplinarias contra jueces, que no prosperaron o no contaron con el apoyo de los representantes del propio oficialismo.

Con relación al punto iii), demostraré que la imposición de un plazo de caducidad de tres años a las denuncias contra los magistrados, más la unificación de las comisiones de Acusación y Disciplina, es de hecho una concesión al reclamo corporativo de los jueces, a lo que debe sumarse la eliminación de los abogados de la Comisión de Selección, que redundará, también, en beneficio del sector judicial.

Durante mi exposición, en primer lugar haré una breve síntesis que nos recuerde cómo se llegó a la necesidad de crear el Consejo de la Magistratura, para luego detallar cómo se llegó a la integración actual del cuerpo, describiendo su organización y funcionamiento. Luego realizaré un análisis crítico del proyecto gubernamental para reducir la integración del Consejo, describiendo cómo es el funcionamiento de las distintas comisiones del Consejo, matizando con datos concretos con el fin de contribuir a distinguir la brecha entre la realidad y el discurso oficial.

Con posterioridad, dedicaré unas palabras sobre la reforma del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y me referiré a dos cuestiones que fueron motivo del debate durante las sesiones del Senado: la ausencia de los consejeros durante las sesiones y la eliminación de ciertas competencias del Consejo vinculadas con la reforma judicial.

Finalmente, como parte de mis conclusiones, mencionaré las posiciones del gobierno antes y después de las elecciones de 2005, en especial su cambio de actitud frente a la Corte Suprema de Justicia, así como las maniobras del oficialismo para conseguir votos en la Cámara de Diputados, e incluso el accionar del presidente cuando fuera gobernador de Santa Cruz, en relación con el Poder Judicial de esa provincia.

## II. Antecedentes

### A. La crisis del sistema previa a la creación del Consejo de la Magistratura

El sistema creado por la Constitución de 1853, copiado de la Constitución norteamericana de 1787, fue blanco de muchas críticas bien merecidas.

Antes de la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, los jueces eran elegidos por el presidente, con el acuerdo de una mayoría calificada en el Senado. Esta elección quedaba a discrecionalidad del presidente y su ocasional mayoría

<sup>6</sup> Primera plana "La Nación", 29-12-05.

<sup>7</sup> Diario "La Nación" 8-5-97 Nota: Castiga el PJ a la senadora Kirchner.

<sup>8</sup> Diario "Página 12", cada quien hace su cuenta, 2-2-06.

<sup>9</sup> Diario "La Nación", reportaje a Agustín Rossi, 29-1-2006, página 6 del suplemento Enfoque.

parlamentaria en la Cámara alta. No había ningún tipo de control sobre la idoneidad técnica y moral de los candidatos. El sistema, que confiaba en que los gobernantes eligieran en forma responsable, probó su falibilidad con las pésimas designaciones durante la presidencia del doctor Carlos Menem, realizadas en aras de lograr un control político del Poder Judicial.

A la famosa ampliación de 5 a 7 de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para garantizarse una mayoría automática, cuyo mayor escándalo fue el hurto de una sentencia del libro de registro de la propia Corte Suprema y su reemplazo por otra, en un caso que presentamente afectaba el patrimonio del Estado, hecho que fue conocido como el del "recurso de arrañatoria",<sup>10</sup> hay que agregar otros escándalos vinculados a la designación de jueces para tribunales que fueron creados a partir de la instalación de la oralidad en la justicia penal,<sup>11</sup> de los cuales muy pocos reunían las condiciones básicas de idoneidad y preparación técnica para ocupar el cargo.<sup>12, 13</sup>

Así fue que, primero en los ámbitos académicos y, con el tiempo, en todo el ambiente jurídico, comenzó a imponerse la idea de que era necesario crear otro sistema para nombrar jueces, que garantizara no sólo la idoneidad de los candidatos, sino mayor transparencia e independencia. Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, pero antes de que se dictara la ley especial para poner en funcio-

namiento el Consejo, sucedieron numerosos escándalos que alimentaron las sospechas de una Justicia cercana al gobierno. La célebre servilleta que el entonces ministro del interior Corach le habría escrito al ex ministro Cavallo con los nombres de los jueces que le respondían, y las alegaciones de enriquecimiento ilícito y del pago de sobresueldos desde la Secretaría de Inteligencia del Estado, para un grupo de jueces federales con competencia para investigar los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, ya son parte del anecdotario popular.<sup>14</sup>

Algo similar sucedió con los procesos de remoción de jueces. Pese a que muchos jueces habían incurrido en "mal desempeño" o en la presunta comisión de delitos (que son las razones para remover a un juez), hasta 1998 —año en que empezó a funcionar el Consejo— sólo se acusó a 27 jueces, de los cuales 19 fueron destituidos, cifra que incluye a los 4 jueces de la Corte Suprema destituidos por el presidente Juan Domingo Perón en 1946.<sup>15</sup> Era evidente que el sistema de remoción previsto por la Constitución no funcionaba. El principal motivo fue la falta de voluntad de los partidos políticos para impulsar la destitución de jueces que habían sido designados por esos mismos partidos. Por último, este sistema resultaba muy perjudicial para los propios jueces, quienes podían ser objeto de enormes presiones a través de investigaciones realizadas por un cuerpo exclusivamente político.

En definitiva, estos antecedentes explican cómo se fue generando un reclamo a favor de una mayor independencia del Poder Judicial respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para dar respuesta a ese reclamo, se concibió un cambio en el método de selección y remoción de jueces, concretándose a través de la creación de un órgano de gobierno del Poder Judicial, adaptando modelos de Consejos de la Magistratura de ciertos países europeos, como España, Francia e Italia.

### B. El origen, la integración y la organización del Consejo de la Magistratura de la Nación

La ley 24.309, declarativa de la reforma constitucional de 1994, producto del Pacto de Olivos, ya

<sup>10</sup> Horacio Verbitsky, *Hacer la Corte*. Ed. Planeta, Buenos Aires, páginas 445-455; ver igualmente, "Página 12", 30-7-93, *Suprema a la Puttanesca*.

<sup>11</sup> De hecho, al instaurarse la oralidad en los juicios penales, en el año 1991 se creó la "Comisión Asesora de la Magistratura" ideada por el entonces ministro de Justicia, León Arslanian para evitar que se nombraran jueces que no eran lo suficientemente idóneos. Esta propuesta fracasó y terminó con la renuncia del ministro de Justicia, quien se negó a avalar el nombramiento de algunos jueces propuestos por el presidente, a quienes calificó de "eserpentos".

<sup>12</sup> No olvidemos el famoso caso de la candidata a jueza Ana Capolupo de Durañona y Vedia quien había desarrollado su carrera en el fuero civil, pero que fuera nominada como jueza en la Cámara Nacional de Casación Penal el máximo tribunal del fuero penal. Al ser consultada sobre sus aptitudes para la investidura, la candidata contestó que a partir de ese momento pensaba dedicarse a estudiar derecho penal. Otro caso paradigmático fue el nombramiento del actual juez federal en lo criminal Norberto Oyabide quien presentó sus antecedentes el 22 de abril de 1991, dos días después de que el presidente Menem firmara su nombramiento como juez el 20 de abril de ese año. Ver Horacio Verbitsky, *Hacer la Corte*, Ed. Planeta, Buenos Aires, páginas 47 a 51, 391-411.

<sup>13</sup> Hubo casos en los que el candidato ni siquiera era abogado, como el famoso caso de Jorge Damonte, quien fuera nombrado fiscal en 1992 y ascendido en dos oportunidades por el ex ministro de Justicia, Jorge Maiorano. La idoneidad de Damonte descansaba en un título de abogado adulterado pero fundamentalmente en ser hijo de la tarotista personal del entonces presidente Carlos Menem.

<sup>14</sup> Revista "Veintiuno", ediciones del jueves 13-8-98 (nota: *Coimas y Sobresueldos en la Justicia Federal*) y del 20-8-1998 (nota La ley de la Coima).

<sup>15</sup> Antes de 1994, el sistema de remoción de jueces funcionaba de la siguiente manera: en primer lugar, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados hacía una investigación preliminar de las denuncias. Luego, si se consideraba que había elementos suficientes como para iniciar el proceso de remoción, se elaboraba un dictamen acusatorio que era presentado ante la Cámara de Diputados en pleno. Si se aprobaba dicho dictamen por la mayoría de 2/3 de los miembros presentes, se nombraba a dos diputados para que actuaran como fiscales (o sea, acusadores) ante la Cámara de Senadores que, por su parte, actuaría como juez. Para remover a un juez se requería una mayoría calificada de dos tercios.

contemplaba la inclusión de un Consejo de la Magistratura con un articulado casi idéntico al que finalmente se aprobó en la Convención Constituyente de Santa Fe, en el artículo 114 de la Constitución.<sup>16</sup> Lamentablemente no se pudo avanzar en la definición de temas claves como la composición del Consejo. Por ello, la Constituyente dejó intacta la noción de equilibrio entre los distintos estamentos relacionados con la Justicia, prevista en la ley 24.309 (jueces, abogados y funcionarios resultantes de la elección popular, más los académicos), y estableció que una ley especial regularía la composición y el funcionamiento del Consejo, la que supuestamente debía dictarse a los 360 días de aprobada la reforma constitucional (cláusula transitoria de cimitercera).

La ley especial en cuestión, 24.937, pudo aprobarse recién el 30 de diciembre de 1997, previo acuerdo político de sancionar una ley correctiva (la 24.939) que agregaría un consejero académico más,

<sup>16</sup> El artículo 114 de la Constitución Nacional dispone: "El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

"El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley.

"Serán sus atribuciones: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores;

"Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores;

"Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.

"Ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados;

"Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente;

"Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia.

"Artículo 115 de la Constitución Nacional: Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las expresadas en el artículo 53, por un período de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecorrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios.

"Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo.

"En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y el procedimiento de este jurado."

elevando la totalidad de integrantes a 20 consejeros. La ley 24.937 preveía un solo académico, lo que podía considerarse inconstitucional, dado que el artículo 114 de la Constitución los menciona en plural: "... otras personas del ámbito académico y científico". De más está decir que el retraso en la sanción de esta ley implicó una enorme parálisis entre 1994 y 1997, con ribetes vergonzosos en la cobertura de vacantes para cargos de juez, y que recién se solucionó en julio de 1999.<sup>17</sup>

La causa de la demora fue la dificultad para lograr el tan citado "equilibrio" entre los distintos sectores que la Constitución dispuso para integrar el Consejo, y cierta puja por parte de los jueces para no perder su poder, en cuestiones como la administración del presupuesto y la sanción disciplinaria de sus pares.<sup>18</sup>

En definitiva, la integración del Consejo de 20 miembros se organizó de la siguiente manera:

1. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.<sup>19</sup>

2. Cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación. Se previó asimismo que debía garantizarse la representación igualitaria de los jueces de diferentes instancias y de los jueces federales del interior. Los representantes de los jueces son elegidos entre ellos, elección que se lleva a cabo en la actualidad a través de las asociaciones profesionales, como la Asociación de Magistrados.<sup>20</sup>

3. Ocho legisladores. Sobre esto, dispone la ley: "A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con

<sup>17</sup> El diario "La Nación" publicó en su revista dominical, como nota de tapa "Otro año sin justicia", el 21-9-1997, una profusa investigación sobre las razones que trababan en el Congreso la sanción de la ley, y las consecuencias de esa parálisis. Por aquellos años, como el presidente Menem ya no podía designar jueces bajo el viejo sistema, abusaba de "traslados"; esto implicaba un mecanismo de dudosa constitucionalidad que consistía en trasladar jueces en actividad, que había obtenido su acuerdo senatorial para determinado fuero, para desempeñarse en otros fueros, sin pasar por el tamiz del Senado de la Nación. Ver también diario "La Nación", 513/99, pág. 8, "Impiden a Menem el traslado de jueces", y edición del 10-7-1999, nota de tapa, Nadie nombra ni juzga a los jueces.

<sup>18</sup> Diario "Clarín", 29-96, nota de tapa: "Ofensiva contra el Consejo de la Magistratura".

<sup>19</sup> En la actualidad, este cargo lo ejerce Enrique Petracchi.

<sup>20</sup> En la actualidad, los representantes de los jueces son:

Claudio Kiper (Camarista del fuero civil de la ciudad de Buenos Aires); María Victoria Pérez Tognola (jueza de primera instancia en el fuero de la seguridad social de la ciudad de Buenos Aires); Abel Cornejo (juez federal de Salta); Bindo Caviglione Fraga (camarista del fuero comercial de la ciudad de Buenos Aires).

mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría".<sup>21</sup>

4. Cuatro representantes de los abogados, de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. De igual forma se previó que estuviese garantizada la presencia de abogados del interior de la República.<sup>22</sup>

5. Un representante del Poder Ejecutivo.<sup>23</sup>

6. Dos representantes del ámbito académico y científico.<sup>24</sup>

El funcionamiento del Consejo tiene una lógica similar a la del Congreso. Existen reuniones Plenarias con la totalidad de los integrantes para debatir y aprobar las distintas cuestiones que se tratan, pero todos los temas que se elevan al plenario cuentan con dictámenes de comisiones, que se conforman en atención a las distintas competencias del cuerpo:

*Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial:* su objetivo principal consiste en convocar concursos públicos de oposición y antecedentes, para cubrir las vacantes que se producen en los tribunales inferiores de la Nación.

*Comisión de Acusación:* su función es investigar las denuncias contra magistrados inferiores de la Nación y, eventualmente, elevar al plenario del Consejo su acusación a los fines de su remoción por haber incurrido en las causales de destitución previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional (mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes).

*Comisión de Disciplina:* Es la encargada de recomendar al Plenario del Consejo sanciones discipli-

plinarias a los jueces por faltas que no revisten una gravedad tal que justifique su remoción.<sup>25</sup>

*Comisión de Administración y Financiera:* tiene como competencias fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, realizar auditorías y efectuar el control de legalidad de la administración, informando periódicamente al Plenario del Consejo del resultado de su gestión.

*Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación y Reforma Judicial:* esta comisión fue creada por el plenario del Consejo, con el objeto de impulsar las reformas necesarias referidas a la organización del Poder Judicial, y para asegurar la independencia de los jueces y una eficaz prestación del servicio de justicia.

### III. Análisis crítico del proyecto de reducción del consejo

Desde el gobierno se apoyó el proyecto de ley de reforma al Consejo de la Magistratura brindando una versión parcial de su funcionamiento; en particular, cobertura de vacantes con retrasos importantes, reticencia de los jueces a remover y sancionar disciplinariamente a sus pares, y que su mal funcionamiento proviene del excesivo poder otorgado a los consejeros, jueces y abogados, quienes actuarían movidos por el interés de la corporación a la que pertenecen, en desmedro del bienestar del Poder Judicial.<sup>26</sup>

En cuanto a su estructura administrativa, se habló de un monstruo burocrático, cuyos miembros

<sup>21</sup> Representantes de la Cámara de Diputados: Carlos Kunkei (Frente por la Victoria) en reemplazo de Jorge Casanovas, PJ Duhaldista, cuyo mandato terminó en diciembre de 2005; Diana Conti (Frente por la Victoria) en reemplazo de María Lelia Chaya, PJ, cuyo mandato terminó en diciembre de 2005; Federico Storani (UCR) en reemplazo de Juan Jesús Minguez, cuyo mandato terminó en diciembre de 2005; Marcela Rodríguez (ARI) cuyo mandato termina en diciembre de 2006; representantes de la Cámara de Senadores: Nicolás Fernández (Frente por la Victoria) en reemplazo de Jorge Yoma (PJ), cuyo mandato terminó en diciembre de 2005; Miguel Angel Pichetto (PJ) actual Frente por la Victoria; Norberto Massoni (UCR) en reemplazo de Carlos Prades (UCR), cuyo mandato terminó en diciembre de 2005; Ricardo Gómez Díez (Partido Renovador de Salta).

<sup>22</sup> Son representantes de los abogados los doctores Eduardo Orio, Beínasz Székler, Enrique Pereira Duarte y Lino Palacio.

<sup>23</sup> Actualmente es el doctor Joaquín Da Rocha.

<sup>24</sup> En la actualidad: los doctores Humberto Quiroga Lavie y Juan Carlos Gemignani.

<sup>25</sup> El artículo 14 de la ley 24.937 prevé las siguientes faltas disciplinarias: La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial; las faltas a la consideración y el respeto debidos a otros magistrados; el trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la Justicia o litigantes; los actos ofensivos al decoro de la función judicial o que comprometan la dignidad del cargo; el incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias; la inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado del horario de atención al público; la falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional. Las sanciones previstas por la comisión de algunas de dichas faltas son: advertencia, apercibimiento, o multa de hasta el 30 % de los haberes del magistrado.

<sup>26</sup> La senadora Fernández de Kirchner se refería así sobre este tema, durante la sesión extraordinaria del Senado del 21-12-2005: "Reitero: en el tema de la administración de justicia, tienen mucho más peso específico y muchos más intereses que representar y que defender jueces y abogados que legisladores. Versión taquigráfica de la Cámara de Senadores, 420 reunión, sesión extraordinaria del 21-12-2005, página 118".

En otro pasaje, señaló "o sea, que ningún juez quiere acusar a otro juez. Por favor, que alguien me explique si existe una deformación más grande del criterio de corporación y de representación de intereses que defender a rajatabla a los que son pares de uno" (página 119).



no van siempre a trabajar, que es ineficaz, con una estructura de 230 o 240 funcionarios permanentes, y que cada consejero posee entre 7 y 10 asesores, con la mayoría de los sueldos equivalentes a los de un presidente de cámara.<sup>27</sup>

A continuación, haré una crítica a los argumentos esgrimidos por el gobierno, afirmando que la reducción del Consejo implicará un desequilibrio en su integración, y que no lo convertirá en un organismo más ágil.

La médula del proyecto es la reducción de los integrantes del Consejo de 20 integrantes a 13, de acuerdo con el siguiente esquema:

| <i>Integración actual</i>                  | <i>Proyecto de ley</i>   |
|--|--|
| Presidente de la Corte Suprema             | Se elimina   |
| 4 jueces                                   | Se disminuyen a 3  |
| 4 abogados                                 | Se disminuyen a 2  |
| 8 legisladores (4 senadores y 4 diputados) | Se disminuyen a 6, eliminando las segundas minorías de cada Cámara |
| 2 académicos                               | Se disminuye a 1 representante                                     |
| 1 representante del PEN                    | Se mantiene  |

Estos días pasados, hemos escuchado muchas interpretaciones sobre lo que la Constitución establece cuando dispone que el Consejo debe tener equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, sin olvidar la representación del sector académico. Como Elisa Carrió nos recordara en el debate de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el querido jurista Genaro Carrió supo explicar que hay ciertas palabras cuyo significado tiene zonas de claridad —no tenemos dudas al respecto— y otras de penumbra, es decir que sobre esos términos existe cierta indeterminación o vaguedad.<sup>28</sup> Con respecto al concepto de equilibrio, podríamos discutir si la integración de 20 consejeros es equilibrada, pero ciertamente, no hay dudas de que 13 consejeros, con la distribución entre los distintos sectores que se pretende, no lo es, pues, en definitiva, equilibrio implica que ningún sector o estamento ni partido político prevalezca por sobre los otros.

En los debates del proyecto, la senadora Cristina Fernández de Kirchner dijo que la respaldan 3 mi-

llones de votos que obtuvo en la elección de octubre de 2005, aunque en la campaña electoral jamás se mencionó la intención del gobierno de impulsar este proyecto, que si reunió, por el contrario, un amplio y unánime rechazo del arco político opositor y de numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Muy distinto hubiera sido que el gobierno impulsara una consulta popular, prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional, poniendo en consideración su proyecto.

El argumento de haber ganado las elecciones, y que entonces ello debe ser proyectado en la integración del Consejo, remite a una dudosa concepción democrática, reducida a la mera regla de mayoría. Democracia sería sinónimo de dar mayor poder y facultades a las mayorías. Para esta posición, cualquier decisión adoptada por la mayoría es una decisión democrática y legítima. Por eso, según esta concepción, quienes se oponen inmediatamente se convierten en actores antidemocráticos. Pero ésa es una extraña idea de democracia. Si fuera así, ni la división de poderes, ni el control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial, ni los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y en los tratados de derechos humanos, tendrían algún sentido, porque los derechos fueren concebidos como frenos a las mayorías, que pueden llegar a transformarse en tiránicas y opresoras de las minorías. Por algo la Constitución Nacional habla de “equilibrio”, y no que deberán prevalecer las mayorías en el Consejo, justamente, por el rol que los constituyentes le dieron al Poder Judicial.

La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de cada ciudadano, para que se puedan hacer efectivos sus derechos y para resguardar el sistema democrático de gobierno. Sin independencia judicial, no hay posibilidad cierta de respetar y asegurar los derechos humanos.

En definitiva, con la excusa de desburocratizar el Consejo, se esconde la intención de dominar las decisiones que se adoptan, ya que el único que no ve una merma en su representación es el partido oficialista.

Hoy, el Frente por la Victoria tiene mayoría en ambas cámaras parlamentarias. Por lo tanto designa a 5 consejeros (2 senadores, 2 diputados y un representante del Poder Ejecutivo nacional). Una cosa es el porcentaje de 5 consejeros sobre un total de 20 (25 %), y otra es tener 5 consejeros en un cuerpo de 13 integrantes (casi un 40 %). Si se tiene en cuenta que para decidir la acusación de un juez, o aprobar las ternas de candidatos a jueces que se envían al Poder Ejecutivo, se requiere una mayoría especial de 2/3, es fácil concluir quién tendrá poder de veto para las decisiones importantes. Dos tercios sobre 13 integrantes serán 9 votos. Por lo tanto, alcanzará con los 5 votos oficialistas para oponerse o bloquear decisiones que los 8 miembros restantes quieran adoptar, pues les faltará un voto para llegar a la mayoría requerida.

<sup>27</sup> Senadora Fernández de Kirchner. Versión taquigráfica citada supra nota 28, página 115.

<sup>28</sup> Genaro Carrió, *Notas sobre el derecho y el lenguaje*, cuarta edición, Ed. Abeledo Perrot, 1990, página 31.

En el debate en el Senado, ante estas críticas, la senadora Fernández ofrecía bajar la mayoría especial de 2/3 requerida para las decisiones más importantes a mayoría absoluta, argumentando que de esta manera el oficialismo no dominaría el Consejo. Si se adoptara esa propuesta, una mayoría de 7 miembros decidiría las temas en los concursos y las acusaciones (o un número menor aún si las decisiones se toman teniendo en cuenta sólo el número de miembros presentes). Este esquema es igualmente peligroso, porque el oficialismo necesitaría contar solamente con los votos adicionales, en vez de los 8 que requiere actualmente, para llegar a los dos tercios, o de los 6 para obtener la mayoría, y con tal fin podrían acudir a una debilitada oposición o a alguno de los otros dos sectores —jueces, abogados— a cambio de algún favor. Además, podría arribarse a la mayoría absoluta solamente con los votos de los representantes de los poderes políticos, tornando irrelevante la presencia de jueces, abogados y académicos.

Ante decisiones de suma importancia institucional, que requieren amplios consensos, tanto los constituyentes como los legisladores siempre han optado por establecer la necesidad de contar con mayorías especiales.

Por otra parte, la nueva composición que propone el proyecto es claramente inconstitucional, toda vez que asigna sólo un representante académico, mientras que el artículo 114 de la Constitución Nacional dispone que el Consejo será integrado "... por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Como surge claramente de la letra de la Constitución Nacional, y como se plasmó en la mencionada ley correctiva 24.939, "otras personas" supone al menos más de un representante del ámbito académico y científico. Salvo que, como parece, el plural haya cambiado de significado para el oficialismo.

Uno de los riesgos principales es de excluir a las minorías y de disminuir la representación de los abogados es que lo que suceda en el Consejo perderá visibilidad: suelen ser las minorías las que denuncian los acuerdos espurios en las comisiones de Disciplina, Acusación y Selección, las malas contrataciones de recursos humanos, etcétera, y los llevan al debate público.

Sabemos que uno de los desafíos del sistema democrático es lograr que los representantes prioricen las instituciones por sobre sus propios intereses. Como esto es difícil de lograr sin el control de la ciudadanía, es fundamental contar con organismos plurales que garanticen la representación de las minorías. Esta pluralidad ha demostrado ser el mejor, y a veces el único, mecanismo para informar y alertar sobre lo que está pasando tanto a los medios como a las organizaciones de la sociedad civil.

No es cierto que se logre una mayor agilización de la gestión del Consejo con la reducción de propuestas, como argumenta el oficialismo para justificar su

proyecto.

Suele compararse la situación del Consejo de 20 miembros con la ampliación de la Corte Suprema, pero se trata de situaciones distintas. Ambos órganos judiciales trabajan de una manera muy diferente: con la ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros, el trabajo se retrasó pues por cada proyecto de sentencia, los expedientes circulan vocalía por vocalía entre los 8 despachos restantes. Si en la circulación de un expediente, uno de los jueces no está de acuerdo con el proyecto de sentencia, redacta el suyo propio, y la ronda vuelve a comenzar para que todos puedan analizar la nueva propuesta.

Pero, no sucede lo propio en el Consejo: todos los dictámenes recomendando la aprobación de resoluciones se distribuyen entre los 20 consejeros, en forma simultánea por vía electrónica y/o papel, y se votan en forma conjunta en la siguiente Plenaria. Por ello, que lo analicen 13 consejeros o 20 no alterará los tiempos, pero ciertamente los debates entre 13 no serán tan ricos como entre 20.

Lo que se logrará es la aprobación de los temas o el tratamiento de acusaciones o desestimaciones de las denuncias contra los jueces, pero sin el valor testimonial de las minorías disidentes, tanto del estamento de los abogados como de los legisladores.

#### IV. *Funcionamiento del Consejo de la Magistratura*

##### *A. Comisión de Selección de Magistrados*

###### *A. 1. Descripción del proceso de selección*

El proceso para cubrir una vacante de un magistrado es complejo dada la importancia institucional que reviste designar a un funcionario de tal jerarquía en un cargo que goza de inamovilidad. Producida la vacante, la comisión convoca a un concurso público de antecedentes y oposición con una amplia difusión. Los concursantes son evaluados en tres aspectos: un examen (corregido en condiciones de anonimato por un jurado integrado por un juez, un representante de los abogados y otro del sector académico), sus antecedentes laborales y académicos, y dos entrevistas personales, una ante los integrantes de la comisión, y una segunda ante el pleno del Consejo, lo que da la oportunidad a los consejeros que no integran la comisión de hacer preguntas a los concursantes preseleccionados.

A ello, se agrega un examen psicotécnico para evaluar otros aspectos de los candidatos, vinculados con su estabilidad emocional, sus motivaciones y su capacidad para conducir un grupo.

Como resultado final del concurso, previo dictamen de comisión, el plenario del Consejo, con el voto de los dos tercios de los presentes, integra una terna con los tres concursantes mejor calificados, la que es enviada al presidente de la Nación. En el caso de que alguno de los tres candidatos haya sido

seleccionado para una terna anterior, se eleva igualmente una lista complementaria con nuevos candidatos.

El Poder Ejecutivo, a su vez, convoca a un proceso público y consultivo, previsto en el decreto 588/03, para que la ciudadanía apoye o impugne las candidaturas, y luego selecciona a uno de los tres candidatos y remite el pliego al Senado de la Nación. En el Senado, nuevamente se lleva adelante un proceso público y consultivo en forma previa a dar acuerdo al candidato propuesto por el Poder Ejecutivo nacional.

Desde su creación, el Consejo ha celebrado 119 concursos y elevado 240 ternas para cubrir vacantes (hay concursos convocados para cubrir más de una vacante dentro de un mismo fuero y para una misma categoría de juez, ya sea de primera o segunda instancia).

Esta es la evolución, de donde surge el retraso del Poder Ejecutivo nacional en la selección de los candidatos:

| Año   | Ternas remitidas por el CM | Designaciones del PEN |
|-------|----------------------------|-----------------------|
| 2000  | 10                         | —                     |
| 2001  | 49                         | 33                    |
| 2002  | 31                         | 47                    |
| 2003  | 39                         | 10                    |
| 2004  | 82                         | 40                    |
| 2005  | 30                         | 71                    |
| Total | 240                        | 201                   |

En trámite, existen 28 concursos que cubrirán 68 vacantes.

En cuanto a la selección de jueces, de acuerdo con una investigación reciente efectuada por el diario "La Nación",<sup>29</sup> se tardan en promedio casi dos años en cubrir una vacante de juez. Mientras el Consejo demora en promedio diez meses para cumplir con todo el proceso necesario para remitir las ternas al Poder Ejecutivo,<sup>30</sup> éste se toma 11 meses únicamente para seleccionar a uno de los ternados (el proceso del decreto 588/03 no debiera tomarle más de 45 días de acuerdo con los plazos allí previstos) y elevar su pliego para el acuerdo del Senado, que demora al menos dos meses más, según indica la publicación periodística.

<sup>29</sup> Diario "La Nación", 16-1-06, nota "Tardan dos años en reemplazar a un juez".

<sup>30</sup> El proceso ante el consejo incluye la composición del jurado, el concurso de oposición y la evaluación de antecedentes de todos los candidatos, una entrevista personal ante la Comisión de Selección, un test psicotécnico para evaluar la aptitud para desempeñarse como magistrado y una entrevista final ante el plenario del consejo.

## A. 2. La acumulación de ternas en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional

Estos números revelan que las razones del retraso en el nombramiento de jueces deben buscarse en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y no en el Consejo de la Magistratura. Por tal motivo, no se justifica un cambio en la legislación para agilizar los concursos en el Consejo, como argumentó el gobierno.

El Poder Ejecutivo nacional demora 11 meses porque, acumulando ternas, especula con ampliar su discrecionalidad en la selección de candidatos. Esto puede suceder, por ejemplo, en un caso en que los ternados que no les agradan se repitan en otras ternas y, cuando eso pasa, poder mandarlos a los juzgados de menor importancia. Esto ocurre porque muchos concursantes se anotan en varios concursos sucesivos y los mejores resultan seleccionados en más de una terna. Así, también puede designar en otros juzgados a quienes están en la terna de un juzgado importante y, de esta manera, habilitar que sea seleccionado para el juzgado deseado a quien está ubicado en el quinto o sexto lugar en el orden de mérito. Esto dado que en concursos para cubrir dos o más vacantes en un mismo fuero, el Consejo debe remitir más de tres nombres para integrar las ternas, ya que si para el primer juzgado se propusieron los candidatos a), b) y c), al designar al candidato a), es necesario agregar un cuarto candidato, d), para conformar una nueva terna para que el Poder Ejecutivo nacional cubra la vacante del segundo juzgado, y así sucesivamente.

Supongamos dos concursos, uno para cubrir una vacante en un juzgado de instrucción, a cargo de investigar delitos comunes, y otro concurso para cubrir una vacante en un juzgado federal penal, a cargo de investigar delitos de corrupción de los funcionarios. Un concursante presumiblemente independiente salió ternado para ambos juzgados, y otro concursante, más cercano al gobierno, quedó cuarto en el concurso para cubrir la vacante del juzgado federal. Como el Poder Ejecutivo nacional no puede elegir a su candidato por estar cuarto en el orden de mérito, lo que hace es designar al concursante independiente en el juzgado de instrucción, e integrar una nueva terna para el juzgado federal con "su" candidato, el que estaba en cuarto lugar. Una vez en la terna, el Poder Ejecutivo nacional lo selecciona y lo designa juez en el juzgado que reviste mayor importancia política.

## A. 3. La valuación de los antecedentes de los concursantes

Durante el debate del proyecto del gobierno en el Senado, se mencionaron ciertos problemas en la Comisión de Selección referidos a que el Consejo revisa la valoración que realizan los jurados de los concursos respecto de los candidatos, aumentando o disminuyendo el puntaje, de acuerdo con criterios de amiguismo o cercanía con algún consejero (sea

político, abogado, juez o académico). Esta circunstancia, que pudo haberse dado en ciertos casos, no será corregida por este proyecto, dado que no establece ninguna medida para evitar este mecanismo, demostrando la distancia entre el discurso oficial y la realidad.

Es más, este problema se exacerbó, por una reforma anterior a la ley del Consejo 24.937, aprobada por ley 25.669 en noviembre de 2002 y siempre impulsada por el oficialismo. Esta ley restó importancia a los jurados en los concursos, al limitar su rol a la confección y corrección de los exámenes, y transfirió a la Comisión de Selección la facultad de valorar los antecedentes de los candidatos, con el argumento de tener cierta coherencia u homogeneidad con los otros concursos, ya que algunas veces un concursante inscrito en dos concursos encontraba que los distintos jurados evaluaban en forma dispar un mismo antecedente.

Si bien la intención podía ser correcta, conspiró contra la evaluación técnica de los jurados y le otorgó una mayor discrecionalidad a la Comisión de Selección, que justamente es donde hay mayor proclividad a presiones e intereses políticos y menos transparencia, y, bajo el argumento de la valoración de los antecedentes, puede cambiar drásticamente el orden de mérito del jurado. Esto provoca que una mala nota en el examen pueda ser compensada con una mayor valoración de los antecedentes, o que predominen candidatos de edad avanzada, cercanos a los 60 años, con un importante volumen de antecedentes con anhelos de jubilarse con un cargo de juez, postergando una mayor renovación generacional o dificultando el acceso a la magistratura de las mujeres, que por las responsabilidades domésticas enfrentan mayores obstáculos en relación con la asistencia a cursos, posgrados, etcétera.

Por otra parte, la ley inclusive debilitó los requisitos para ser jurado en un concurso, eliminando la obligación de contar con 15 años de ejercicio de la profesión. Esta ley fue aprobada gracias al impulso del oficialismo y el radicalismo y sólo fue rechazada por algunos sectores de la oposición, en particular el ARI.<sup>31</sup>

#### *A. 4. La exclusión de los abogados de la Comisión de Selección ante potenciales conflictos de intereses*

Otra de las propuestas del oficialismo es la exclusión de los representantes de los abogados de la Comisión de Selección, invocando potenciales conflictos de intereses. Según el gobierno, un abogado no puede promover la designación de jueces ante quienes, eventualmente, podría litigar un caso. Con este prejuicio, lo que el proyecto hace es terciar a favor de la corporativización del Poder Judicial, dando una ventaja comparada a los funcionarios ju-

diciales para acceder a la magistratura por sobre los abogados.

Pero si de prevenir conflictos de intereses se trata, los representantes políticos también los tienen; ¿o acaso los jueces a quienes los políticos designan y juzgan, no son los que investigan actos de corrupción? En su columna política del diario "Perfil",<sup>32</sup> el periodista Jorge Lanata reseñó 264 causas contra funcionarios de este gobierno, de las cuales 134 permanecen abiertas. Entre los conflictos de interés, se encuentra la relación que puedan tener los candidatos con miembros del gobierno. Ejemplo de ello es el caso del hermano del ex senador Yoma y ex integrante del Consejo, actual embajador en México, que es el candidato principal para ocupar el cargo de juez federal con competencia electoral en La Rioja.

Una nueva contradicción en torno a posibles conflictos de intereses es que, si bien se excluye a los senadores de integrar la Comisión de Selección porque ellos intervienen desde el Senado para dar el acuerdo, no se hace lo propio con el representante del Poder Ejecutivo, quien debe asesorar al presidente para decidir qué pliego enviar entre quienes integran la terna.

Limitando la composición de esta comisión, a legisladores y jueces, se reduce la posibilidad de control en la designación de magistrados, pues los consejeros que representan a abogados y académicos sólo podrán analizar los concursos en el plenario, con lo cual lo único que podrán hacer es aprobar o desechar el dictamen de comisión. Pensemos que la terna luego queda en manos del Poder Ejecutivo y el Senado. La hegemonía partidaria queda brutalmente expuesta.

#### *A. 5. Conflictos de intereses en el gobierno: el caso "Montanaro"*

Domingo Montanaro es secretario de un juzgado. Participó en numerosas ocasiones en concursos para ocupar el cargo de juez penal. En uno de estos concursos defendió la aplicación de la pena de muerte para casos en que se atentara contra la vida de funcionarios públicos. Cuando lo interrogué sobre esa postura, respondió que ya había cambiado su posición porque cuando la sustentaba no había advertido que los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional prohibían la aplicación de la pena de muerte en nuestro país. Además, dijo haberse dado cuenta de que con la pena de muerte no había oportunidad de resocializar al preso, que es el fin constitucional del castigo. A partir de esa posición, fui la única integrante del Consejo que se negó a incluir en una terna a este candidato. El senador oficialista Miguel Ángel Pichetto lo defendió ferrea y públicamente, diciendo que estar a favor o en contra de la pena de muerte era una

<sup>31</sup> Ver sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación del 14-8-2002.

<sup>32</sup> Diario "Perfil", 24-12-2005.

cuestión de criterios y que él mismo se sentía identificado con el candidato por haber defendido en alguna ocasión una postura similar.

Posteriormente, se supo, a través de un informe psicotécnico de carácter reservado en el marco de un concurso, que el doctor Montanaro no era apto psicológicamente para ser juez. Dado que el doctor Montanaro ya había sido ternado para ocupar otros juzgados, la Comisión de Selección decidió comunicar esta circunstancia al Poder Ejecutivo nacional.

En el ínterin, Montanaro fue designado como juez "subrogante" (es decir, como suplente) por la Comisión de Selección, apoyado por los legisladores oficialistas y los consejeros jueces, en un juzgado correccional vacante, y para el cual Montanaro estaba concursando. Al poco tiempo, varios empleados del juzgado pidieron licencia por enfermedad por razones psiquiátricas, lo que llevó al sindicato de empleados judiciales a denunciar a Montanaro por acoso laboral. De hecho, estos empleados denunciaron el maltrato verbal que recibían a diario por parte del juez subrogante.

Cuando se discutía la situación del doctor Montanaro en el Consejo, el senador Pichetto reveló públicamente que el resultado del examen psicotécnico era no apto, algo de lo cual se hablaba en los "pasillos". Pese a la oposición de algunos consejeros, el senador Pichetto insistió en que Montanaro fuese propuesto como juez en otras ternas a elevarse al Poder Ejecutivo, lo que así se hizo. Finalmente, y a pesar de que el Poder Ejecutivo nacional conocía oficialmente el resultado del informe psicotécnico, Domingo Montanaro fue propuesto como juez correccional, justamente para el cargo que ya estaba ocupando como subrogante. En la actualidad, esta propuesta está pendiente ante el Senado de la Nación.

La férrea defensa de Montanaro obedecía a una segunda intención, que se vincula con la acumulación de ternas. Ocurrió que Montanaro estaba ternado para ocupar el cargo de juez federal en la provincia de La Rioja, lo cual, en una provincia, tiene un peso político enorme, porque son juzgados con competencia electoral. El candidato que estaba en tercer lugar, en ese concurso, era ni más ni menos que el hermano del ahora ex senador y ex consejero Jorge Yoma. Al promover a Montanaro a otro juzgado, más la designación como juez federal en Mar del Plata de quien fuera primero en el concurso de La Rioja, se permitió que Tomás Yoma, quien obtuvo poco más de 40 puntos sobre 100 en el examen de oposición, pasara a encabezar la terna para el juzgado de La Rioja. Actualmente, la remisión del pliego al Senado de Tomás Yoma está pendiente en el Poder Ejecutivo.

## B. Comisión de Acusación

### B. 1. Funcionamiento

La Comisión de Acusación es la encargada de llevar adelante la investigación de las denuncias con-

tra magistrados cuyos hechos, de comprobarse, puedan derivar en una remoción. Para la investigación, cada denuncia se sortea entre los integrantes de la comisión con el fin de determinar quién actuará como consejero instructor, quien debe proponer a la comisión las medidas probatorias a adoptar.<sup>33</sup> Si reúne elementos suficientes, previo a dar el derecho a un descargo y a producir prueba al juez acusado, el consejero instructor elabora un dictamen acusatorio que pone a consideración de los miembros de la comisión. Si éste es aprobado, se eleva a consideración del plenario, que lo debe aprobar por dos tercios de los votos de los miembros presentes. En ese acto, se decide qué consejeros actuarán como fiscales ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, y se suspende al acusado hasta tanto se resuelva su situación en el juicio político.

En sus 7 años de vida, el Consejo impulsó 16 juicios, con el resultado de 9 jueces removidos por acciones contrarias a su investidura, 2 jueces repuestos en su cargo y 5 que, para evitar ser enjuiciados, renunciaron luego de ser acusados. Varios jueces renunciaron durante el proceso de investigación llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura con el fin de eludir una eventual acusación. Como comparación, en toda la historia institucional que abarca de 1853 a 1998 -138 años- sólo se acusó a 27 jueces, de los cuales 19 fueron destituidos por el Senado y 8 absueltos.<sup>34</sup>

Seguramente el Consejo pudo haber sido aún más eficaz. Lo cuestionable es que según el gobierno, la supuesta inacción del Consejo reside en las actitudes corporativas de jueces y abogados que protegen a los jueces. Esta afirmación es una verdad a medias, pues no hay protección posible sin el acompañamiento de los legisladores del oficialismo. Más aún, existen casos de jueces a quienes se les atribuían graves faltas que no fueron removidos o sancionados por el Consejo debido a la posición de los representantes oficialistas.

### B. 2. Los casos más paradigmáticos que demuestran la protección de los representantes del oficialismo

#### i) Caso "AMIA". Protección a Juan José Galeano<sup>35</sup> y a Claudio Borriado.

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA), del 14 de julio de 1994

<sup>33</sup> La comisión puede recabar documentación e informes a todos los organismos públicos y privados, y citar a cualquier persona para testimoniar. También, puede disponer la realización de auditorías en los propios juzgados o algún otro peritaje. No puede realizar intervenciones telefónicas ni tampoco disponer órdenes de allanamiento.

<sup>34</sup> Solicitada publicada por el Consejo de la Magistratura en el diario "La Nación", 22-6-2004, página 9, defendiéndose de críticas a su funcionamiento.

<sup>35</sup> Resolución 5/2005, acusatoria del doctor Juan José Galeano.

no sólo impactó profundamente en la sociedad argentina y en la comunidad internacional, sino que, además, se transformó, por lamentables consideraciones, en un hito de la historia judicial argentina.

La investigación a cargo del doctor Juan José Galeano trascendió no sólo por su ineficiencia, sino también porque implicó una extensa cadena de corrupción. Entre otras irregularidades, el juez Galeano supervisó el pago ilegal de u\$s 400.000 con fondos de la SIDE a Carlos Alberto Telleldin, principal imputado de la causa. El objetivo era que Telleldin implicara a unos policías bonaerenses de haber sido la "conexión local" del acto terrorista, al recibir la camioneta Traffic con la que se produjo el atentado, trama que fue desbaratada durante el juicio oral.<sup>36</sup>

En 2001, Galeano fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, básicamente, se denunciaba el famoso pago ilegal. La denuncia ingresó a la Comisión de Acusación y se sorteó al consejero que realizaría la investigación. Resultó sorteado el diputado justicialista Jorge O. Casanovas. Desde el sorteo en aquel año hasta finales del año 2003, Casanovas tuvo en su vocalía el expediente, "cajoneado" sin tomar ninguna medida de relevancia. En el año 2003, en una reunión de la Comisión de Acusación, manifestó que la investigación era demasiado compleja, que él no quería estar a cargo de ella. Por ese motivo la causa quedó a cargo del "pleno", que significa que puede ser investigada por cualquier consejero. Pese al supuesto compromiso del kirchnerismo por esclarecer el caso AMIA, ningún consejero oficialista ofreció participar en la investigación. Así fue como el consejero abogado Beinusz Szmukler y yo asumimos la tarea. Las pruebas que obtuvimos culminaron con la acusación y posterior juicio político en el que actuamos como fiscales y que terminó con la destitución del juez Galeano. Durante toda esta investigación, los diputados oficialistas que integraban la Comisión de Acusación dilataron el trámite, solicitaron medidas de prueba inconducentes y se negaron a reunirse durante la última quincena del mes de diciembre.<sup>37</sup>

No obstante, la protección del gobierno al juez Galeano y el encubrimiento de las irregularidades

que se cometieron en la investigación no finalizaron, pues se extendieron al juez Claudio Bonadío, quien tenía que investigar el encubrimiento y otros delitos que se cometieron durante la investigación del atentado contra la AMIA. Esta protección es particularmente escandalosa teniendo en cuenta que el gobierno admitió recientemente la responsabilidad del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la falta de esclarecimiento del atentado, comprometiéndose a investigar la cadena de encubrimientos que existió. Pero, como veremos, los consejeros oficialistas Pichetto y Yoma tuvieron especial cuidado en obstaculizar e impedir la investigación sobre el juez Bonadío.<sup>38</sup>

La primera denuncia contra el juez Bonadío fue por incumplimiento del deber legal de excusarse, ya que presuntamente era amigo de los dos imputados principales del encubrimiento: el ex ministro del Interior del gobierno de Menem, Carlos Corach y Juan José Galeano, amistad sobre la cual existirían sobradas constancias.<sup>39</sup>

Se lo denunció igualmente por haber "cajoneado" la investigación penal. Finalmente, en noviembre de 2005, la Cámara Federal apartó al juez Bonadío de la causa, justamente por considerar que no era imparcial y tenía intereses en el resultado del proceso.

Por otro lado, al ver que pasaban los años y que Bonadío no avanzaba en la investigación, la Unidad Especial de Seguimiento del Atentado contra la AMIA denunció al juez Bonadío ante el Consejo de la Magistratura.

Entre otras irregularidades, se lo denunció por obstaculizar persistente y arbitrariamente el trabajo de la Oficina Anticorrupción y la Unidad Especial

<sup>38</sup> Expedientes 285/03 y sus acumulados: expediente 464/05.

<sup>39</sup> Recientemente, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación el gremio de los empleados se presentó en el consejo e informó que muchos empleados estaban al tanto de esta relación de amistad y que estarían dispuestos a declarar sobre esto.

Cabe destacar que en pleno juicio político contra el ex juez Galeano, el juez Bonadío citó a testigos de ese juicio a prestar declaración en calidad de imputados en la investigación por el encubrimiento del atentado. Estos testigos eran los agentes de la SIDE, ex empleados del juzgado de Galeano, ex policías, etcétera. Debido a esta medida adoptada por Bonadío, todos los agentes de la SIDE citados por el Jurado de Enjuiciamiento se negaron a declarar como testigos contra el juez Galeano porque esto podría perjudicarlos en sede penal (autoincriminarse). Con esto se favoreció a Galeano, ya que no se pudieron obtener esas declaraciones de los agentes de la SIDE, que eran fundamentales para determinar la participación de Galeano en el pago a Carlos Alberto Telleldin.

Con relación a Corach, Bonadío, antes de ser juez, fue su asesor en la Secretaría Legal y Técnica, durante más de tres años, ámbito en el que también conoció al actual ministro de Justicia, doctor Alberto Iribarne.

<sup>36</sup> Además de haber hecho las gestiones para el pago a Telleldin, Galeano fue acusado por otros cargos: producción de pruebas a espaldas de las partes; entrevistas irregulares entre diferentes partes del proceso; entrevistas informales con C. A. Telleldin grabadas en video; destrucción de medios de pruebas; irregularidades en las declaraciones tomadas a testigos; detenciones irregulares; formación irregular de causas paralelas y legajos secretos; intervenciones irregulares de comunicaciones telefónicas; abandono de investigación con relación a determinados hechos y la demora en realizar la recolección de prueba en torno a ellos.

<sup>37</sup> Diario "Página 12", 16-1-06, nota: "Los consejeros dan asco".

de Investigación, no haberse excusado y no haber hecho ninguna medida de investigación útil para el esclarecimiento de los hechos.

Esta grave denuncia contra Bonadío tramitó en la Comisión de Disciplina, pese a mi constante oposición.

Para que una denuncia tan grave como la de Bonadío terminara en la Comisión de Disciplina y no en la de Acusación, se violó el reglamento en materia de asignaciones, haciéndose una asignación directa a la Comisión de Disciplina, sin que se pasara por el comité creado a este fin<sup>40</sup>. Claramente, se trató de una maniobra para proteger al juez. Casualmente, en la Comisión de Disciplina estaban dos de los colaboradores más cercanos al oficialismo en temas de justicia: el senador Miguel Angel Pichetto y el ex senador y actual embajador en México Jorge Yoma.

A partir de esta circunstancia solicité varias veces por escrito y verbalmente que la denuncia contra Bonadío pasara a la Comisión de Acusación que es donde siempre tuvo que haber estado, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que allí se investigan.

Pese a que el entonces presidente de la Comisión de Disciplina ex senador Yoma se comprometió, en febrero de 2005, a enviar dicho expediente a la Comisión de Acusación, lo cierto es que no sólo no lo hizo, sino que, días antes de ir a México, terminó presentando, junto con el senador Pichetto, que es el encargado de instruir esta causa, un dictamen por el cual se afirmaba que la actuación de Bonadío había sido correcta y que correspondía cerrar el caso.

Para justificar la postergación del pase de las actuaciones a la Comisión de Acusación, se explicó que un asesor del senador Pichetto estaba yendo a ver la causa al juzgado de Bonadío y que, cumplida dicha medida, se decidiría la comisión de las actuaciones. Este era un argumento ridículo, ya que el expediente estuvo todo el año 2004, durante la investigación al doctor Galeano en la Comisión de Acusación y en el Jurado de Enjuiciamiento durante la mitad del año 2005. Claramente sólo estaban inventando una excusa para justificar el demorado trámite del expediente.

Las maniobras del senador Pichetto para favorecer al juez Bonadío no finalizaron con el dictamen desestimatorio presentado juntamente con Yoma—cuyo tratamiento fue postergado para febrero 2006—en ese dictamen, “ya que estaba” desestimó hechos que estaban contenidos en otra denuncia recién in-

gresada al Consejo contra Bonadío y que todavía no había sido asignada ni a la Comisión de Disciplina ni a la Comisión de Acusación. Curioso *obiter dictum* que tenía como fin inmunizar a Bonadío de los hechos sobre los que versaba la nueva denuncia, ya que la desestimación, en algún momento, iba a pasar a ser “cosa juzgada”.

El senador Pichetto, en su afán por proteger a este juez, siguió operando. En diciembre de 2005, “invitó” al secretario general del Consejo a violar nuevamente el reglamento en materia de asignaciones y le pidió que enviara a Disciplina un expediente que todavía no había sido asignado a ninguna comisión. Otra vez el imputado era el juez Bonadío.

## ii) Caso “Skideisky”<sup>41</sup>

Carlos Skideisky es juez federal de Resistencia, Chaco, y fue denunciado por tres irregularidades muy graves.

Una de estas irregularidades, que tuvo mucha cobertura mediática, fue haber obligado, desde Chaco, a bancos de la Ciudad de Buenos Aires a que entregaran dinero retenido por el “corralito financiero” respecto de depósitos que también estaban en la Ciudad de Buenos Aires. El juez, obviamente, no podía dictar estas medidas porque a él le correspondía intervenir en los corralitos de los bancos chaqueños, no en los porteños. Contrariamente, lo hizo de todas maneras.

La circunstancia invocada para justificar la competencia del juez chaqueño, esto es que se inventaron boletos de compraventa de propiedades en Resistencia que jamás se escrituraron y se hayan falsificado poderes de escribanos, generó sospechas: la elección de este juez no había sido casual.

Las otras dos acusaciones remiten a dos juicios iniciados por las empresas Argentina Aeropuertos 2000 S.A. y Correo Argentino S.A., en los cuales, el juez, asumiendo nuevamente una cuestionable competencia, concedió sendas medidas cautelares que autorizaban a no pagar el canon debido al Estado nacional por la concesión de la explotación de 33 terminales aeroportuarias y el servicio de correo estatal, respectivamente.

La acusación de Skideisky no prosperó porque fue defendido por el consejero justicialista Casanovas y el oficialista Yoma. De hecho, este último, planteó que no había nada de malo en que un juez defendiera “los ahorros de los argentinos”. Para Yoma fue irrelevante que el juez haya violado la ley de procedimientos o provocado un enorme perjuicio patrimonial al Estado. La diputada justicialista Chaya tampoco apoyó la acusación.

## iii) Caso “Martínez”<sup>42</sup>

El oficialismo del mismo modo defendió al juez federal de Río Cuarto, Córdoba, Luis Rodolfo Martí-

<sup>40</sup> Para decidir a que comisión debe remitirse cada una de las denuncias que se hacen ante el consejo si a disciplina o a acusación, se creó un comité, integrado por los presidentes de ambas comisiones. Cada uno emite un voto respecto de la comisión a la que debe ser asignada cada denuncia de acuerdo con la mayor o menor gravedad de los hechos denunciados. En caso de empate, decide el presidente del consejo que delegó la tarea en el secretario general del consejo.

<sup>41</sup> Resoluciones 418/04 y 419/04.

<sup>42</sup> Resolución 102/05.

nez, a quien le correspondió investigar el caso de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero.

Martínez encubrió gran parte de los hechos y sostuvo que la explosión no había sido intencional, igual que lo hiciera en su momento el ex presidente Menem quien había conminado al periodismo a que hablara de "accidente".

Cuando empezó el juicio oral ante un tribunal federal se demostró a través de nuevos peritajes que había habido intencionalidad en la explosión.

A pesar de la gravedad de los hechos que se investigaban en este expediente básicamente haber encubierto el siniestro intencional, la denuncia contra Martínez fue asignada a la Comisión de Disciplina gracias a la acción de los consejeros oficialistas Pichetto y Yoma.

En lugar de investigarla, los miembros de la Comisión de Disciplina delegaron su labor en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la cual, desde un principio, había avalado la actuación del juez Martínez. Era de esperar que los camaristas no investigaran a Martínez con la imparcialidad que el caso requería.

Cuando se propuso al plenario del Consejo la desestimación de la denuncia contra el juez Martínez, yo expliqué por qué el caso debía ser tratado por la Comisión de Acusación, dado que las irregularidades ameritaban la apertura del juicio político. Nuevamente, a instancias del oficialismo, esta posición resultó la minoritaria, y la denuncia fue desestimada.

Muy poco tiempo después, Martínez fue premiado con el cargo de camarista federal en Córdoba.

#### iv) Caso "Favier Dubois"<sup>43</sup>

Eduardo Mario Favier Dubois era un juez comercial a quien se le imputaban gravísimas irregularidades, que habían ocurrido en el trámite de una quiebra de una empresa embotelladora. No sólo se lo había denunciado por tener amistad y connivencia con un estudio jurídico que patrocinaba a una de las partes, sino, además, por haber removido de manera irregular a un síndico y haber nombrado a otro sin sorteo.

También se le atribuía haber vendido productos de la empresa sin hacer una tasación, a un precio vil. Por su parte, se auditó su sueldo y se concluyó que existían muchos expedientes extraviados.

La acusación contra Favier Dubois obtuvo la mayoría de los votos, pero no prosperó porque no alcanzó los dos tercios de los votos de los miembros presentes.

El gran defensor de Favier Dubois fue el doctor Nissen, en ese entonces inspector general de la Inspección General de Justicia, quien presentaba escritos en defensa de este juez en hojas oficiales y con membrete del Ministerio de Justicia de la Nación.

El representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha y el senador Pichetto no votaron la acusación contra Favier Dubois.

#### v) Caso "Tiscornia"<sup>44</sup>

Guillermo Tiscornia, juez en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo a cargo de la investigación del famoso caso conocido como "Aduana paralela", referido a maniobras millonarias de contrabando.

Cuando se presentó un dictamen acusador contra Tiscornia por su actuación en este hecho ante el plenario del Consejo, el senador Pichetto no votó. Esto suele suceder entre los oficialistas cuando es más que evidente que corresponde votar la acusación pero por compromisos políticos no lo hacen. Tampoco votaron el ex senador Yoma y el ex diputado Casanovas.

Como la acusación no llegó a los dos tercios necesarios de los votos necesarios, no se abrió el juicio político. El expediente fue girado a la Comisión de Disciplina. Actualmente está paralizado. En el 2004, Tiscornia fue promovido para ocupar el cargo de procurador general de la provincia de Tierra del Fuego. Gracias a la difusión de la acusación, su pliego fue impugnado.

#### vi) Caso "Torino"<sup>45</sup>

Juan Torino era juez del Tribunal Oral Federal N° 6. La denuncia contra él tramitaba en la Comisión de Acusación y se había iniciado a partir de una cámara oculta, en la que aparecía negociando dinero a cambio de otorgarle la libertad a un detenido.

El caso no sólo era muy grave, sino que estaba perfectamente documentado y probado. Aún así, los consejeros justicialistas Casanovas, Chaya y Pichetto no votaron su acusación.

Finalmente, Torino presentó su renuncia alegando razones de enfermedad, siendo aceptada por el Poder Ejecutivo, lo cual lo privó de someterse al juicio político.

#### vii) Caso "Herrera"<sup>46</sup>

Rodolfo Herrera fue otro juez cuya denuncia se inició a raíz de una cámara oculta.

Herrera era un juez comercial de primera instancia. En la cámara oculta aparecía "arreglando" una licitación en el caso de la quiebra del Club Ferrocaril Oeste. Con fuertes lazos en el Partido Justicialista de Catamarca, Herrera encontró en el actual embajador en México, el ex-senador Yoma, a su principal defensor. Además, los dos diputados justicialistas, los consejeros Chaya y Casanovas, también lo apoyaron y no votaron la acusación, así como tampoco lo hizo el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha.

<sup>44</sup> Dictamen 50/04.

<sup>45</sup> Resolución 472/04.

<sup>46</sup> Resolución 372/04, 373/04.

<sup>43</sup> Dictamen 9/05, mayoría y minoría.



Gracias a los votos de las minorías, de los jueces, de los abogados y de los académicos, Herrera fue destituido y dejó de tener fueros.

viii) *Caso "Casals"* <sup>47</sup>

El gobernador de la provincia de Buenos Aires había dictado un decreto por el cual había autorizado provisoria y limitadamente la instalación de máquinas tragamonedas, únicamente en las agencias bingo autorizadas. Como canon había fijado un 34 % de las utilidades brutas de los ingresos. Esta limitación afectó los intereses económicos de los fabricantes y distribuidores de las máquinas, y los de las agencias hípcas que pretendían instalar máquinas tragamonedas. Por eso acudieron a un juez de la provincia de Buenos Aires para poder instalar máquinas tragamonedas sin limitación. Sin embargo, el juez no le dio la razón, así como tampoco la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires —que es el máximo tribunal a nivel provincia—. La causa por la cual intervino la Justicia de la provincia de Buenos Aires, es que todo lo que tenga que ver con el juego está regulado por cada una de las provincias y no por el Estado nacional.

Pero los interesados en instalar máquinas tragamonedas en cualquier lugar, acudieron a un juez federal de Posadas, Misiones, José Luis Casals y con un argumento rayano con el disparate sostuvieron que correspondía que interviniera la Justicia nacional. Esto no es así, no sólo porque los juegos son de jurisdicción local, sino porque, en todo caso, nunca pudo haber intervenido un juez de Misiones, sino, en todo caso, de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal Casals aceptó, ilegalmente, su competencia para intervenir en el asunto y dictó una medida cautelar mediante la cual ordenó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a los intendentes municipales de la provincia, al presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, a la policía provincial y a la Dirección de Rentas Bonaerense a abstenerse de prohibir, restringir, cercenar o de algún modo impedir el funcionamiento de máquinas tragamonedas y ruletas electrónicas en las agencias en las agencias hípcas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Además, él mismo fijó un canon —pesos 30.000— totalmente irrisorio, comparado con las ganancias producto del uso de las máquinas tragamonedas.

Casals no tenía competencia para intervenir en este asunto, no sólo porque él es juez federal, sino también porque es de Misiones. Con su decisión se entrometió en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y atentó contra el sistema federal de gobierno.

Si bien los abogados y las segundas minorías consideraron que había elementos para acusar al juez Casals, la consejera por la mayoría Lelia Chaya presentó un dictamen para cerrar el expediente en

contra de Casals, que se impuso gracias al voto, entre otros, de los senadores oficialistas. El dictamen sostenía que si bien el juez se pudo haber equivocado, eso no era suficiente para acusarlo y que la medida que había adoptado el juez Casals estaba justificada.

ix) *Caso "Acosta"* <sup>48</sup>

Héctor Raúl Acosta es un juez federal de San Rafael, Mendoza, quien tuvo varias denuncias ante la Comisión de Acusación de este Consejo de la Magistratura.

En uno de los expedientes se investigaban varias irregularidades, todas ellas acreditadas a través de una auditoría que se realizó en su juzgado. Fundamentalmente, la auditoría detectó excesivas demoras en el trámite de los expedientes a su cargo con el correspondiente incumplimiento de los plazos previstos por las normas procesales, intervención en causas que no eran de competencia federal y conductas irregulares del magistrado Acosta en varios expedientes.

Igualmente, se le atribuía a Acosta: haber ejercido la actividad agropecuaria en forma simultánea al ejercicio de la magistratura, sin pedir siquiera autorización a la autoridad de superintendencia; haber contraído deudas con el Ente de Fondos Residuales de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A. por importantes sumas de dinero y omitir pagarlas en el tiempo debido; haber garantizado sus deudas ante el Banco de Mendoza y ante el Banco de Previsión Social con los avales personales de José Ricardo López —defensor oficial ante su juzgado—, de Pedro Julio Froullet —prosecretario de su juzgado—, y de Jorge Alberto Carrión —fiscal federal de San Rafael—; haber falseado la información incluida en sus declaraciones juradas de febrero de 1997 y 2000.

Algunos de los abogados y las minorías promovieron la apertura del juicio político contra este juez, quien fue defendido férreamente por los representantes del oficialismo y por los jueces. Por lo tanto, la acusación no prosperó.

x) *Caso "Tazza"* <sup>49</sup>

Alejandro O. Tazza es un juez federal de cámara de Mar del Plata, a quien se le imputaban graves actos de corrupción.

Entre ellos, que el juez Tazza siempre favorecía a un abogado, Demarchi. A tal punto esto era así, que en un caso Tazza contradujo sus votos anteriores y decidió en sentido contrario a su postura habitual en esos temas. Casualmente, era un juicio en el que intervenía el abogado Demarchi quien, por lo demás, se vio beneficiado por este cambio de criterio. Hubo otro caso, también muy grave, relacionado con la construcción del Hotel Costa Galana: ape-

<sup>47</sup> Resolución 398/05.

<sup>48</sup> Resolución 224/05.

<sup>49</sup> Dictamen 30/04.

nas iniciada la construcción del hotel, la ex DGI demandó a la sociedad propietaria por evasión impositiva de 14 millones de dólares, motivo por el cual se paralizó la construcción. Este expediente llegó a la Cámara. Uno de los camaristas, el juez Ferro, declaró haber sido tentado con un soborno, que no aceptó. Los otros dos jueces, Tazza y Longhi, votaron favorablemente al hotel y lograron destrabar la construcción. Ferro votó en disidencia.

Adicionalmente, se investigaba a Tazza por enriquecimiento patrimonial ilícito por hechos como la adquisición de un semipiso en la calle Alvear 2241, valuado en cifra cercana a \$ 125.000 además de fuertes gastos en refacción; sucesivos viajes al exterior con su pareja; adquisición de una casa quinta en el barrio "Los Acentilados" con pileta de natación, parque y casa de dos pisos de tipo funcional construido sobre un terreno de 500 m<sup>2</sup>.

Cabe recordar que un juez federal de cámara, hasta el año 2004, cobraba \$ 6.000 por mes, aproximadamente. Por su parte, la pareja de Tazza es una abogada de ejercicio de no más de 6 o 7 años, que no posee una magnitud de trabajo que le permita justificar el nivel de vida que llevan. Así, en el año 1998 gastaron \$ 65.000 en viajes, lo que se constató a través de su tarjeta de crédito. En ese mismo año, la suma total de los sueldos de Tazza fue de \$ 74.000.

Asimismo se investigó que Tazza inspeccionaba juzgados con competencia penal en los que era parte, con el fin de ejercer coacción sobre los jueces de primera instancia.

Finalmente, se probó que el juez tenía una conexión clandestina de electricidad en su casa quinta y se negó a pagar cuando la empresa lo demandó.

Los abogados y las segundas minorías elaboraron un dictamen acusatorio contra este juez. Con todo, los representantes de la mayoría parlamentaria y el estamento de los jueces defendieron férreamente a este juez. Más aún, no sólo votaron en contra del dictamen acusatorio, sino que elaboraron ellos mismos (los diputados Yoma, Casanovas y Chaya) dictámenes en los que explicaban por qué los hechos que se investigaban no ameritaban la apertura de un juicio político.

### B. 3. Crítica a la propuesta del plazo de caducidad de las denuncias de acusación

El proyecto de gobierno, no obstante criticar a la "corporación judicial", recibió en el proyecto uno de los reclamos que más interesa a los jueces. La queja es que como las denuncias ante el Consejo no tienen un plazo de prescripción o de caducidad, o sea, un plazo máximo para que se investiguen, éstas implican que se abra un estado de sospecha o incertidumbre permanente. Las minorías de legisladores y abogados resistimos su aprobación justamente porque era una petición de la corporación de jueces que podía garantizar la impunidad de jueces sospechados de mal desempeño o crímenes comunes.

Se debe aclarar que son muy pocas las denuncias que han demorado más de 3 años en resolverse. Es más, muchas investigaciones se demoran, justamente para proteger al juez denunciado, como hemos visto con el tándem Galeano/Bonadio.

Ante las críticas de la representante del CELS, en una audiencia pública, el Senado dispuso que las denuncias contra magistrados que no tengan tratamiento dentro de los tres años de presentadas, deberán pasar al plenario para su inmediata consideración. Sin embargo, el proyecto no resuelve qué puede decidir el plenario: si disponer su archivo, o asignar la denuncia a otro consejero instructor, prorrogando el plazo de 3 años. Es claro que el plenario nunca podría acusar válidamente a un juez sin que en la Comisión de Acusación haya ejercido su derecho de defensa y, sin que la investigación esté completa.

Previo a ello, se hizo un esfuerzo para explicar que caducidad no es lo mismo que prescripción y que, por lo tanto, al vencimiento del plazo de tres años, nada impedía volver a interponer la denuncia—esa es la diferencia con la prescripción: esta última concluye definitivamente el proceso e impide que se vuelva a investigar ese mismo hecho. La caducidad, empero, no obsta a que se haga una nueva denuncia—. No obstante, es irreal pensar que un particular que denunció a un juez, tres años después, caduca la denuncia, la vuelva a hacer ¿Qué le garantizará tener éxito esta vez? ¿Quién asegura que no se interpretará la caducidad como un caso de *ne bis in idem*, interpretando la inacción del Consejo como una desestimación implícita? Por otra parte, no surge claramente del proyecto que se trate de una mera caducidad y que es posible volver a investigar al magistrado. Si realmente ésta fue la intención del Senado, no se entiende porque no se ha dispuesto expresamente en el proyecto, y se redactó una cláusula ambigua que puede dar lugar a planteos posteriores, por parte de los jueces que quieran evitar las nuevas investigaciones.

Con el plazo propuesto, Galeano nunca hubiese sido acusado porque un consejero justicialista—Casanovas—tuvo cajoneado el expediente.

Marquevich fue destituido sólo por un caso, el de Ernestina de Noble. Los otros casos, tales como el denominado Strawberry de tráfico de drogas, como no habían sido ni aprobados ni desaprobados por el Consejo anterior, al intentar ser tratados por el abogado Szmukler y por mí, nos fue argumentado por el oficialismo que ello ya había sido debatido y no podía reabrirse la cuestión. Imaginen que eso sucedió sin plazo de prescripción. Es falaz el argumento de la senadora Fernández de Kirchner cuando afirma que las denuncias se podrán presentar nuevamente. Más aún, como señalamos, tampoco la redacción del proyecto lo establece como un plazo de caducidad y, nada en él, evita que se pueda considerar prescrita al cabo de tres años.

En vez de sancionar o pedir explicaciones al consejero que no instruyó la causa, se pretende bene-

ficiar al juez denunciado. Sin perjuicio de adelantar que no debiera existir un plazo, tres años son exigüos. En general, parte del retraso se produce porque los jueces investigados son renuentes a enviar copia de las causas por las que se los denuncia.

Tómese el siguiente parámetro: un juzgado penal toma medidas de investigación todos los días, y, aún así, tres años pueden ser muy pocos para cierto tipo de investigaciones más complejas. Qué le queda a la Comisión de Acusación, que se reúne una vez por semana y en la que todas las medidas de prueba de una causa deben ser previamente aprobadas por la Comisión. El plazo de caducidad será a favor de una mayor impunidad.

La senadora Fernández de Kirchner señaló, en el Senado, que había sido el ex diputado Casanovas quien impulsó el establecimiento de un plazo. Otra vez las medias verdades. La otra media verdad es que quien presentó el proyecto fue el representante del Poder Ejecutivo, el doctor Joaquín Da Rocha, si bien fue defendido luego por el justicialista Casanovas.

## *C. Comisión de Disciplina*

### *C. 1. Funcionamiento*

La Comisión de Disciplina es la que ha sido más cuestionada por su falta de transparencia y de rigor, para recomendar la imposición de sanciones disciplinarias contra los magistrados. Está integrada mayormente por los consejeros jueces y los senadores (tanto del oficialismo, como de las minorías) y un académico.

De las más de 1.200 denuncias que ingresaron a esa comisión, hubo, en promedio, poco menos de una sanción por año desde su puesta en funcionamiento. El resto de las denuncias han sido desestimadas, lo que constituye una clara muestra de la falibilidad de los controles a cargo de los propios pares, al ser los jueces quienes predominan en la comisión.

### *C. 2. La falta de publicidad y una crítica a la propuesta del gobierno*

Las reuniones de comisión son secretas y los expedientes tienen carácter reservado; sólo pueden acceder los consejeros integrantes de la comisión y el juez acusado.

El gobierno se jacta de que su proyecto pretende hacer públicas todas las reuniones de comisión y de plenario, y todos los expedientes, especialmente los de disciplina. En verdad, lo único que es reservado son las reuniones en Disciplina y los sumarios que allí se instruyen. El resto ya era público, sin necesidad de reformar la ley. Es más, yo misma presenté un proyecto para que las reuniones de Disciplina sean públicas, así como los expedientes. No considero aceptable que en la Comisión de Acusación se tome testimonio a los testigos a la vista de todos, mientras que en Disciplina se tomen audiencias en los despachos de los consejeros, sin

que se notifique día, hora y lugar al resto del Consejo.

Hasta el nombre de los jueces sumariados es ocultado en la misma carátula del expediente. En general, sólo se hacen constar el nombre del denunciante y el número del expediente, nada más.

Mi proyecto nunca fue tratado como corresponde en esa comisión, ni por los consejeros jueces, ni por los senadores que la integran, entre ellos, los del Partido Justicialista.

Una cuestión grave, que no resuelve el proyecto, es que si bien se dice que todo es público, no se garantiza un vehículo para la publicidad. Por tal motivo, la tan solicitada publicidad puede llegar a frustrarse. De hecho, en el año 2003 se aprobó un proyecto que presenté para que se publicaran todos los dictámenes y órdenes del día en la página de Internet del Consejo de la Magistratura, así como una serie de datos referidos a la administración del Poder Judicial. Hoy, esa resolución, 323/03, está a medio implementar, y lo que está publicado es difícil de encontrar para el usuario promedio.

### *C. 3. Los casos más notorios de protección*

#### *i) Caso "Gesualdi"<sup>50</sup>*

Este caso es un claro ejemplo de cómo confluye el espíritu de cuerpo de los jueces con la protección política del oficialismo.

Dora Gesualdi es actualmente jueza de primera instancia en lo civil y firme candidata a ocupar el cargo de camarista en ese mismo fuero.

El expediente tramitó en la Comisión de Disciplina y se inició por una denuncia que le hizo su prosecretario. Esencialmente, se denunciaba que el juzgado era un "caos". Además, se le imputó un manejo arbitrario del personal, lo que perjudicaba el funcionamiento del juzgado.

La ordenanza del juzgado, Gladys Pereyra, llegaba al juzgado a las 7.00 y se iba a las 9.00 horas ¿Por qué? Porque trabajaba como empleada doméstica en el domicilio particular de la jueza.

La jueza Gesualdi había nombrado como empleadas en su juzgado a dos hijas de Alberto Bueres, juez de la Cámara en lo Civil, o sea, el superior de Gesualdi y titular de cátedra de derecho civil, cátedra en la que Gesualdi es profesora adjunta. Una de las hijas de Bueres, Mariana, fue adscrita al Cuerpo Médico Forense porque, si bien fue nombrada por Gesualdi, era psicóloga. Como estaba adscrita, no pudo ser reemplazada, con lo cual el juzgado perdió una empleada.

La jueza, al acercarse el plazo que le impone la ley para dictar sentencia, empezaba a dictar medidas totalmente inconducentes —audiencias para provocar conciliaciones cuando por la naturaleza del proceso no eran conciliable, etcétera—, meros artilugios

<sup>50</sup> Resolución 580/05.

para demorar el dictado de la sentencia. Se audió el juzgado y se detectó que la jueza había dilatado el dictado de sentencia con estas excusas en el 32 % de sentencias que surgen del libro.

El plenario del Consejo desestimó esta denuncia por considerar que los hechos ni siquiera constituían una infracción disciplinaria. A favor de la desestimación votaron los legisladores oficialistas del PJ y los jueces, mientras que sólo se opusieron los diputados de la primera y segunda minorías y los abogados.

## ii) Caso "Ursi"<sup>51</sup>

Juan Carlos Ursi era juez de un tribunal oral. Fue denunciado por una de sus empleadas. Según la denuncia y en función de las pruebas que se fueron colectando, Ursi instaló con dicha empleada una modalidad de encuentros a puertas cerradas en su despacho, en los que la sometía a incómodos monólogos, la indagaba sobre cuestiones de su vida privada y hacía apreciaciones sobre su personalidad.

Ursi le decía a esta empleada cosas tales como que era una "rusita subversiva" o, mientras se cruzaban en el pasillo, empezaba una frase diciendo "Porque los judíos..." para llamar su atención. También, en la época en que ella amamantaba a su hijo y concurría al baño para sacarse leché, varias veces Ursi le habría dicho que era una "idishe mame" y le preguntaba "por cuánto tiempo iba a amamantar". Una vez, enfrente de otro juez del tribunal y empleados, llegó a decirle en un tono totalmente audible para todos y en forma despectiva: "Flora, por qué no te pintas un poco [...] parecés una rusita que salió de un campo de concentración", sabiendo que los antepasados de la empleada habían fallecido en un campo de concentración. Unos días más tarde, Ursi la llamó a su despacho haciendo alusión al episodio recién relatado le dijo que los judíos eran "rentistas del Holocausto", luego de lo cual aclaró que estaba parafraseando a Saramago. A esto se le sumaban comentarios descalificatorios, como que era "una hueca", "una tarada", que había perdido el tiempo con ella, que no era "nadie" y que "él es un juez de la Nación", que ella estaba "al borde de la idiocia" y "que necesitaba tratamiento psicológico".

El plenario desestimó esta denuncia, porque estimó que las acusaciones no estaban probadas o simplemente se trataba de bromas de mal gusto del magistrado, pero lo cierto es que nuevamente confluyó la protección de la familia judicial con legisladores del oficialismo. El defensor más entusiasta del juez denunciado fue el ex senador oficialista Jorge Yoma.

## C. 4. Crítica a la propuesta del gobierno de unificar las comisiones de Disciplina y Acusación

La senadora Fernández de Kirchner, al defender la unificación de las comisiones de Acusación y Dis-

ciplina, se quejaba porque quienes deciden si una denuncia contra un juez va a Disciplina o Acusación son los respectivos presidentes de las comisiones. Sorprendentemente, quienes debieran ser destinatarios de esta queja son los propios consejeros que representaron al oficialismo, como Pichetto, Yoma o Casanovas. Cuando las presidentas de las comisiones de Acusación y Disciplina fueron ocupadas por sendos consejeros del justicialismo, ocurrieron los mayores escándalos, como el caso Bonadío, o el del juez Martínez ya relatado, o el de una denuncia contra el juez federal en lo penal Urso por enriquecimiento ilícito también remitida a Disciplina.

Quienes defienden la unificación argumentan que imponer una sanción disciplinaria o aprobar una acusación es una cuestión de grados, o sea, de ponderar la menor o mayor gravedad de una conducta. Pero lo que no se dice es que al fusionar ambas comisiones, se hace lugar a otro constante reclamo de los jueces, a quienes el propio oficialismo fustiga desde su discurso, como es el de integrar la Comisión de Acusación. Ya he relatado el mal funcionamiento de la Comisión de Disciplina debido a que son los propios jueces quienes juzgan la conducta de sus pares, por lo que no se puede esperar nada auspicioso si ellos integraran la Comisión de Acusación.

El proyecto propone, además, que las sanciones disciplinarias sean impuestas por mayoría absoluta, y no por dos tercios. En una comisión unificada, pueden suceder varias cosas. Una es que se negocien sanciones disciplinarias para casos que ameriten la destitución, por ser más fácil llegar a una mayoría absoluta que a dos tercios. Esto será en el caso de los jueces adictos al régimen. Otra será un primer elemento para constituir el comisariado de los jueces: las denuncias ingresarán a una comisión, que podrá decidir sancionarlos o removerlos, regulando según lo que la mayoría oficialista pretenda de las causas que esos magistrados tengan. Teniendo comisiones separadas como en la actualidad es factible que la decisión tomada en una de ellas sea revisada por el plenario. En un consejo reducido, esta comisión será casi soberana.

## D. Comisión de Administración y Financiera

En esta sección analizaré el funcionamiento de la Comisión de Administración, para luego abordar una serie de acontecimientos y manejos administrativos que han ocurrido en los últimos años.

Es importante notar que el oficialismo fustiga contra la administración del Consejo, pero, como veremos, no apoyó las propuestas concretas para poder cambiar su desempeño. Se trata de las siguientes cuestiones: conflicto de los aumentos de sueldos con la Corte Suprema, y la consecuente sanción del decreto 557/05; las incompatibilidades en el Poder Judicial con el ejercicio de la profesión; el cobro del desarraigo; la designación de personal en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones; la

<sup>51</sup> Resolución 231/04.

reducción de gastos en asesores y la tan reclamada publicidad de las declaraciones puradas patrimoniales y la necesidad de auditorías externas a la administración por parte de la AGN.

#### D. 1. *Funcionamiento*

Los consejeros, en general, no dan tanta importancia a la Comisión de Administración y Financiera, debido, quizás, a que las decisiones que se adoptan no otorgan mayores réditos políticos (salvo para los consejeros jueces), ni los temas que se tratan tiene mayor presencia en los medios. La ley 24.937 estableció que la administración propiamente dicha, la gestión diaria, está delegada en una estructura burocrática a cargo de una administradora general, limitando el rol de los consejeros a un deber de auditoría legal y financiera, y a actuar como instancia de apelación cuando algún proveedor de bienes o servicios cuestiona alguna decisión de la administración.

Sin embargo, se trata de una comisión que en los últimos años cobró interés en la opinión pública, por algunas cuestiones que han ocurrido, y que he denunciado oportunamente, proponiendo, en algunos casos, cambios en la reglamentación.

#### D. 2. *El conflicto con la Corte Suprema. Presupuesto y el aumento del sueldo a los jueces*

Durante los debates del proyecto, se escucharon quejas de la senadora Fernández de Kirchner por los elevados gastos y salarios del Consejo de la Magistratura. Pero, como veremos, fue a instancias de la habilitación presupuestaria del propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que se otorgó un aumento importante a los magistrados y secretarios, en connivencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Desde la creación del Consejo, siempre existió una puja de intereses por decidir quién controlaría la confección y ejecución presupuestaria del Poder Judicial. En la Constituyente de 1994, se incluyó el inciso 30 en el artículo 114, dándole esas atribuciones al Consejo de la Magistratura, limitando a la Corte a administrar únicamente su propio presupuesto, pero no el del resto del Poder Judicial. Esta decisión era coherente con la idea de contar con una Corte Suprema abocada únicamente a las cuestiones jurisdiccionales.<sup>52</sup>

Los lobbies llegaron al Congreso de la Nación cuando se sancionó la ley 24.937, y se dispuso que el anteproyecto de presupuesto lo confeccionaría el presidente del Consejo (también presidente de la Corte Suprema), quien lo enviaría al pleno del Consejo para que formule las observaciones que estime pertinentes, "para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (artículo 7º, inciso 3).

Esta redacción un tanto contradictoria con la norma superior (el inciso 3 del artículo 114 de la Constitución) fue objeto de fuertes debates en ocasión de disponer aumentos a los salarios de los agentes judiciales. Según la legislación que reglamenta la gestión financiera del Estado, es el Poder Ejecutivo, a través del jefe de Gabinete, quien debe autorizar las partidas presupuestarias para afrontar los aumentos. Esta autorización no se aprobaba, a pesar de numerosas gestiones ante el jefe de Gabinete, por lo que el Consejo decidió, amparándose en normas constitucionales que garantizan la independencia del Poder Judicial contra injerencias de los otros dos poderes, y en el mencionado inciso 3 del artículo 114, Constitución Nacional, otorgar los aumentos salariales tanto para jueces y secretarios, como para los empleados, tal como era reclamado por el gremio de los judiciales.

Como resultado de estos aumentos y un reescalafonamiento del personal, se alteró la escala salarial, "achicando" la relación entre lo que cobra un juez y un secretario de juzgado en comparación con un empleado.

Esto provocó que, a fines de 2004, los jueces y los secretarios hicieran llegar su reclamo compensatorio de un aumento adicional del 20 %<sup>53</sup> a dos ventanillas, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva pretensión no tuvo cabida en el Consejo por la resistencia de algunos consejeros de las minorías parlamentarias y de los abogados. Empero, fue el presidente de la Corte Suprema, los últimos días hábiles de aquel año, quien concedió el aumento sólo para jueces y secretarios, con acuerdo del jefe de Gabinete Alberto Fernández, previa asignación de las partidas presupuestarias correspondientes.

El Consejo de la Magistratura, cuando reinició sus sesiones en febrero de 2005, ratificó lo actuado por la Corte Suprema y el jefe de Gabinete, con la oposición de las minorías parlamentarias y algunos abogados. Lo extraño fue que el dinero para afrontar los gastos provenía del presupuesto del propio Consejo, no de la Corte Suprema.

#### D. 3. *La represalia: la sanción del decreto 55705*

Este último aumento exclusivo para secretarios y jueces provocó un nuevo reclamo de parte del gremio judicial, que reclamó igual aumento para los empleados, pues consideraron que la escala salarial volvió a desequilibrarse.

Durante la negociación, que implicó la oferta del Consejo de abonar un aumento de \$ 200 a los empleados, y continuar negociando el resto del reclamo en reuniones paritarias, el Poder Ejecutivo terció

<sup>52</sup> Las más de 15.000 sentencias dictadas por año son más que elocuentes acerca del volumen de trabajo existente.

<sup>53</sup> Si bien habían recibido un aumento inicial del 10 %, los empleados se vieron beneficiados asimismo por el mencionado reescalafonamiento que implicó una mejora de sus salarios.

en la disputa a favor de la Corte Suprema mediante el dictado del decreto de necesidad y urgencia 557/05. (B.O. 3605), afectando el presupuesto de un Consejo considerado "rebelde" por el oficialismo.

Este decreto modificó el artículo 2º de la Ley de Autarquía Judicial (23.853), que establecía en su redacción original que el 3,5 % de los recursos del Tesoro nacional se asignarían al Poder Judicial. Como la Ley de Autarquía es anterior a la creación del Consejo de la Magistratura, ese dinero había dejado de ingresar a la Corte, para llenar las arcas del nuevo organismo. La Corte se financió con otra partida que le asigna el presupuesto de la Nación, más lo que recauda en concepto de tasa de justicia y otras fuentes de financiamiento. El decreto dispuso una distribución de ese 3,5 %, asignando el 0,57 % a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el 2,93 % al Consejo de la Magistratura.

Además, el decreto ordenó que el dinero excedente del presupuesto que año tras año tiene el Consejo de la Magistratura (en 2004 fueron cerca de \$ 500 millones), fuera asignado para su administración a la Corte Suprema, privando al Consejo de la Magistratura de sus propios recursos, previstos para financiar una mejor prestación en el servicio de justicia.

La asignación de recursos a favor de la Corte Suprema es manifiestamente inconstitucional ya que, desde su creación, es el Consejo de la Magistratura el órgano que viene ejerciendo la administración del Poder Judicial por disposición expresa del artículo 114 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, el decreto viola los requisitos constitucionales que debe cumplir un decreto de necesidad y urgencia.<sup>54</sup> En sus fundamentos no se invocaron razones de necesidad y urgencia, ni tampoco cuáles fueron las circunstancias excepcionales que le hubieran impedido al Congreso de la Nación seguir el trámite ordinario para la sanción de leyes. Era evidente que la reacción del Poder Ejecutivo se debió al conflicto por los aumentos salariales.

Por esta razón impulsé, ante el plenario del Consejo, la propuesta de que el organismo presentara ante la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal una acción judicial contra el Poder Ejecutivo de la Nación, para que se declare la inconstitucionalidad del decreto 557/05. La acción judicial está pendiente de resolución, y la utilización de los fondos disputados se encuentra trabada por una medida cautelar, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.

Al mismo tiempo, presenté, por idénticos motivos, un proyecto de ley para que se declare la nulidad del decreto por inconstitucionalidad.

#### *D. 4. Las incompatibilidades en el Poder Judicial*

La senadora Fernández de Kirchner atacó duramente a los consejeros abogados porque sus asesores no tienen incompatibilidad para litigar como abogados.<sup>55</sup> Lo que no dijo la senadora Kirchner es que los consejeros de origen político, salvo quien suscribe, tienen parte de su equipo de asesores con posibilidades de ejercer la profesión.

Así, puede ocurrir que un asesor se presente ante un juez por una causa que litiga y, al mismo tiempo, asesore a un consejero en una denuncia contra ese mismo juez o en un concurso para cubrir una vacante en el que este juez o su secretario estén inscritos. Justamente, para evitar esa situación, presenté un proyecto para derogar los contratos conocidos como "locación de servicios", de forma tal que todos los asesores de los consejeros sean de tiempo completo y ninguno pudiera ejercer, a la vez, la profesión de abogado. Sin embargo, este proyecto no prosperó porque los únicos que lo apoyaron fueron los consejeros jueces. Ni los consejeros políticos, ni los abogados ni los académicos lo hicieron. Cuando el proyecto fue discutido en el plenario, el senador oficialista y hoy kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, dijo: "Qué hay de malo que la gente haga plata... (hizo una pausa) trabajando". Por su parte, el ex senador Yoma sostuvo que yo quería convertirme en la policía de los asesores.

Cabe aclarar que el proyecto de ley del oficialismo no corrige este problema, por más que lo declamen en su discurso. No hay una sola disposición sobre esta cuestión.

#### *D. 5. Desarraigo*

Un problema similar, en términos de gastos injustificados, ocurre con la regulación del desarraigo, para lo que no encontré apoyo de parte de los consejeros que responden al gobierno. El régimen de desarraigo consiste en abonar un plus salarial del 35 % a los funcionarios y empleados que denuncian un domicilio a más de 100 km del lugar de trabajo.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Cobran un sueldo del Poder Judicial como contratados bajo un régimen conocido como locación de servicios, y pueden ejercer la profesión.

<sup>54</sup> El artículo 99, inciso 30 sólo habilita al Poder Ejecutivo a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, y cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, en tanto no se traten de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos.

<sup>56</sup> El régimen beneficia tanto a agentes que cuentan con la inamovilidad en el cargo (son los que se desempeñan en la Secretaría General, en la administración general y en sus cinco comisiones, y a quienes son designados en forma temporal asesores de consejeros, cuya permanencia en el cargo depende de la permanencia del propio consejero, y a quienes se encuentran contratados bajo la modalidad de "locación de servicios").

Mi proyecto impulsaba la eliminación del beneficio para quienes tengan cargos permanentes y para los asesores de consejeros y de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que cumplan funciones de tiempo parcial bajo la modalidad de "locación de servicios", a la vez que establecía mayores requisitos para el otorgamiento del beneficio.

El proyecto fue aprobado por el plenario del Consejo de la Magistratura,<sup>57</sup> con modificaciones que alteraron la propuesta, lo que me obligó a presentar una disidencia parcial.<sup>58</sup>

#### *D. 6. Designaciones en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones: los planes trabajar VII*

En el año 2004, la Corte Suprema traspasó al Consejo de la Magistratura la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, la de Remates Judiciales, el Archivo Judicial y el Cuerpo de Auditores. El nombramiento del personal en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, es "a dedo": cada consejero propone a personas que conozca para que ocupen esos cargos.

Realicé una propuesta para que, en 30 días, se cubrieran las vacantes a través de un proceso abierto e igualitario. El proyecto nunca se aprobó, supuestamente porque había urgencia por llenar las vacantes y no había tiempo de desarrollar un proceso transparente de selección del personal. Como suele ocurrir en nuestro país, la urgencia se debe a la falta de previsión (está estimado que estas oficinas, anualmente, producen entre 30 y 40 vacantes, entre renunciaciones y jubilaciones).

Todos los legisladores, incluidos los del PJ, los jueces, los académicos y los abogados hicieron uso de su "cupó" y recomendaron gente. Manifestaron hacerlo de manera responsable y alegaron que no tenía nada de malo. Públicamente lo denominé "Planes Trabajar" de los consejeros.

El proyecto del gobierno no corrige estas dificultades, ni siquiera tiene en cuenta su existencia.

#### *D. 7. Reducción de los gastos en asesores y las populares "capas geológicas"*

En su extenso discurso en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado,<sup>59</sup> la senadora Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "los datos verdaderos no salen en ninguna parte", "es falso que el oficialismo tendrá mayor control", el Conse-

jo se transformó en un organismo "elefantiásico", con más de 200 funcionarios, algunos con sueldos de camarista, y "ocho o nueve asesores por cada consejero".

El gobierno afirmó que cada miembro del Consejo, considerando sus asesores, insume 70.000 pesos mensuales.<sup>60</sup> Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, denunció el "manejo discrecional de los fondos" y que "la oposición patealea porque, entre otras cosas, pierde la posibilidad de tener un miembro en ese Consejo que te da la facultad de nombrar 9 asesores, cuyos sueldos oscilan entre 6 y 16 mil pesos".<sup>61</sup> De acuerdo con estas versiones, cada consejero costaría entre 70 y 100 mil pesos.

Estas afirmaciones son disparatadas. En primer lugar, los consejeros legisladores no recibimos un sueldo por nuestra tarea en el Consejo. Tampoco, los jueces.<sup>62</sup> Sólo los abogados y los académicos, que están impedidos de ejercer la profesión, reciben un sueldo equivalente al de un juez de cámara. La realidad es que cada consejero cuenta con un cupo de 19 mil pesos (recientemente actualizado debido a los aumentos salariales a 25 mil) para nombrar asesores. Si un consejero elige contar con asesores con cargo de juez de primera instancia, sólo podría nombrar a dos personas en tal jerarquía, más un par de asesores con cargo de empleados, ya que excedería su cupo. De todas formas, el presupuesto del Consejo sólo representa un 0,72 % del presupuesto del sector Justicia y un 0,021 % del total de la administración central.

No es cierto que la reducción a 13 integrantes reduzca la planta de funcionarios que asesoran a los consejeros. Esta reducción implicaría necesariamente un mayor nivel de delegación a los asesores por parte de los consejeros, porque el volumen de trabajo no disminuirá, pero la tarea se deberá distribuir entre 13 consejeros. Por lo tanto, quienes queden en el Consejo deberán, necesariamente, ampliar su planta de asesores.

Lo que el oficialismo no dice es que son los representantes del Partido Justicialista en el Consejo quienes, al momento de dejar su cargo, han designado en la planta permanente del Consejo a sus asesores, abonando la leyenda de las capas geológicas en la planta de los organismos públicos. Así, el senador Branda nombró a quienes se habían desempeñado como sus asesores en la planta permanente de la Comisión de Disciplina; hicieron lo propio los ex diputados Alasino y Casanovas y el ex senador Yo-

<sup>57</sup> Sesión del 11 de agosto de 2005.

<sup>58</sup> El consejo dispuso que los únicos que quedarían excluidos del privilegio del desarraigo serían los futuros agentes asignados a la Secretaría General, a la Administración General del Poder Judicial y a las comisiones del Consejo de la Magistratura, y oficinas permanentes del Jurado de Enjuiciamiento. Se exceptuó a los agentes que, en dichas dependencias, lo perciben actualmente, como si se hubiera tratado de la afectación de un derecho adquirido.

<sup>59</sup> 20-12-2005.

<sup>60</sup> Pensar que cada miembro del consejo, con todos los asesores que tiene, que es lo que están peleando, nos cuesta a los argentinos 70 mil pesos por mes. Declaraciones del presidente Kirchner en un acto en la Casa Rosada, diciembre 28, 2005 "La Nación", 29-12-05 página 7.

<sup>61</sup> Ver [http://www.pagina12.com.ar/diario/e/pais/16-7-2005/12\\_31.html](http://www.pagina12.com.ar/diario/e/pais/16-7-2005/12_31.html).

<sup>62</sup> Sólo reciben un plus que los equipare a un juez de cámara.

ma. Todas estas personas se desempeñaron como consejeros por parte del oficialismo.

#### *D. 8. Transparencia y control: de declaraciones juradas patrimoniales y convenio con la Auditoría General de la Nación*

Una argumentación más brindada a favor del proyecto del oficialismo es que los jueces viven en una isla de privilegio, sin pagar el impuesto a las ganancias sólo es necesario que el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto de ley correspondiente una ley justamente, para que los jueces paguen ganancias.

Sin embargo, este proyecto no modificará ninguna de estas situaciones. Irónicamente, para que los jueces empiecen a pagar el impuesto a las ganancias sólo es necesario que el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados dé media sanción al proyecto de ley correspondiente una ley justamente, para que los jueces paguen ganancias.

Con relación a la publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de los jueces, quienes no acompañaron mi proyecto para hacerlas públicas fueron los legisladores del PJ. El representante del Poder Ejecutivo y la diputada Claya votaron en contra del proyecto para que en 72 horas cualquier ciudadano/a obtenga la declaración, mientras que los senadores del PJ Pichetto y Yoma ni siquiera acudieron al plenario cuando tuvieron la oportunidad de votar. Nuevamente, existe una distancia abismal entre las palabras y los hechos por parte del oficialismo.

Una circunstancia a resaltar es el convenio con la Auditoría General de la Nación. Como he relatado, le corresponde a la Comisión de Administración fiscalizar la gestión de la administración general. Desde que asumí en el Consejo me he opuesto a la aprobación de los proyectos de presupuesto del ejercicio siguiente, hasta tanto no se prevean auditorías externas. Por ello, presenté un proyecto de convenio entre la AGN y el Poder Judicial, que incluye un plan de trabajo de 16 puntos. Luego de más de un año, el proyecto fue aprobado. Durante este 2006, el convenio comenzará a ejecutarse.

Ahora bien, los representantes del oficialismo que prometen una mejor gestión del Consejo, nunca propusieron ni un convenio ni otra iniciativa similar en aras de mejorar la gestión de la administración del Poder Judicial. La propuesta provino de la representante de una de las segundas minorías a las que el proyecto, de ser aprobado, eliminará.

#### *V. Reforma propuesta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación*

Como se explicó, el Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo de carácter permanente previsto en el artículo 115 de la Constitución Nacional, integrado por nueve miembros (tres representantes de jueces, tres del sector de los abogados y tres políticos: dos senadores, uno por el bloque de mayoría y otro por la primera minoría, y un diputado) y tiene a cargo la tarea de juzgar a los jueces acusados por el Consejo de la Magistratura.

Durante largos períodos el jurado ha tenido un promedio de 1 a 3 causas al año, lo cual no justificaba que sus miembros gozaran de la permanencia en sus cargos, ni que cobraran importantes sueldos, o tuvieran una cantidad significativa de asesores. En los últimos años, esta situación ha cambiado al promoverse un número relevante de acusaciones contra magistrados y al reducirse la planta de personal de los jurados.

El proyecto oficialista imprime un carácter ad hoc al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, a través de un sorteo, lo cual puede ser un acierto si se garantiza un control de la idoneidad de los jurados, algo que este proyecto no asegura en lo más mínimo.

Pero la objeción mayor es que el proyecto nuevamente rompe con el equilibrio en la composición del jurado: de una integración de 9 representantes, se pasará a otro formado por 7: 4 serán políticos, 2 jueces y 1 abogado.

Nuevamente, se alude a la necesidad de prevenir potenciales conflictos de intereses de los abogados, pero ¿acaso no los tienen los jueces al momento de juzgar a sus pares? ¿Y, qué pasa con los políticos, que tienen que juzgar a quienes, a su vez, podrían llegar a juzgarlos en un futuro en un caso de corrupción? Además, los hechos muestran que han sido los jueces y los políticos quienes han votado a favor de los jueces acusados más que los abogados. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en el caso del juez federal de Salta, Ricardo Lona, o el juez federal de Córdoba, Bustos Fierro, acusado por haber sido pionero en habilitar al ex presidente Menem para presentarse para una segunda reelección a pesar de una expresa prohibición constitucional. No se logró la destitución de ambos magistrados por no haber alcanzado la mayoría de dos tercios requerida.

#### *VI. Ausencia de los consejeros que representan a la mayoría*

En el debate en el Senado y en los medios de comunicación, se dirigieron críticas a ciertas ausencias a los plenarios del consejo por parte de los representantes del sector político, quienes tienen doble jornada laboral: en el Congreso y en el consejo. Pero el proyecto presentado deja intacta esa circunstancia, por lo que no resuelve tal situación (de todas formas, cuando el pleno se ha quedado sin quórum no ha sido por una ausencia conjunta del total de legisladores).

De acuerdo con lo que surge de un informe elaborado por Poder Ciudadano, quienes han concurrido la mayor cantidad de veces al plenario del consejo han sido los representantes de las minorías. Efectivamente, tomando los dos últimos cuatro años, los 4 legisladores representantes de las minorías (2 senadores y 2 diputados) han tenido un promedio de asistencia al 75 % de los plenarios, mientras que los representantes políticos del Parti-



do Justicialista (2 senadores y 2 diputados), han asistido a un 60 % de los plenarios. Esa diferencia se amplía si comparamos únicamente el desempeño de los diputados: Quienes no son oficialistas, han asistido al 89 % de los plenarios, mientras que los diputados justicialistas han concurrido a un 68 % de los plenarios. Entre los senadores, los no oficialistas asistieron a un 62 % de las sesiones, y los oficialistas a un 52,5 %.

He sido la que más ha asistido a los plenarios desde el año 2002: 94 %, mientras que el que asistió a una menor cantidad de sesiones es el ex senador Yoma quien solamente concurrió a un 44 % de las sesiones.

#### VII. *Eliminación de ciertas competencias en materia de reforma judicial*

El proyecto se define en otros de los conflictos que existen entre la Corte Suprema y el consejo, a favor del alto tribunal, otorgándole mayores atribuciones en materia de reglamentarla y de reforma judicial, lo cual desvirtúa la redacción expresa del inciso 60 del artículo 114 de la Constitución Nacional.

La ley 25.876 modificó la 24.917, agregando nuevas competencias del consejo en el artículo 70: El inciso 15) dispone la de resolver las subrogaciones de jueces (el cual ya cumplió su objetivo porque el consejo dictó un reglamento), y el inciso 16 establece: "Dictar los reglamentos generales de superintendencia que sean necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación" Con esta reforma propuesta, se decidió, sin decirlo en forma expresa, derogar la ley 25.876 y el reconocimiento de las mencionadas facultades.

Otra de las atribuciones del plenario que ya no está contemplada en el proyecto de reforma es la referida a "dictar los reglamentos referidos a la organización judicial y los reglamentos complementarios de las leyes procesales, así como las disposiciones necesarias para la debida ejecución de esas leyes y toda normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia" (artículo 7°, inciso 2 de la ley vigente). Esta redacción ha sido reemplazada por la siguiente en el proyecto que aquí debatimos: "2) Dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye la Constitución Nacional y esta ley a fin de garantizar una eficaz prestación de la administración de justicia".

#### VIII. *Conclusiones*

En la introducción de esta intervención, señalé que la verdadera intención del gobierno era controlar la designación y remoción de jueces, ya que al reducir el número de consejeros de 20 a 13, y dado que las decisiones centrales se adoptan por la mayoría especial de dos tercios, los 5 representantes del oficialismo ganan un peso desproporcionado en estas decisiones. En palabras del diputado Mario Negri, esto implicará que "el gobierno pueda sacar

una bolilla negra contra un concursante a juez, o tirarle un salvavidas a algún juez denunciado", aunque el gobierno prometa no hacerlo.<sup>63</sup>

El propio gobierno se defendió de las acusaciones de querer controlar la Justicia, diciendo que fueron ellos quienes renovaron la Corte Suprema, tan cuestionada de la década de 1990, y quienes autolimitaron su facultad para designar jueces de esa misma Corte (a través del proceso público y consultivo de evaluación de los candidatos, dictado del decreto 222/03). La explicación puede encontrarse en que el gobierno que adoptó esas decisiones fue elegido por sólo un 22 % de los votantes, por lo que optó por tomar medidas que le dieran legitimidad durante el ejercicio de la gestión. Lamentablemente para la salud de nuestro régimen representativo, el gobierno que ahora propone la reducción del consejo, es un gobierno que salió fortalecido de las urnas después de las elecciones legislativas de octubre de 2005, por lo que se siente "autorizado" o legitimado a hacer lo que le plazca, demostrando quizás, su verdadero "rostro".

Es posible reforzar esta interpretación considerando los antecedentes del presidente Kirchner en el manejo del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz, provincia que gobernó durante muchos años.

Un caso que demuestra estas maniobras, es la remoción del doctor Eduardo Emilio Sosa, ex procurador general de la provincia de Santa Cruz. En 1995, después de que el presidente Kirchner iniciara su segundo mandato como gobernador nuevamente, fortalecido por las urnas, se sancionó una ley que desdobló la estructura del Ministerio Público imitando el modelo nacional: un agente fiscal y un defensor oficial. Esto implicó la eliminación del cargo de procurador general, y la remoción del doctor Sosa en forma arbitraria, sin un proceso formal de sustitución. En distintos pronunciamientos, tanto de tribunales provinciales en Santa Cruz, como de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se le dio la razón al planteo del doctor Sosa, ordenando al gobierno provincial a hacer lo necesario para restituirlo en el cargo. No obstante, casi 10 años después de iniciada la batalla judicial, aún no se dio cumplimiento a la sentencia (el doctor Sosa rechazó un ofrecimiento de indemnización por los perjuicios ocasionados).<sup>64</sup>

Un grave antecedente del presidente Kirchner, que data de 1995, imitando el estilo del ex presidente Carlos Menem a quien tanto fustiga, es la ampliación del Tribunal Superior de Santa Cruz, elevando

<sup>63</sup> Diario "La Nación", reportaje al nuevo consejero oficialista doctor Carlos Kunkel, 29-1-06, página 8, en el que aseguró que el oficialismo no vetará la remoción de los jueces acusados.

<sup>64</sup> Asociación por los Derechos Civiles, La Corte y los Derechos 2003-2004, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2005, página 452.

sus miembros de 3 a 5, parantizándose su propia mayoría automática con gente de estrecha confianza.<sup>65</sup>

Existen otras maniobras que apuntan a controlar la Justicia. A pesar de existir dos vacantes en la Corte Suprema, el gobierno decidió que por ahora no las va a cubrir. Existe un reclamo airado de ONG y de algunos partidos políticos de aprovechar las vacantes para reducir el número de jueces de la Corte de 9 a 7. Pero el gobierno no se ha definido, pareciera que prefiere contar con un "as" en la manga por si es necesario cubrir las vacantes en algún momento políticamente más oportuno, quizás, cuando la reducción del Consejo de la Magistratura se concrete. Aquí, no ha valido el argumento de que tal reducción redundaría en una agilización de los trámites ante el alto tribunal.

Es cierto que el Consejo de la Magistratura no funciona a la perfección. Todo lo contrario, hay varias reformas que pueden mejorar su funcionamiento.

Como se ha expuesto, muchos de los problemas que entorpecen el trabajo del consejo se deben a los reglamentos que rigen su funcionamiento interno, con lo cual no es necesario reformar la ley. Pero, fundamentalmente, se ha debido a la falta de voluntad política de los representantes del propio oficialismo para impulsar esos cambios. Por otra parte, es ingenuo suponer que el diseño institucional podrá suplir las deficiencias en las votaciones. Cuando el problema no es la herramienta sino las conductas, el cambio de herramienta no traerá aparejado las mejoras deseadas.

Asimismo, ha quedado demostrada la brecha entre el discurso oficial y los hechos. En este sentido, la embestida discursiva contra la corporación judicial, se debe contrastar con los aumentos salariales a los jueces, que fueron acordados con el jefe de Gabinete, así como el hecho de que el proyecto les otorga una ventaja comparativa en la comisión de selección, al excluir a los abogados de ella, así como se concedió el reclamo de los jueces para que exista un plazo de prescripción o caducidad de las denuncias y, para que sus representantes integren la Comisión de Acusación. Asimismo, inclinó la balanza a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos los conflictos de competencias que el consejo mantiene con el alto tribunal.

Durante la primera quincena de enero de 2006, hemos leído en los diarios, las negociaciones que se llevan adelante entre el gobierno y diputados de la oposición para lograr que acompañen el proyecto

(la aprobación requiere una mayoría especial de 129 diputados, número que el Frente por la Victoria no alcanza por sí solo). En especial, a pesar de que el radicalismo ha expresado su oposición al proyecto, funcionarios del gobierno negociaron con gobernadores radicales cercanos (de las provincias de Mendoza y de Santiago del Estero), para que éstos instruyan a los diputados que les responden a aprobar el proyecto.

De igual forma, la propia senadora Cristina Fernández de Kirchner, se reunió con los diputados nacionales que responden al intendente de la ciudad de Córdoba, Luis Juez.

La otra estrategia del gobierno, de no alcanzar los votos necesarios, sería incorporar algunas modificaciones al proyecto que aprobó el Senado que fueron propuestas por el sector que responde al duhalismo, y con ello alcanzar 129 votos. Esta maniobra sería funcional a los deseos del gobierno, ya que el proyecto no sería rechazado en su totalidad, sino que los cambios obligarían a remitir nuevamente el proyecto a consideración del Senado, donde el oficialismo cuenta con los dos tercios necesarios para desestimar las modificaciones y aprobar el proyecto original. Con lo cual, sólo restaría remitir la ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En definitiva, el proyecto del gobierno de reducir el consejo implica un retraso en términos de calidad institucional con la sola intención de controlar la Justicia, equiparable al aumento del número de jueces de la Corte Suprema durante la presidencia de Menem.

Por lo antedicho, rechazo este proyecto de ley, por ser violatorio de la Constitución Nacional al alterar el equilibrio existente entre todos los estamentos. Teniendo a la vista el testimonio de cómo actúa el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, se ve con claridad la enorme distancia que existe entre sus declamaciones de eficiencia y transparencia y sus verdaderas intenciones a través de las acciones y las votaciones de sus representantes.

22

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA ROSSO

**Fundamentos del apoyo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Es necesario que deje planteado, mi absoluto desagrado con menciones de algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra, en cuanto los integrantes de mi bloque estaríamos congraciándonos con la Casa de Olivos. Tal mención me ofende como legisladora.

Parece que por representar con coherencia y serie-

<sup>65</sup> Tiempo después, en 2001, ante una vacante producida, designó a Carlos Alberto Zannini, el actual secretario legal y técnico de la Presidencia. Fue ese tribunal el que avaló un proceso de reforma constitucional ilegal que le otorgó a Kirchner como gobernador la posibilidad de la reelección indefinida (ver *Justicia era Kirchner*, por Pablo Abiad y Mariano Thieberger, Marea Editorial, Buenos Aires, 2005, página 27).

dad a quienes nos eligieron, estaríamos obligados a manifestar disidencias con nuestros colegas en el Senado, o con los compañeros que cumplen funciones ejecutivas.

Como se encuentra trabado el debate argumental, nos parece que en el nudo del mismo la oposición ha logrado incluir la cuestión de la división de poderes (tema del derecho constitucional), cuando se repite la necesidad de preservar la independencia del Poder Judicial.

Los argumentos de la oposición, afirman que el artículo 114 Constitución Nacional, tiene como fin, precisamente, garantizar la independencia del Poder Judicial y preservarlo del avance del Poder Ejecutivo.

Entendemos que no es esa la teleología de la norma constitucional, pues la misma parte de un presupuesto: el nombramiento de los jueces es una facultad del Poder Ejecutivo.

Art. 99. – El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:

4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto.

Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.

Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite.

Por lo que el artículo 114 sólo regula la propuesta en terna vinculante que formulará el Consejo de la Magistratura. Por ello, la temática de la división de poderes, está mal insertada en el debate.

En realidad lo central debería ser el equilibrio que dispone el artículo 114, teniendo en cuenta que la facultad de nombramiento es del Ejecutivo y la facultad del acuerdo es del Legislativo (Senado).

Entonces tenemos que en el enfoque de la división de poderes, la solución que da nuestra Constitución y todas las Constituciones occidentales, es justamente la contraria a la que sostiene la oposición: al poder que limita en la designación de los jueces es el Judicial. Por lo cual mal se puede preservar la independencia del Poder Judicial, cuando justamente la Constitución no quiere que se inmiscuya en el nombramiento de los jueces.

Entrando de lleno en la temática del equilibrio en el Consejo de la Magistratura, la Constitución Nacional en su artículo 114 dice: El Consejo de la Ma-

gistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Serán sus atribuciones:

O sea:

Existen por tanto dos elementos del conjunto para equilibrar:

- La representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular.
- La representación de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico.

Justamente en la intervención de la diputada Carrió, ésta acaba de relatar cómo el equilibrio que se buscaba en las discusiones de la convención constituyente de 1994, era precisamente el equilibrio entre los representantes políticos legislativos con el sector representante de las ciencias jurídicas.

Luego se refirió a la problemática de la mayoría y la minoría dentro de la representación política.

El proyecto con media sanción del Senado, respeta este equilibrio escrupulosamente: 6 representantes para la política y 6 representantes de las ciencias jurídicas. El restante es, un representante del Poder Ejecutivo.

El "oficialismo" no es una categoría constitucional en esta temática. Es una creación, una abstracción coyuntural que utiliza convenientemente la oposición. Pues coyunturalmente el oficialismo (la primera minoría) de las Cámaras, es del mismo color político, que el Ejecutivo.

Pero nosotros no podemos legislar con sentido de la oportunidad (ni ser oportunistas), tenemos que solucionar los graves problemas que nos presenta el actual Consejo de la Magistratura, y el diagnóstico del problema se llama corporativismo en los representantes de las ciencias jurídicas y no se encuentra en la representación política.

En el proyecto con media sanción del Senado, se propone un representante por el Poder Ejecutivo (poder que por el artículo 99 es quien tiene la responsabilidad del nombramiento de los jueces con acuerdo del Senado) y seis representantes del Poder Legislativo (2 por la mayoría y 1 por la minoría por cada Cámara). Todos son los representantes del pueblo aquellos que deliberan y gobiernan por mandato del pueblo.

Incorporar en el debate el concepto de oficialismo, es manosear la Constitución Nacional, es tener

vuelo bajo en la visión política, es: querer legislar con visión inmediatista, en lugar de legislar para el futuro solucionando los problemas de hoy.

La diputada Marcela Rodríguez, refirió que la mejores propuestas y actuación en el Consejo de la Magistratura fueron la de los representantes de la minoría legislativa. Respeto su opinión, supongamos que así fuere, y en ese caso los representantes de la minoría legislativa, también me representaron como ciudadana, y seguramente quienes actuaron mal, no los hicieron por ser mayoría, porque conengamos que las mayorías parlamentarias fueron bien distintas por ejemplo en 1999, en 2001 en 2002 y 2005.

En este debate se escuchan desde los bloques opositores argumentaciones que encubren posiciones no dichas: se habla de un supuesto oficialismo que incluye al Poder Ejecutivo y a las mayorías de las Cámaras, porque no se quiere reconocer que se está defendiendo la actual composición de los representantes legislativos, en la que la minoría parlamentaria tiene igual representación que la mayoría, lo que objetivamente es absolutamente injusto e indefendible; se habla de preservar la independencia del Poder Judicial confundiendo con el equilibrio previsto para el Consejo de la Magistratura, para omitir que en realidad se está en contra de las disposiciones constitucionales de 1994.

Por ello quiero rescatar la honestidad intelectual de la Federación Judicial Argentina que adhiere a la CTA, que nos ha hecho llegar a todos los diputados su posición, cuando reconocen que su disidencia más que con el proyecto en tratamiento, que la tienen, es con la Constitución de 1994 a la que consideran que otorgó demasiadas facultades a los poderes ejecutivo y legislativo en la designación de los jueces. Esta es una posición coherente y seria, que particularmente valoro, aunque no tenga remedio con la vigencia de las actuales disposiciones constitucionales.

23

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ROZAS

##### **Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos**

##### **Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

A esta altura del debate quiero señalar que estamos frente a un serio riesgo de agravar en nuestro país la pérdida de confianza en la administración de la Justicia.

Se compromete con ello uno de los factores más críticos para el funcionamiento del Estado moderno.

Con este proyecto de ley se va a generar un verdadero drama para la mayoría de los jueces que quieren preservar su independencia del poder político y dictar justicia con probidad.

Pero a su vez, para el común de la gente, para los empresarios y los trabajadores, para todos los sectores sociales, lo que estamos debatiendo resulta de primordial importancia, ya que los ciudadanos no tienen más remedio que confiar en la Justicia, como el último refugio de sus derechos y de la seguridad pública.

Las garantías de seguridad que crea nuestra constitución con la finalidad de defender las libertades y evitar la concentración de poder son ahora el blanco de un ataque, de un grosero avasallamiento que no encuentra justificación, sino en el interés político circunstancial de un gobierno.

Nadie ignora que, el porvenir de las instituciones republicanas en la Argentina depende de toda una estructura de normas y de órganos separados e independientes, de contención del poder, que se pone en marcha bajo la constitución para proteger a los ciudadanos en su libertad y sus derechos.

“La única ventaja que un pueblo libre posee sobre otro —decía Montesquieu— es la seguridad que cada uno tiene de que el capricho de uno solo, no le privará de sus bienes o de su vida.”

Así se ha proclamado enfáticamente entre las declaraciones, derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional, cuyo artículo 29 sanciona con una nulidad insanable la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público o sumisiones y supremacía a gobierno o persona alguna.

Se debe reconocer que la ciudadanía política no sólo gira en torno al vínculo entre electores y gobernantes, sino a la orientación de sus decisiones, sea hacia el bien público o hacia fines privados.

Por ello, una de las dimensiones de la ciudadanía política es inseparable del control de gestión de los funcionarios públicos y su obligación de rendir cuentas en tiempo y forma.

Y no hay control de la política sin una verdadera división de poderes, donde cada uno de ellos está legalmente dotado de facultades para controlar y sancionar la conducta de los otros, esto es, donde nadie goce de impunidad.

En nuestro país y en América Latina, la tradición de presidencialismo autoritario o no, obligó a realizar en los últimos tiempos, reformas constitucionales y legales encaminadas a fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Ha sido el criterio más generalizado lograr que los magistrados judiciales sean identificados inicialmente por consejos de la magistratura, como se hizo en nuestra Constitución de 1994.

Se logró establecer, con rango constitucional, un mecanismo que contribuya a reducir la politización del proceso de selección y aumentar el profesionalismo e independencia de los magistrados judiciales.

La institución se ha extendido a las constituciones provinciales como un intento de mejorar potencial-

mente el sistema de administración de justicia, un componente esencial de la ciudadanía civil para la protección de sus derechos.

Cuando el gobierno del presidente Kirchner propuso reformas del sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema, se alentó la posibilidad de elegir juristas de prestigio reconocidos por su independencia.

Aunque la verdadera prueba de independencia de la Corte Suprema está todavía por verse.

Me pregunto ¿cuál será su comportamiento cuando deba expedirse sobre las facultades del Poder Ejecutivo y sobre esta reforma del Consejo de la Magistratura, cuya inconstitucionalidad resulta evidente?

Porque ahora va a desvirtuarse por completo el mandato constitucional impuesto con la reforma de 1994.

Se ha roto el equilibrio constitucional en beneficio del oficialismo gobernante para consolidar un sistema más politizado, menos pluralista y sin contrapesos eficaces en la administración de la justicia.

Está claro que la reducción en el número de miembros resulta claramente inconstitucional porque rompe el equilibrio que establece el artículo 114 de nuestra Carta Magna, entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, así como de otras personalidades del ámbito académico y científico, que deben integrar el organismo.

Con la nueva composición, el gobierno pasará a controlar el Consejo de la Magistratura sin ninguna clase de contrapesos legales o institucionales.

Para cualquier votación importante hacen falta los dos tercios y con la propuesta de reforma no se podrá lograr quórum sin un consejero oficialista, es decir que los representantes del gobierno podrían bloquear cualquier decisión.

Al contar con una mayoría suficiente, los representantes de los órganos políticos podrán decidir con un criterio ajeno al jurídico cuestiones tan trascendentes como la gestión de los recursos y la ejecución del presupuesto.

También se incrementará peligrosamente la injerencia política en las medidas disciplinarias sobre los jueces y las facultades reglamentarias que hacen al funcionamiento y organización del tribunal.

Una de las organizaciones más prestigiosas de los Estados Unidos en el ámbito de los derechos humanos y la defensa de las garantías civiles y políticas, como la *human rights watch* (*human rights watch*) se ha pronunciado críticamente sobre este proyecto advirtiendo que las medidas propuestas van a generar más daños que beneficios, al debilitar la confianza pública en la imparcialidad e independencia de la Justicia.

Con acierto señala esta organización, que los abogados, jueces y académicos que participan en el Consejo de la Magistratura, adquieren legitimidad debido a su prestigio profesional, sus conocimientos y su reputación de ecuanimidad.

Esta composición mixta, de la que ahora se elimina toda representación de la segunda minoría legislativa, asegura que los criterios políticos que invariablemente afectan la toma de decisiones en el área judicial, como en cualquier otra, se contrapongan a consideraciones profesionales o legales.

“Tal equilibrio –puede leerse en el crítico documento– es de la mayor importancia cuando se trata de la nominación y remoción de los jueces.”

Es evidente que el rechazo a este proyecto para controlar al Consejo de la Magistratura, se ha generalizado a distintas organizaciones no gubernamentales.

Todas ellas han puesto el acento en la concentración de poderes y el predominio del oficialismo sobre la administración del Poder Judicial.

En particular el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, ha afirmado que esta propuesta es un sinónimo de manejo absoluto del poder político, que viene a emular la antigua metodología de elección de los jueces por la Comisión de Acuerdos del Senado a propuesta del Ejecutivo.

El innecesario apuro para tratar este proyecto en sesiones extraordinarias y la insistencia del gobierno pese al rechazo de amplios sectores de la opinión, pone a las claras la vocación hegemónica del oficialismo.

Creo sinceramente que no debemos apoyar ni habilitar el tratamiento de este proyecto porque la reforma del Consejo de la Magistratura debe hacerse con tiempo suficiente de debate, sin apresuramientos y con la participación previa de todos los sectores que integran tanto el consejo como el Jurado de Enjuiciamiento de la Nación, por mandato constitucional.

Si por un abuso de la mayoría parlamentaria lograra sancionarse este proyecto, el poder político tendrá en sus manos el manejo del Poder Judicial para designar y remover jueces a su arbitrio, reasumiendo facultades expresamente limitadas por la Constitución Nacional, para contrarrestar las tendencias de una Justicia adicta.

En consecuencia tenemos derecho a preguntarnos si el gobierno está construyendo alguna forma de impunidad futura y, en el mejor de los casos, si está dimensionando adecuadamente el grave retroceso que este proyecto entraña para la calidad institucional de nuestro país.

Habrà un antes y un después de la sanción de este proyecto en la Argentina.

Se habrá puesto en evidencia una visión cesarista del poder.

Que nadie se confunda en adelante con el sentido progresista de un gobierno, que alguna vez fue su ropaje de circunstancias.

Queda claro que el presidente Kirchner invierte muy poco en construcción de ciudadanía y en el progreso de la democracia.

Lamentablemente este gobierno empeña más esfuerzos para asegurarse impunidad, haciendo de las instituciones republicanas un obstáculo para sus ambiciones hegemónicas.

Duele recordar los atropellos a la constitución que vivimos en nuestro país, pero que tarde o temprano hemos sabido superar.

Por ello, les pido que nadie se ilusione: nunca el poder democrático será sinónimo de impunidad en nuestra República.

24

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SOLANAS

#### **Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

La modificación del Consejo de la Magistratura tiende a otorgarle una mayor rapidez y solvencia a la designación y juzgamiento de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial, realiza varias modificaciones que tienden justamente a ello, apuntando a tomarlo mucho más expeditivo, y a evitar que el gran número de integrantes que antes poseía lo conviertan en un organismo demasiado burocratizado y con gran cantidad de asesores, que además de significar un desembolso importante de dinero, importa a suerte de "demasiada burocracia".

Es menester recordar que el Consejo de la Magistratura surge a través de una manda constitucional contenida en nuestro artículo 114 que en el segundo párrafo establece que "El consejo será integrado periódicamente de modo que procure el equilibrio entre los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico en el número y forma que indique la ley".

En este sentido, entonces, debe estar la legislación vigente previendo el fino equilibrio entre todas las fuerzas que lo componen, teniendo, no sólo a que exista una representatividad, que es el concepto descrito anteriormente, sino también que ésta no se vea dañada porque una de las partes pueda poseer mayor poder que la otra, o bien que este organismo tenga una estructura demasiado "pesada" que implique que sus decisiones se vean demoradas.

Se ha criticado el proyecto aduciendo que el proyecto rompe el "equilibrio" que la Carta Magna expresa en su artículo 114. Nos preguntamos ¿dónde existe tal cosa?

Equilibrio no necesariamente significa igualdad. La ley que se pretende reformar nunca tuvo igualdad entre sus miembros.

El concepto constitucional significa que ninguna de las partes representativas en el Consejo de la Magistratura pueda adoptar por sí decisiones en cuanto al nombramiento y remoción de jueces, en cuanto al Jurado de Enjuiciamiento, etcétera, y el proyecto que estamos debatiendo claramente conserva este concreto. Aquí nadie puede por sí solo, y bajo su exclusiva potestad de decisión tomar una medida que implique la remoción o el nombramiento de un juez y magistrado.

Siendo un organismo constitucional de vital importancia deben cuidarse todos los detalles para que la vitalidad que debe existir en él, se vea reflejada en todo momento, y la sociedad observe que no se trata de una mera estructura de personas que en el fondo no resuelven nada, sino que él mismo cumple la función para la cual fue creado, no sólo ser el recinto donde se juzgue a los jueces por mal desempeño en sus funciones, sino también que implique que el concurso de los magistrados para cubrir las vacantes que existan en el ámbito de la Justicia, sean lo más limpias y transparentes posibles.

Sin lugar a ninguna duda, la modificación que se propone tiende a lograr este ansiado objetivo, y a ella me referiré.

Observamos que el artículo 1º del proyecto tiende a reducir sensiblemente el número de miembros. Antes por la ley 24.397 su número era de veinte, ahora se proyecta que sean solamente trece (13) variando en consecuencia su composición con relación al anterior. Así los jueces serán solamente tres (antes eran cuatro). Los legisladores de ocho pasarán a ser sólo seis, en donde se observa que están representados tanto la mayor como la primera minoría entre sus integrantes, ya que se prevé que serán tres legisladores nombrados por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores, donde dos representarán a la mayoría y uno a la primera minoría, como corresponde en una democracia.

Los representantes de los abogados serán ahora sólo dos. Antes eran cuatro, quedando inalterable el representante del Poder Ejecutivo y el representante académico será sólo uno, mientras que en la ley anterior eran dos. Aquí nos detendremos un momento. Desde la oposición se ha criticado el incremento de miembros del poder político en desmedro de otros. Se ha dicho, sin razón alguna, que el poder político poseería el "derecho a veto", lo cual es incorrecto, ya que esta interpretación es desconocer como es el "juego" de las mayorías y minorías en una democracia.

Los representantes del poder político, que han sido elegidos legítimamente por la ciudadanía, con lo cual de un modo indirecto esta, ésta representa (así son las democracias modernas) —nadie delibera ni gobierna sino a través de sus representantes— y esto son justamente los integrantes de ambas Cámaras, son los que están representados en el Consejo de la Magistratura a través de dos integrantes por la mayoría y uno por la minoría.

Decir que éstos se podrán de acuerdo para “bloquear” decisiones importantes en dicho seno, es tener una visión absolutamente distorsionada de la realidad y es adelantarse a los acontecimientos con “preceptos” que a priori son absolutamente inconducentes.

Con el criterio de aquellos que ven “fantasmas” donde no los hay podemos también imaginarnos cierta “convivencia” entre algunos legisladores de la oposición y abogados, o porque no jueces, o ellos forman una “casta” que nunca podrán ser sospechados de una determinada “parcialidad” cuando la realidad de los hechos nos muestran que ello ha sucedido en algunas decisiones adoptadas por un grupo de “jueces” que incluso ha merecido el juicio político a altos miembros del Poder Judicial.

Lo que debe interesarnos es que ninguno de los “poderes” que conforman el Consejo de la Magistratura puede adoptar ninguna decisión si antes no existe un consenso claro con los demás sectores que lo conforman, nadie posee el poder absoluto, ni mucho menos, respetándose a rajatabla el tan mentado “equilibrio” que la manda Constitucional establece en el artículo 114 de la Carta Magna.

Otra variante importante es la relacionada con la presidencia del Consejo de la Magistratura. En la ley 24.397, ésta le correspondía al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora su presidente y su vicepresidente serán elegidos por los miembros del consejo, desapareciendo la figura del presidente de la Corte Suprema como un integrante del mismo.

Por otro lado antes se permitía la reelección de los miembros por un periodo. Ahora de acuerdo a la modificación en el artículo 3° se establecerá que durarán en sus cargos cuatro años pudiendo ser reelectos con intervalo de un periodo.

Asimismo, las decisiones que adopte en las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión Disciplinaria, se adoptarán por una mayoría absoluta. Antes se requería una mayoría especial de las dos terceras partes de sus miembros. Ello lo torna además de más operativo, más sencillo al reunir una mayoría simple, que es donde se adoptan las decisiones de la mayoría de los órganos disciplinarios.

Además se prevé la remoción de los abogados de la matrícula federal, y del ámbito académico y científico por el voto de las tres cuartas partes de los miembros totales del cuerpo, mediante la implementación de un sistema que asegure en todo tiempo el derecho de defensa de aquella persona acusada de la comisión de un hecho grave que su remoción.

La designación del presidente del Consejo de la Magistratura, que antes recaía en la figura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la realizan sus pares mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros y deberá ejercer las funciones que le acuerda la ley, que básicamente no han sufrido grandes modificaciones.

Las sanciones disciplinarias han variado agregándose que ellas podrán ser advertencia, apercibimiento y multa de hasta un treinta por ciento de sus haberes.

En cuanto a la acusación (inciso d) del artículo 9° de este proyecto establece que cuando sean los tribunales superiores los que adviertan la comisión de ilícitos deberá remitir la denuncia al Consejo de la Magistratura, quien la comunicará luego al Poder Ejecutivo. Antes esta composición estaba integrada por mayoría de legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados, según el artículo 15 primera parte. También varía sustancialmente la integración del Jurado de Enjuiciamiento que antes se componía de nueve miembros y ahora sólo siete, variando en consecuencia también la cantidad de jueces que la integran y de legisladores y abogados de la matrícula. Se prevé asimismo que los legisladores que la integran están representados tanto los de la mayoría como de la minoría.

Ello está en perfecta consonancia con el espíritu del proyecto de ley que tiende a otorgarle una mayor fluidez al juzgamiento.

Este Jurado de Enjuiciamiento dura sólo por el tiempo en que duren los procesos en trámite; antes duraban cuatro años. Se prevé que comenzará a funcionar ante la convocatoria que le realice el Consejo de la Magistratura. —Y asimismo la duración es mientras se substancien los procesos de juzgamientos para los que le hayan sido encomendados y sólo con relación a estos— y su cargo es considerado una carga pública. Ninguna persona podrá integrar el Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados en más de una oportunidad, los jueces de cámara y los legisladores no podrán ser nuevamente miembros de este cuerpo, hasta tanto lo hayan integrado el resto de sus pares, en los términos previstos en el artículo 22 de este proyecto.

Ello básicamente significa que todos los legisladores tanto de la mayoría como de la minoría, en algún momento serán miembros de este Jurado de Enjuiciamiento ya que el proyecto prevé este mecanismo muy provechoso, porque sus miembros ya no sólo no durarán un tiempo estipulado, como lo era en la ley 24.397, sino que ahora irán rotando, cesando en sus funciones cuando finalice el proceso para el cual han sido especialmente convocados.

Esta es otra de las modificaciones trascendentes y que hace al funcionamiento de uno de los órganos dentro del consejo que poseen una liminar, ya que justamente se trata de aquel que se ocupará del juzgamiento de los señores jueces, donde se prevé claramente que los mismos poseerán todos los derechos de defensa y garantías constitucionales suficientes para que el proceso sea el más transparente y goce de todas las prerrogativas que debe poseer como un ciudadano más.

El carácter de los servicios de los magistrados y legisladores que se desempeñan en el Consejo de la Magistratura será honorario, debiendo percibir las

remuneraciones que les correspondan por sus respectivos cargos.

Los abogados percibirán una remuneración igual a la de un juez de cámara nacional de casación penal, y los del Jurado de Enjuiciamiento sólo mientras dure el caso al cual han sido sometido a juicio y hasta el dictado de la sentencia.

Las modificaciones propuestas significan un gran avance frente a la actual, y entrará recién en vigencia a partir del 16 de noviembre de 2006, muestra una mayor transparencia de las decisiones, las torna mucho más ágiles, y fundamentalmente significa un importante ahorro en cuanto a que los miembros algunos son honorarios y otros sólo perciben una remuneración mientras dure el trabajo que están realizando.

Con lo expresado, estamos de acuerdo en las modificaciones propuestas a un instituto de la importancia del Consejo de la Magistratura, entendiendo que las propuestas que aquí se votan lo dotarán de una mayor agilidad en las decisiones que se adoptarán en el futuro, y convencidos además que su texto para nada se encuentra en discrepancias con el que establece nuestra Constitución Nacional, ya que la respeta absolutamente, nadie podrá decir que este gobierno no ha respetado la Carta Magna, o ha manipulado la designación de jueces, cuando ha sido este gobierno el que se ha autolimitado para la designación de los miembros de la Corte Suprema, adoptando todas las medidas de transparencia en la designación de los mismos, tal es así que la ciudadanía toda, tiene una ingerencia y participación en el nombramiento de los mismos, por lo que de ninguna manera pueda a este gobierno le pretender manipular al Poder Judicial, como se ha pretendido siempre a través de aquellos que no entienden cómo funciona el sistema representativo, republicano y federal.

Por último es importante destacar que el Consejo de la Magistratura ha sido duramente cuestionado desde los diversos sectores de la sociedad, incluso desde la actual oposición partidaria, en sus siete años de existencia, y se ha reclamado insistentemente por su modificación.

El proyecto en cuestión otorga mayor fluidez, menos burocracia, mayor transparencia y difusión de sus actividades y es más barato, sin embargo, desde una posición corporativa se lo critica, con un objetivo meramente especulativo y político, lesionar la credibilidad y legitimidad del gobierno de la República.

25

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR  
DIPUTADO SORERO

**Fundamentos del rechazo del señor diputado al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Uno de los logros alcanzados por la reforma de la Constitución de 1994 fue la creación del Consejo

de la Magistratura. Construido sobre el objetivo de controlar el funcionamiento de la Justicia, garantizar su independencia, mejorar el mecanismo de selección de jueces y jerarquizar la Justicia a través de su formación y capacitación permanente de los magistrados; la conformación del Consejo de la Magistratura se reglamentó cuatro años después de su sanción constitucional.

Creo que sabiamente se previó un equilibrio entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, respetando la inclusión de las minorías entre sus miembros, representantes de los magistrados, de los colegios de abogados y de los representantes de las academias de derecho.

Esmerada atención, requería esta variada inclusión, para alcanzar un delicado equilibrio en la composición y poder cumplir con los objetivos propuestos por este consejo: independencia del Ejecutivo de turno, compensando a la representación corporativa autodefensiva con la representación de los colegios de abogados, los parlamentarios y los académicos, se conformó un fino dispositivo de relojería, cuya alteración de una de sus piezas impide que funcione el conjunto.

Es para resaltar entre sus propósitos la cualificación de la Justicia a través de la creación de la escuela judicial y de un jurado permanente de enjuiciamiento, que otorga seguridad jurídica al proceso, a la vez que cumple con el requisito de que las personas sean juzgadas por sus jueces naturales, como manda nuestra Constitución. Es importante observar —para no desnaturalizar el instituto— las funciones que fueron trasladadas al Consejo de la Magistratura que antes estaban en el Congreso (acuerdo y jurado de enjuiciamiento) en el Poder Judicial (presupuesto), entre otras. Esto indica que estas instituciones responden a una necesidad y tienen una historia detrás que impide analizarlas desde la conveniencia del momento o sólo desde la oportunidad política.

Destaco también como un detalle no menor, el momento de su creación: durante el segundo gobierno del doctor Menem que, como tristemente lo recordamos, se caracterizó —entre otras cosas— por una corte adicta y el nombramiento de jueces federales impulsados por quienes tenían la mayoría en el Senado por aquel entonces.

El significativo avance que produjo su constitución y puesta en marcha ayudó a mejorar el sistema de selección. También fueron importantes las denuncias recibidas y su sustanciación, la creación de la escuela judicial (que está demostrando sus frutos) y el funcionamiento del consejo que, después de superar la lentitud de su puesta en funcionamiento, está garantizando la independencia del Poder Judicial.

El proyecto original del Ejecutivo, cuyo tratamiento comenzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado presidido por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, es un proyecto que



atenta contra la independencia del Poder Judicial, alterando los equilibrios que tanto trabajo costó conseguir. El proyecto del Ejecutivo prevé reducir la composición de sus miembros eliminando representantes parlamentarios, de los colegios, de los magistrados y de las universidades y la transformación de los tribunales de enjuiciamiento. Estas reducciones dañarían las proporciones representativas y dejarían al Ejecutivo con amplios poderes dentro del Consejo de la Magistratura.

Este gobierno recorre un peligroso camino hacia la concentración de poderes avanzando sobre el Congreso —donde por sí ya tiene amplias mayorías— senda a la que se abona con la utilización de los decretos de necesidad y urgencia y las facultades otorgadas al jefe de Gabinete para la reasignación de los recursos aprobados en el presupuesto.

Este mismo Ejecutivo concentra su poder con un estilo cada vez más unipersonal, donde no se admiten ministros con peso propio y donde las provincias están subordinadas cada vez más al favoritismo del gobierno central, que acumula recursos de todo el país con una recaudación pocas veces conocida en la Argentina.

Por otra parte, las operaciones sobre la prensa independiente son conocidas y han sido denunciadas en varias ocasiones. A ello debemos agregar el abultado presupuesto destinado a publicidad oficial y las vinculaciones políticas a importantes empresarios de medios nacionales, nos da una idea del dispositivo de control que se cierra sobre la prensa.

Es en este contexto: de ansias de control, de triunfalismo y tentaciones hegemónicas donde se construye el ambiente para el mejoramiento de una Justicia independiente. En otro contexto semejante, rodeado de triunfos electorales y bonanzas económicas, el ex presidente peronista Carlos Menem avanzó en la pulverización de los organismos de control y en el debilitamiento de las instituciones republicanas.

Con estos precedentes, como vicepresidente del bloque de diputados de la UCR adelanto mi posición de firme rechazo a este proyecto de reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, que tendrá próximo tratamiento en la Cámara de Diputados, y advertimos que quienes conformamos el bloque radical no permitiremos que se avance por el camino de la desprotección de la independencia del Poder Judicial, última garantía de las libertades individuales y de protección de los intereses generales frente a las arbitrariedades del Ejecutivo.

De aprobarse este proyecto no se obtendría beneficio alguno para el mejor funcionamiento de la Justicia y lesionaría gravemente nuestro sistema democrático, que tanto nos cuesta sostener y desarrollar en nuestra República Argentina.

26

## INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA TATE

### Fundamentos del rechazo de la señora diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura

Como toda obra humana, las instalaciones de los regímenes democráticos son imperfectas y, por ende, merecen ser reformadas y perfeccionadas. Pero en todo proceso de reforma institucional están presentes tanto las circunstancias de tiempo y lugar como la organización de los poderes públicos.

Como característica fundamental de la vida colectiva, el poder político que se ejerce en un escenario democrático sólo puede ser legítimo si está vinculado a un orden legal, es decir, en la medida en que esté conformado en términos de Estado de derecho. Y allí aparece nuestra preocupación: ¿cómo se construye un poder democrático en un contexto marcado por una voluntad hegemónica y una tendencia manifiesta a la concentración del poder? ¿Cómo se institucionalizan las prácticas democráticas dentro del marco de baja calidad institucional que hoy exhibe la Argentina?

La enorme proliferación de decretos de necesidad y urgencia, la delegación de facultades del Congreso, el uso arbitrario del excedente presupuestario, constituyen situaciones que dejan de lado normas fundamentales de la República y la imprescindible división de poderes.

Es por ello que, al analizar el proyecto que nos convoca, debemos considerar el presente, pero también nuestra historia y la forma en que la misma se expresó en el marco constitucional reformado en 1994.

En ese sentido, cabe recordar que la reforma constitucional de 1994 fue resultado de un doble acuerdo:

—Por un lado, sobre un conjunto de derechos y garantías ciudadanos: se explicitaron los derechos políticos, se le otorgó rango constitucional al habeas corpus y la acción de amparo, se incorporaron la garantía del habeas data, los derechos ambientales y los derechos que asisten a usuarios y consumidores.

—Y, por otro, sobre ciertas reglas y procedimientos que organizan los poderes públicos: la iniciativa y la consulta popular, el ballottage, la figura del jefe de Gabinete, el tercer senador, la reelección y el acortamiento del mandato presidencial, la creación de la Auditoría General de la Nación, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura —que hoy se pretende reformar—.

La creación del Consejo de la Magistratura fue una iniciativa que, en el pensamiento de los convencionales constituyentes de 1994, llevaría a des-

politizar la Justicia y reafirmar el principio republicano de independencia del Poder Judicial. La introducción en nuestra Carta Magna de esta institución proveniente del derecho continental europeo, pretendió restaurar la confianza popular en la administración de justicia, la que se hallaba gravemente desprestigiada por la obscena injerencia en cuestiones judiciales del gobierno justicialista de entonces. En tal sentido, se buscó limitar las facultades discrecionales del presidente para la designación de los jueces, ya que nuestra historia no daba muestras precisamente de selecciones hechas en razón del mérito y las condiciones profesionales del candidato.

Considerando que no existe democracia sin justicia independiente, reconocida y percibida de tal manera por el conjunto de la ciudadanía, se le otorgó al consejo rango constitucional, constituyéndolo como un organismo pluralista integrado por jueces, abogados, académicos y representantes del poder político, cuyas funciones y competencias serían: seleccionar a los aspirantes a jueces sobre la base de concursos públicos, ejercer facultades disciplinarias y decidir la apertura del procedimiento de remoción —a través de un jurado de enjuiciamiento—, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto judicial, y dictar reglamentos relacionados con la organización del Poder Judicial.

La ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura fue producto de un difícil y consensado en el ámbito parlamentario, precisamente en el punto que hoy se pretende modificar: el de su composición. Resultó muy difícil llegar a los acuerdos necesarios que permitieran su constitución equilibrada, representativa y razonable, tal cual lo exigía el texto constitucional.

Luego de varios años de funcionamiento, nadie puede negar que el Consejo de la Magistratura cumplió con las expectativas que despertó su creación, al menos en lo que a la selección de aspirantes a jueces se refiere. Más allá de las críticas que se puedan hacer al respecto, sin duda alguna se exige ahora una base de idoneidad y profesionalidad que antes no existía, lo que progresivamente se refleja en la integración de los tribunales.

Es cierto también que quizás el consejo tenga una composición muy numerosa, que ello pueda haber dado lugar a cierta burocracia innecesaria y que no ha implementado las medidas necesarias para tener un Poder Judicial más ágil y eficiente. Todo ello podría dar lugar a pensar la necesidad de modificar la ley que regula su composición y funcionamiento, pero, en cualquier caso, lo que nunca se debe perder de vista es la necesidad de atender la razón que inspiró su creación, esto es, garantizar la independencia de la Justicia. Y las modificaciones propuestas al mismo en el proyecto de la senadora Kirchner no contemplan dicha razón por varios motivos.

En primer lugar, llama poderosamente la atención la urgencia y el apuro del Poder Ejecutivo nacional

para modificar la composición del consejo sin la real y activa participación de los actores involucrados en el mismo. Si el proyecto no tiene como objetivo principal asegurar el poder de veto del Ejecutivo en la Justicia, ¿para qué apurar la sanción de un proyecto como el que nos convoca sin un debate franco y abierto con la ciudadanía y todos los sectores integrantes del mismo?

Si esto no es así, ¿cuál es el sentido de encontrarnos discutiendo, en un período extraordinario de sesiones, una iniciativa para modificar la composición de un consejo que no comenzaría a funcionar antes de noviembre de 2006 y de un jurado de enjuiciamiento que empezaría a funcionar recién en marzo de 2007?

En definitiva, hubiera resultado auspicioso para la democracia argentina que se promoviera un modelo de sanción participativa, que permitiera el debate y tratamiento del proyecto con una participación adecuada, temporal y sustancialmente, de todos los actores sociales con interés en el mismo.

En segundo lugar, el proyecto no respeta el principio de equilibrio entre las representaciones de los diferentes estamentos integrantes del consejo, tal cual lo exige el artículo 114 de la Constitución Nacional. Efectivamente, en dicho artículo se requiere “el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”, y, renglón seguido, también incluye “a otras personas del ámbito académico”.

Este es, sin duda alguna, el motivo fundamental de nuestro rechazo y el de todo el arco de sectores y actores sociales y políticos que no forman parte del selecto grupo de obsecuentes del matrimonio presidencial ni se dejan someter a sus extorsiones.

Cuando el mencionado artículo 114 de la Constitución habla de “equilibrio”, ello no implica que deba existir igualdad entre la representación de los distintos estamentos, pero sí que debe estar asegurado que ningún sector tenga el poder para prevalecer en las decisiones ni para vetar determinadas resoluciones. Al reducir el número de miembros de cada estamento en beneficio del sector político oficialista, no se cumple con la letra ni con el espíritu del mandato constitucional.

Si prosperara la reducción del número de miembros del consejo, el gobierno adquiriría capacidad de veto en el consejo. Si bien técnicamente cinco sobre trece no pueden considerarse mayoría absoluta, constituye una mayoría con capacidad de impedir todas las resoluciones que exigen mayorías agravadas. Aunque lo nieguen hasta el absurdo a través de los medios masivos de comunicación tanto el jefe de Gabinete, como el ministro del Interior y el jefe del bloque de diputados oficialistas, con la modificación propuesta el Ejecutivo adquiriría la capacidad de impedir toda resolución que implique una mayoría especial de dos tercios de los miembros, como la nominación o remoción de los jueces.

Aunque la autora del proyecto le atribuya nuestra lectura a "cierta campaña", resulta innegable que, con la nueva integración del Consejo, el Ejecutivo pasaría de contar con el 25 % de la representación al 38 %, adquiriendo un poder de bloqueo de determinadas iniciativas que sin duda alguna genera enormes sospechas sobre los propósitos de esta reforma declarados oficialmente.

No nos cabe ninguna duda que la adquisición de esa capacidad de veto constituye el verdadero fundamento de esta iniciativa, porque la apertura de los procedimientos de acusación y la suspensión de los jueces requiere dos tercios de los presentes, y la remoción requiere tres cuartos de los miembros del Consejo. Precisamente por algo la Constitución Nacional previó el equilibrio entre jueces, abogados, académicos y legisladores en la integración del Consejo, para intentar frenar las tentaciones hegemónicas y garantizar la independencia del Poder Judicial.

En tercer lugar, la reducción de miembros prevista en el proyecto lesiona la pluralidad política y las posibilidades de representación de las minorías.

En una nota de opinión en un diario de alcance nacional publicada semanas atrás, el ministro de Justicia reconoció que la "idea básica ha sido la de reducir la cantidad de miembros para facilitar el quórum y los acuerdos necesarios para la toma de decisiones". Según el ministro, frente a "la conveniencia funcional de un órgano menos numeroso" —por cierto muy discutible, ya que ello depende más de la mecánica de funcionamiento que de 7 miembros más o menos—, "todos los grupos que integran el Consejo deben ceder algo excepto el Poder Ejecutivo, que tiene un solo representante y su eliminación significaría el incumplimiento de lo previsto constitucionalmente".

Para el ministro de Justicia, el hecho de que, en la composición actual del Consejo haya tantos representantes de las mayorías parlamentarias como de las minorías, "ha sido una decisión desacertada". Y fundamenta su postura argumentando que "el oficialismo, surgido del voto popular, necesariamente debe tener un espacio mayor que las minorías".

Nadie duda que la regla de la mayoría es un elemento constitutivo del funcionamiento del régimen democrático. Pero el principio de la mayoría no es ilimitado y para ello existen los mecanismos institucionales del Estado de derecho, que limitan el poder de la mayoría cuando sus decisiones lesionan los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando no se respeta el principio de legalidad o cuando no se avasalla la división de poderes —como en este caso—. Cabe recordar que el Estado de derecho republicano, históricamente precede a la democracia precisamente en el hecho de establecer un sistema de límites a los poderes públicos.

No se puede argumentar que no puede haber paridad entre la mayoría y la minoría, y menos aún en un organismo colegiado que justamente tiene, como

una de sus razones de ser en el marco del Estado de derecho, la función de asegurar la independencia del Poder Judicial. Cabe recordarle al señor ministro que los ciudadanos no votan una representación en el Consejo de la Magistratura, y, por lo tanto, no resulta aplicable el principio de mayoría tal como lo interpreta el Ejecutivo. Lo que plantea la Constitución es que los órganos políticos tienen que estar representados de manera tal que se asegure el equilibrio.

Adjudicar dos representantes a la mayoría y uno a la minoría puede considerarse arbitrario, ya que, si bien es el sistema utilizado para la elección de senadores, también puede argumentarse —y con mayor rigor— que los diputados se eligen por el sistema D'Hont y que ese es el sistema que resulta para todos más equilibrado y representativo. En un órgano con las funciones y atribuciones del Consejo, resulta imprescindible asegurar la pluralidad política, de manera tal que, sumada al equilibrio que da la coexistencia con jueces, abogados y académicos, neutralice los intereses corporativos que tanto critican el ministro del Interior y el propio presidente.

Democracia y Estado de derecho no son en absoluto instituciones antagónicas, aunque sus principios —la voluntad mayoritaria y el imperio de la ley en algún momento puedan entrar en contradicción. La democracia se rige por la regla de la mayoría basándose en el procedimiento del sufragio universal para organizar un sistema de designación legal y pacífica del poder. El Estado de derecho, por su parte, organiza un sistema de garantías de las libertades individuales que fija límites al ejercicio arbitrario del poder público, a través del respeto a la división de poderes y la sujeción a la letra constitucional.

En ese marco, el Consejo debe ser considerado, ante todo, una institución del Estado de derecho destinada a limitar la intervención en la Justicia de los órganos políticos resultantes de la elección popular; de allí que en su composición resultaría saludable evitar la sobre representación de las mayorías parlamentarias y defender la participación plural de las minorías.

En cuarto lugar, no resulta pertinente la presencia de un representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Para el ministro Iribarne, "esta nueva composición del Consejo corrige el error de haber minimizado la participación de los órganos resultantes de la elección popular". Al margen de esta lectura sesgada de la previsión constitucional, entendemos que no resulta justificable la presencia de un representante del Poder Ejecutivo, dado que las ternas de candidatos se elevan precisamente a consideración del presidente, quien tiene la libertad de elegir entre los propuestos.

La incorporación de la figura del representante del Ejecutivo en el Consejo constituye una manifestación evidente del interés presidencial de contar con "oídos propios" en cada rincón del escenario público, funcionales a su obsesión hegemónica.

En quinto lugar, el desplazamiento del presidente de la Corte Suprema como titular del consejo no se presenta como decisivo para mejorar el funcionamiento, la agilidad y la eficiencia del órgano. Necesariamente tiene que haber un contacto fluido y una coordinación de funciones entre los dos órganos más importantes del Poder Judicial, y eliminar el miembro de la Suprema Corte dentro del consejo sólo puede contribuir a aumentar las fricciones y hostilidades entre los mismos.

En sexto lugar, resulta cuanto menos caprichoso el criterio utilizado para la composición de las comisiones que se crearían a partir del artículo 12 del proyecto.

Por ejemplo, en lo que a la Comisión de Selección de Magistrados y escuela judicial se refiere, de la misma manera que no se incluyen senadores en la misma porque participar del acuerdo del magistrado, también debería eliminarse el representante del Poder Ejecutivo, que es quien selecciona dentro de la terna.

Razonamiento similar cabría seguir para la Comisión de Disciplina y Acusación, que quedaría integrada por nueve miembros de los cuales dos serían jueces que podrían ser reticentes a votar sanciones disciplinarias para sus pares.

En séptimo lugar, la modificación de la composición del Jurado de Enjuiciamiento demuestra una sobre representación de legisladores en el mismo, sin que quede claro además como se respetaría la representación de la minoría legislativa a través de la mecánica del sorteo.

La función de juzgamiento de los magistrados del Poder Judicial es un tema muy sensible que requiere de mecanismos que garanticen equilibrio y objetividad. Una vez más, nos parece que resulta necesario un debate más profundo y participativo tendiente a obtener un piso de consenso de todos los actores involucrados en la temática.

A esta altura de nuestra exposición entendemos queda absolutamente claro que tenemos sobrados motivos, razones y argumentos para no compartir ni la necesidad, ni la oportunidad, ni los mecanismos de tratamiento, ni los contenidos del proyecto de reforma.

Resulta evidente que no se trata de "desmesura" ni de "expresiones tremendistas" ni tampoco buscamos "entorpecer la gestión del gobierno". La permanente estigmatización y descalificación de cualquier opinión disidente revela y ponen al descubierto cuáles son las verdaderas y auténticas características que definen la forma de ejercer el poder del presidente de la Nación y su círculo áulico: intolerancia, prepotencia, desmesura, autoritarismo.

Cabe recordar, una vez más, que una reforma institucional no es una disposición menor en la historia de un país ni un acto intrascendente para la vida colectiva. Al reformar una institución de alguno de los poderes de la república se modifica, en mayor o menor medida, el marco jurídico en el que tie-

nen lugar las relaciones de poder, las reglas que rigen la selección de las autoridades y las modalidades de organización del poder. Y todo ello significa que, de alguna manera, puede llegar a cambiar también el régimen político.

Y es el régimen político el que define el modo de ejercicio del poder y determina si una sociedad es libre o despótica, ya que fija el sistema de protección que aporta la democracia contra los abusos del poder. No puede haber división de poderes y equilibrio entre poderes, ni control recíproco entre unos sobre otros, si no se garantiza la independencia del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para impartir justicia con la mayor imparcialidad posible, los magistrados deben estar libres de toda presión o interferencia de los otros poderes y de la opinión pública.

Todos sabemos que no existió en la Argentina una tradición de Poder Judicial como poder del Estado independiente, capaz de contener recíprocamente al Poder Ejecutivo y al Legislativo. El Poder Judicial se fue deslegitimando frente a la sociedad y no pudo constituirse en un actor con el protagonismo suficiente para fijar límites a los otros poderes y equilibrar el ejercicio del poder en el sistema republicano.

La intervención del poder político en la Justicia fue uno de los puntos más débiles de la democracia argentina. Y si bien no existe una garantía absoluta contra el riesgo de la concentración de poder, una apelación a la moderación de los actos de gobierno mediante instancias de contralor y sujeto a reglas de derecho, puede acercar a la sociedad a una convivencia ordenada y basada en un núcleo mínimo de valores compartidos: tolerancia, igualdad, libertad, solidaridad.

Sin embargo, una vez más, estamos ante la posibilidad de una nueva regresión autoritaria, echando por tierra los escasos avances que en materia de independencia del poder judicial hemos logrado desde que funciona el Consejo de la Magistratura.

En definitiva, estamos malversando la oportunidad de introducir cambios razonables y consensuados en la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura.

En un campo tan delicado como es el de la confianza popular en la independencia de la Justicia, no puede haber lugar para la existencia de la más mínima duda acerca de la intencionalidad política de los cambios y éstos deberían ser desechados ante la mínima sospecha. Sin embargo, para un gobierno como el del presidente Kirchner, que desprecia las normas más elementales de la convivencia democrática, que niega, descalifica y estigmatiza a la oposición surgida del voto popular, que subestima y degrada al Congreso Nacional, que supera todos los récords en materia de decretos de necesidad y urgencia, que administra arbitraria y caprichosamente el presupuesto nacional, una Justicia independiente no es importante, resulta más importante que sea sumisa y manipulable.

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA  
DIPUTADA VACA NARVAJA

**Fundamentos del voto afirmativo de la señora  
diputada al dictamen de las comisiones de Asuntos  
Constitucionales y de Justicia en el proyecto de  
ley en revisión por el cual se modifica el número  
de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Mucho han opinado los especialistas en el tema, pero nada se ha dicho respecto de cuál es el impacto, cómo influye y cuánto importa al ciudadano común la discusión que se ha instalado a través de los medios, no siempre con buena fe, respecto de la conveniencia o no de aprobar la reforma en la composición del Consejo de la Magistratura.

“Procurar el equilibrio”, es lo que ordena la Constitución Nacional en su artículo 114; pero, atención; no se trata de un equilibrio entre las apetencias políticas de un sector partidario o la ambición o poder de lobby de una corporación o factor de poder.

Muy por el contrario, lo que indica nuestra constitución en la conformación del Consejo de la Magistratura, es el “equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. Estableciendo además que “será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”.

Se han escuchado opiniones contrarias a la reforma propuesta argumentando que se instauraría un hegemonismo inaceptable, pero no aclaran que el oficialismo contaría con 5 votos y el resto 8 y que la mayoría especial es de 9.

Quienes con honestidad intelectual manifiestan dudas respecto de la conveniencia de realizar la modificación propuesta en el Consejo de la Magistratura no deben engañarse: muchos de quienes se oponen al proyecto que tiene media sanción del Senado argumentando el excesivo peso de lo que llaman “los políticos” en la composición propuesta, ejercen una presión y representan intereses que también son políticos, tienen una clara intencionalidad política, aunque ciertamente no son partidarios.

Muchos de ellos, que representan a grupos interesados en el tema, con poder de lobby y llegada a los medios tienen, por supuesto, todo el derecho de manifestar su opinión pero no pueden pretender reemplazar la voluntad popular.

En este sentido, no podemos soslayar que cuando se habla con desprecio de la injerencia de “los políticos entre comillas”, lo que se está despreciando en realidad es el sistema republicano.

No parece razonable, que en nombre del sistema republicano, sectores de poder con intereses diversos, pretendan prevalecer o neutralizar el poder que emana de las urnas.

Además, desde el punto de vista del funcionamiento republicano que tanto preocupa a muchos de los que han manifestado su opinión contraria a la reforma propuesta, es útil señalar que entre los objetivos que se pretenden alcanzar con la futura composición de Consejo de la Magistratura se destacan los de procurar agilidad en el diario funcionamiento y la toma de decisiones y ahorrar recursos que pueden tener mejor destino en un país como el nuestro con tantas necesidades todavía insatisfechas a pesar de la recuperación económica que vivimos.

Además, se mejora sustancialmente el modo de tratamiento y canalización de las denuncias de los particulares, pedidos de remoción y procesos disciplinarios, estableciendo el tratamiento obligatorio si no hay dictamen en los plazos establecidos para ello. Así se terminará con una triste costumbre argentina: el “cajoneo de expedientes”.

También se establece el carácter público de reuniones plenarias y expedientes, tendiente a evitar que entre gallos y medianoche se tomen decisiones cuyos fundamentos nadie conoce, posibilitando a todos los ciudadanos el acceso a la información respecto de lo actuado en el consejo.

En síntesis, no hace falta ser un especialista en la materia para advertir que el uso eficiente de los dineros públicos, el acceso a la información y la disminución de los niveles de burocracia de las estructuras estatales, contribuyen también al cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Nacional.

Del mismo modo que sería inaceptable que quienes representan la voluntad popular expresada en las urnas tengan en sus manos la toma de las decisiones sin la participación de los demás sectores que componen el Consejo de la Magistratura, también es preciso señalar que los distintos sectores involucrados no pueden de ningún modo pretender prevalecer sobre la representación de los órganos políticos emanados de la voluntad popular.

Al ciudadano común, sin conocimiento del tema y con cuestiones de la vida cotidiana más urgentes en que pensar, no se le escapa el hecho de que más allá de cualquier argumento técnico, quienes tienen circunstancialmente la mayoría al momento de votar una ley en el Congreso, así como también quienes representan al Congreso en el Consejo de la Magistratura, ejercen el poder que la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno le asignan a los órganos emanados de la voluntad popular, y que si estos fueran reemplazados por otros factores de poder: es decir, si la mayoría circunstancial fuera ejercida por grupos y corporaciones mediante la imposición de su poder de lobby, se estaría desvirtuando el sentido y la función que la Constitución Nacional da al Congreso.

Pero claro, como dijo el doctor Héctor Masnatta: “La defensa de los intereses sectoriales luce mejor si se la presenta como la tutela de valores nobles, como la independencia de la Justicia y la transparencia”.

En conclusión, señor presidente: No le tenemos miedo a la discusión y a las diversas opiniones que

se han vertido en torno de este tema, pero tenemos la legitimidad que los ciudadanos, con su voto, le han dado a este oficialismo, que asume su rol de acompañar todas las iniciativas que sean necesarias para un mejor funcionamiento del sistema republicano.

Como diputados del Frente para la Victoria, somos parte de un proyecto que dirigido por el presidente Kirchner, está recuperando mucho más que la economía y la esperanza.

Está volviendo a hacer andar a un Estado que estaba ausente y era incapaz de ponerse a la altura de las necesidades del pueblo.

Y para eso necesita que el Congreso sancione las leyes necesarias.

Para eso nos votaron nuestros conciudadanos.

Por eso acompañaremos con nuestro voto esta iniciativa.

28

#### INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ZOTTOS

#### **Opinión del señor diputado acerca del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el número de integrantes del Consejo de la Magistratura**

Voy a hacer una breve reseña de los puntos que considero importantes de este proyecto pero quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la modificación en el número de miembros de esta institución.

#### *Puntos a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura*

**Caducidad:** el proyecto establece que después de tres años de iniciado un expediente contra un juez, la causa pasará de la comisión al plenario para su "inmediata consideración". En la actualidad las causas contra los magistrados no tienen plazo de caducidad ni de prescripción. La discusión sobre el plazo de caducidad fue materia de debate durante todo el año en el Consejo de la Magistratura, donde el cambio fue impulsado por el oficialismo. En esta reforma se establece que el plazo de caducidad sólo se aplicará a los sumarios que se abran de aquí en adelante, dotando de mayor celeridad al procedimiento y evitando la congestión de causas que, afecta la eficiencia del instituto.

**Reuniones de comisión:** a partir de este proyecto todas las reuniones de comisión serán públicas, al igual que los expedientes. De acuerdo con la normativa vigente, las sesiones de la Comisión de Disciplina son reservadas. Este es un cambio fundamental y necesario para una institución de carácter democrático que no debería tener sesiones secretas. Ya que la publicidad de los actos de gobierno son la base fundamental del sistema democrático.

**Modificación en el procedimiento de remoción de magistrados:** la decisión de abrir un procedimiento

de remoción no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, éste pasará al plenario para su consideración. De esta forma se aceleran los procedimientos que tanta controversia han generado ya que, según la estadística el consejo ha tratado sólo 19 causas desde su creación.

**Unificación de las comisiones de Acusación y Disciplina:** durante los 7 años de funcionamiento del consejo, la experiencia indica que han existido dificultades para precisar qué conductas corresponden a una u otra comisión. Al efecto, podemos señalar que desde 1999 hasta 2005 un total de 142 expedientes cambiaron de giro entre ambas comisiones, por lo cual esta unificación permite dar mayor certeza en el giro y celeridad en la investigación, aportando nuevamente a la eficiencia de la institución.

#### *Los puntos en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura*

**Modificación al número de miembros:** más allá de las limitaciones que el proyecto impone a la representación de la segunda minoría, creo que limitar únicamente a seis (6) a todos los demás sectores: 3 jueces, 2 abogados y 1 representante del ámbito académico y científico, en lugar de procurar el equilibrio que impone la Constitución Nacional, deja librada la actuación de este órgano al arbitrio de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El principio de "equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal" goza de jerarquía constitucional de acuerdo con la clara redacción del artículo 114 de la Constitución Nacional, y su reglamentación normativa inferior, debe ajustarse, con la mayor precisión a los dictados de la norma madre, por ello no apoyo la modificación del artículo 2º de esta ley.

**Jurado de Enjuiciamiento:** la integración del cuerpo dejará de ser permanente y pasará a ser ad hoc, es decir, que se conformará cada seis meses, el tiempo máximo para tramitar un juicio político. Esto conlleva serias dificultades:

- El tiempo con el que contarán los nuevos miembros para adaptarse al procedimiento es muy breve para realizar un análisis profundo de las causales del enjuiciamiento.
- Una institución que es modificada cada seis meses no resulta estable, sobre todo con la función asignada de juzgar a un magistrado.

Por ello adelanto mi voto positivo al proyecto en general, aunque cuando se trate el proyecto en particular señalaré cuales son mis consideraciones.